

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  
ESCUELA DE DERECHO**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
ABOGADA**

**“PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR:  
DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”**

**DIRECTOR: DR. MARIO MELO CEVALLOS**

**ANDREA ISABEL FLORES RUILOVA**

**QUITO, JUNIO 2015**

Quito, 11 de junio de 2015

Señor Doctor  
Santiago Guarderas  
Decano  
Facultad de Jurisprudencia

**Ref. Informe disertación  
Andrea Flores Ruilova**

Señor Decano:

Me permito informar a usted que he leído la disertación de la estudiante Andrea Flores Ruilova, titulada "Procesos de justicia transicional en el Ecuador: derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación":

1. El tema de la disertación es actual y pertinente para un análisis jurídico.
2. La disertante se propone determinar si Ecuador respeta y garantiza los derechos de las víctimas. Para ello analiza el proceso ecuatoriano desde el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, la judicialización de casos y la ley pertinente. En general, me parece que se ha hecho un trabajo prolijo de recolección de datos de prensa. Sin embargo, me hizo falta un poquito más de análisis crítico y superar lo descriptivo. También me hubiera encantado que se discuta el análisis de convencionalidad de los procesos judiciales y del rol de la Comisión.
3. La disertación pudo haberse enriquecido a partir del análisis a profundidad de un caso, posiblemente uno de los judicializados, y explorar, más allá de la respuesta estatal, la forma cómo doctrinariamente, desde la libertad de la academia, se pudo haber resuelto a cabalidad el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.
4. La disertación está bien escrita, tiene citas apropiadas y, en general, cumple las reglas de un trabajo académico.

Considero que, a pesar de algunas cuestiones que podrían haber enriquecido la disertación, merece la calificación de 10/10 (diez sobre diez).

Cordialmente,

Ramiro Avila Santamaría  
DOCENTE

Quito, 12 de mayo de 2015

Doctor

Santiago Guarderas Izquierdo

**DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**

En su Despacho.-

Señor Decano:

Me refiero al oficio No. 120-SJG-15, de 4 de mayo de 2015, en virtud del cual me designa como profesor informante de la disertación "Procesos de justicia transicional en el Ecuador: derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación" de la señorita Andrea Flores Ruilova.

Mediante este informe, debo señalar que la disertación cumple con las exigencias de carácter metodológico.

Resulta interesante que inicie el primer capítulo con la revisión del concepto de derechos humanos. Plantearé en la defensa de su disertación el concepto propuesto por Gerardo Pisarello y Marcos Aparicio Wilhelmi y esperaré su comentario y análisis. Sin embargo creo que para indagar el contenido y alcance del derecho a la verdad es mejor relacionarlo con el deber de garantía del Estado y el subdeber de prevención e investigación. La discusión sería si esos subdeberes calificados por la Corte Interamericana de DDHH en su jurisprudencia como deberes de medio, no de resultado, pueden derivar en un derecho autónomo o un derecho subsumido por el debido proceso.

Por otro lado, la perspectiva histórica de la justicia transicional es sin duda la parte más destacada de la investigación.

En cambio, el análisis del derecho a la verdad lo encuentro incompleto, pues refiere el contenido constitucional del derecho, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no menciona la sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la verdad (sentencia No. 114-14-SEP-CC, caso No. 1852-11-EP, de 6 de agosto de 2014) que si bien no versa sobre un caso de justicia transicional, pretende darle contenido al derecho.

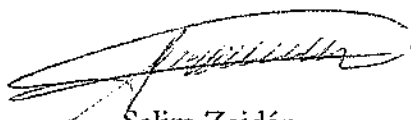
El desarrollo del capítulo II evidencia un importante esfuerzo de investigación del trabajo de la Comisión de la Verdad, de los casos que han sido judicializados y de la Ley para la reparación de las víctimas. Observo, sin embargo, que es insuficiente el análisis de la Ley, pues no se enfoca en su contenido e implementación, cuestionada por uno de

los abogados que ha patrocinado a algunas víctimas, el abogado Juan Pablo Albán. En el tercer capítulo se propone hacerlo, pero considero que podía profundizar en este aspecto.

No observo recomendaciones, solo conclusiones.

No obstante lo expuesto, la estudiante demuestra dominio sobre la materia, ha desarrollado una excelente investigación, por lo que considero merece la calificación de nueve sobre diez puntos (9/10).

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salim Zaidán', enclosed within a large, loopy oval flourish.

Salim Zaidán  
**PROFESOR INFORMANTE**

## Dedicatoria

*El presente trabajo de disertación se lo dedico:*

*A la memoria de mi madre Angélica Fedelicia por eterna tristeza-alegría que me dejó. Siempre estarás en mi mente y corazón.*

*A mi papá Carlos Oswaldo, por su ejemplo y esfuerzo diario de superación.*

*A mi hermana Angélica y sobrina Danna Orbe por ser mi familia y amarme como soy.*

*A Flor T. S. A. I. T por todo.*

## Agradecimiento

*Mi gratitud, a Dios y a Jesús por su gracia, fidelidad y amor.*

*A mis ñaños favoritos en todo el mundo Ofelia/Silvia/Oscar Ruilova. A mis primos que son como hermanos Beto/Mabe/Mirelly. A mis tíos/as, primos/as por su ejemplo y ganas de salir adelante. A mis abuelos María Isabel Tacuri, Segundo Manuel Flores, Julia Maldonado y Manuel Ruilova por su legado. A mi sobrina Dannita, la sonrisa que me impulsa, el amor que me conmueve. A Naomi, Aaron, Paz, Alegría, Ariel.*

*A mis eternos amigos, por su bendición, por su alegría en la tormenta, su compañía, por la enorme felicidad de dar y recibir cariño. A mis amigos/as de primer semestre; a Esteffy Molina Lizzete, Dayumi Serrano, Karla Riera, Alex David Guashpa, Andrea Álvarez, Doris Torres, Javier Campaña, Carina Valdez, Emil Vinueza, Lore Hidalgo, Katty Romero, Roberto Toscano, Valeria Dávila, Verónica Dávila, Michelle Erazo, Mayra Tirira, Amparito Esparza, Ruth Urbano, Estefy Chávez, Emilia Carrasco, Alex Urquizo, Feli Asanza, Consu Velasco, Daniela Alcántara, Caro Calderón, Nathy Yépez, Isra Landeta, Vicky Arias, Rocío Chauca, Cecilia Díaz, Maricusa; a mis chicos/as PPS (Silvy Otavalo, Sofy Román, Majó B. Vivanco, Jorge Fiallos y Stalin Andino).*

*Al Centro de Derechos Humanos de la PUCE y sus integrantes por enseñarme el valor de luchar por los derechos humanos por convicción. A Harold Burbano y Mónica Vera por mostrarme el lado bueno del Derecho. A la Dirección de DDHH por su apoyo y aporte, a Nadia Ruiz y a todos mis compañeros/as que contribuyeron a la realización de esta disertación.*

*A los maestros que han impulsado y formado mis conocimientos y valores: Judith Salvador, Íñigo Salvador, Sonia Merlyn, Ivette Haboud, Carolina Barahona, Sto. Padre Hernán Hidalgo, Boris Tobar, David Cordero, Efrén Guerrero, Verónica Guaranda.*

*A mi director de tesis, Mario Melo, quien me ha orientado en todo momento en la realización de esta disertación.*

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>RESUMEN.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPÍTULO I.- JUSTICIA TRANSICIONAL EN ECUADOR .....</b>	<b>5</b>
1.1 DESCRIPCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL .....	5
1.1.1 Contexto y definición de la Justicia Transicional.....	5
1.1.2 Perspectivas históricas y normativas de la Justicia Transicional.....	9
a) Perspectiva histórica de la Justicia Transicional.....	10
b) Perspectiva normativa de la Justicia Transicional .....	12
1.2 PRINCIPIOS RELATIVOS A LA JUSTICIA TRANSICIONAL.....	13
1.2.1 Principios de Joinet.....	14
1.2.2 Principios de Chicago .....	14
1.3 JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO .....	16
1.3.1 Definición de víctimas .....	16
1.3.2 Justicia Transicional y Derecho de las víctimas .....	18
1.4 DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.....	20
1.4.1 Derecho a la Verdad.....	20
1.4.1.1 Comisiones de la Verdad como mecanismo de la Justicia Transicional .....	22
1.4.1.2 Comisiones de la Verdad en el mundo.....	23
1.4.2 Derecho a la Justicia .....	28
1.4.3 Derecho a la reparación.....	32
a) Perspectivas del análisis del Derecho de Reparación .....	34
b) Dimensiones del Derecho de Reparación.....	35
c) Jurisprudencia de la Corte IDH sobre reparación .....	36
d) Diferencia entre indemnización y reparación.....	37
<b>CAPÍTULO II.- PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR .....</b>	<b>38</b>
2.1 COMISIÓN DE LA VERDAD EN EL ECUADOR .....	39
2.1.1 Contexto histórico de la Comisión de la Verdad en el Ecuador.....	39
2.1.2 Comisiones de la Verdad en Ecuador .....	42
2.1.2.1 Comisión de la Verdad del año 1996 .....	43
2.1.2.2 Comisión de la Verdad del año 2007 .....	46
Trabajo de la Comisión de la Verdad.....	49

Reacciones sobre trabajo de Comisión de la Verdad .....	53
2.2 DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA...	57
2.2.1 Descripción de casos relevantes judicializados por la fiscalía hasta julio de 2014.....	59
Casos Arturo Jarrín, Susana Cajas y Luis Vaca .....	59
Caso González y otras .....	63
2.2.2 Principales retos y dificultades de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía .....	64
2.3 LEY PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y LA JUDICIALIZACIÓN DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD (LEY DE VÍCTIMAS).....	67
2.3.1 Antecedentes fácticos y legales para la creación de la Ley.....	67
Objeción a la Ley de Víctimas .....	69
2.4 PROGRAMA DE REPARACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y REGLAMENTO DE ACUERDOS REPARATORIOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANO Y CULTOS, MUSEO DE LA MEMORIA Y OTRAS ACCIONES.....	70
2.4.1 Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento” del MJDHC.....	71
2.4.2 Directrices para regular el procedimiento para el programa de reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos Documentadas por la Comisión de la Verdad” .....	73
2.4.3 Museo de la Memoria.....	74
2.3.4 Otras acciones.....	75
 <b>CAPÍTULO III.- DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR. ....</b>	<b>77</b>
3.1 USO MANIPULADOR DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR.....	77
3.2 LOS PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN ECUADOR RESPONDEN AL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, EN BASE A LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.....	78
3.2.1 Sobre el derecho a la justicia y a la verdad.....	78
3.2.2 Sobre el derecho a la reparación de las víctimas .....	86
3.3 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE LA LEY .....	90
Criterios para realizar el Control de Convencionalidad.....	94
1) El principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, por parte de los Estados (quienes se han comprometido a cumplir el Pacto de San José y a obedecer las sentencias de la Corte) .....	95



II) el principio del efecto útil de los convenios, cuya eficacia no puede ser mermada por normas o prácticas de los Estados; III) el principio internacionalista que impide alegar el derecho interno para eximirse de aquellos deberes, a tenor del Art. 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados..... 98

4.- CONCLUSIONES..... 100

**5. BIBLIOGRAFÍA..... 104**

**6.-ANEXOS..... 119**

## **RESUMEN**

En el presente trabajo se estudió a los procesos de Justicia Transicional en el Ecuador, con el fin de determinar si el Estado ecuatoriano respeta y garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Los tres ejes sobre los que se desarrolló la investigación corresponden, en primer lugar, al estudio doctrinal de la Justicia Transicional, sus definiciones, su genealogía y la triada fundamental de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

En segundo lugar, se evidenció que el Ecuador vivió un periodo de violaciones masivas a Derechos Humanos, a partir de los elementos de la realidad nacional y por tanto era necesario crear procesos de Justicia Transicional para garantizar el derecho de las víctimas. A partir de esto se describió a los tres procesos a saber: Comisión de la Verdad, Ley de Víctimas y sus reglamentos y la Judicialización de Casos por la Fiscalía General del Estado.

Por último, y como parte del tercer eje, se concluyó que la Ley de Víctimas no cumple con el Control de Convencionalidad y no garantiza los derechos de las víctimas. Se concluyó que las instituciones estatales, las víctimas y sus familiares, deben prestar especial atención para que el uso de la Justicia Transicional no sea manipulado con el fin de ocultar la impunidad, ya que si bien es digno de destacar la importancia de la institucionalización y legalización de los derechos, ésta no debe ser únicamente formal, sino que debe estar acompañada de una transformación radical del Estado y sus instituciones.

## **ABSTRACT**

In this work we studied the process of transitional justice lived in Ecuador, in order to determine if Ecuadorian State respects and guarantees the rights of victims to truth, justice and reparation.

The three aspects on which the study was conducted are: the doctrinal study of Transitional Justice, its definitions, its origins and the fundamental triad of victims' rights to truth, justice and reparation.

Secondly, it is clear that Ecuador experienced a period of massive human rights violations, in base of the national reality's elements. Therefore, it was necessary to create transitional justice processes to ensure victims' rights. From this, there were described three processes: the Truth Commission, Victims Law and its bylaw and the judicialization of cases by the General Prosecutor Office.

Finally, as part of the third aspect, it was concluded that the Victims Law does not fulfill the conventionality control and does not guarantee the rights of victims. Also, it is obvious the state institutions, victims and their families should pay special attention to the use of Transitional Justice is not manipulated in order to hide impunity, because although are relevant the institutionalizing and legalization of rights, they should not be only formal, but must be accompanied by a radical transformation of the state and its institutions.

# INTRODUCCIÓN

En el Capítulo 1 se describirá y caracterizará a la Justicia Transicional. Así, en el apartado 1.1 se estudiará cómo surge la Justicia Transicional desde la doctrina, los instrumentos internacionales y desde una perspectiva histórica y normativa. En el punto 1.2, se analizarán los Principios relativos a la Justicia Transicional como son los Principios de Joinet y los Principios de Chicago. En el argumento 1.3, se definirá a las víctimas y se diferenciará a las víctimas del delito y a las víctimas de abuso del poder. Se establecerá una conexión entre la Justicia Transicional y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

En el punto 1.4 se definirá y caracterizará a la triada fundamental de la Justicia Transicional: como son los derechos a la verdad, justicia y reparación, haciendo un énfasis en la necesidad de construir una verdad histórica, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas en base a los cinco estándares de reparación.

En el Capítulo II, se profundizará en el estudio de los procesos de Justicia Transicional en el Ecuador, dada la importancia y trascendencia de esta temática en América Latina, con el fin de abrir un debate académico real sobre Justicia Transicional y las implicaciones en nuestro país. En este sentido, el reto principal de este estudio es demostrar como se han desarrollado estos procesos en el Ecuador y cual ha sido la participación de las víctimas en estos procesos.

En el apartado 2.1, se estudiará la conformación y trabajo de las Comisiones de la Verdad en Ecuador desde un contexto histórico y como una lucha de los grupos de víctimas y familiares de ellas por alcanzar sus derechos, fundamentados en el derecho a la verdad.

En el punto 2.2, se describirá cómo a raíz del Informe Final de la Comisión de la Verdad, surgieron dos importantes procesos como son: a) la judicialización de casos por parte de la Fiscalía del Ecuador, misma que busca garantizar el derecho de las víctimas a la Justicia; b) la expedición de la “Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008”, y los

programas y acciones que se han creado a raíz de ella, como son el Programa de Reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo, el Reglamento de Acuerdos Reparatorios, Museo de la Memoria y otras acciones.

En el Capítulo III, se analizará cómo la Justicia Transicional puede tener dos usos, uno democrático y otro manipulador; adicionalmente, se estudiará si los procesos de Justicia Transicional en el Ecuador responden a los estándares nacionales e internacionales de respeto a las víctimas de los derechos a la verdad, justicia y reparación. Para finalizar, se conocerá los estándares que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad y su aplicabilidad a la Ley de Víctimas de Ecuador.

# CAPÍTULO I.- JUSTICIA TRANSICIONAL EN ECUADOR

## 1.1 Descripción de Justicia Transicional

### 1.1.1 Contexto y definición de la Justicia Transicional

Una noción de Derechos Humanos manifiesta que éstos “corresponden con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial”<sup>1</sup>. Así mismo, los Derechos Humanos son definidos como "un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional"<sup>2</sup>.

En este sentido, si la fundamentación de los Derechos Humanos es la dignidad humana<sup>3</sup>, ésta se expresa en el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, sancionar a los responsables y a ser reparadas integralmente<sup>4</sup>. Es así que, es deber de los Estados, prevenir e investigar las violaciones a los Derechos Humanos y asegurar una adecuada reparación a las víctimas<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Pedro Nikken. *El Concepto de Derechos Humanos*. Internet: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1835/3.pdf>. Acceso: 01 de abril de 2015.

<sup>2</sup> A. Pérez Luño. *Delimitación conceptual de los Derechos Humanos en la obra colectiva. Los Derechos Humanos*. Significación, estatuto jurídico y sistema. Sevilla, Ediciones de la Universidad de Sevilla, pág. 43.

<sup>3</sup> Corte IDH. *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú*. 1995. Sentencia de 19 de enero de 1995. Fondo, párr. 86.

<sup>4</sup> Carlos Beristáin. *Diálogos sobre la reparación, qué repara en los casos de violaciones de derechos humanos*. Quito, Imprenta: MRG Diseño y producción Gráfica, 2009. Pág. 3.

<sup>5</sup> Soraya Gutiérrez. *La Reparación Integral un derecho de las víctimas*. Bogotá, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Pág. 10.

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado; derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción, a fin de satisfacer su plena realización<sup>6</sup>.

La democracia es entendida como un sistema de representación, con participación libre y universal en un marco de igualdad de derechos<sup>7</sup>. Dentro de sociedades democráticas y no democráticas surgen conflictos sociales que generan violaciones a los Derechos Humanos, éstas ocurren en todo el mundo, aunque su gravedad y clase varía de país a país, y de región a región<sup>8</sup>. Así, en la historia de la Humanidad han existido guerras, dictaduras, entre otros contextos que han ocasionado rupturas en las sociedades, con manifestaciones como: desapariciones y ejecuciones, tortura y maltrato policial, violencia sexual, entre otras<sup>9</sup>.

De esta manera, existen periodos o estructuras dentro de las sociedades, donde han existido violaciones masivas y estructurales a los Derechos Humanos que han dejado huellas en la historia<sup>10</sup>. En este contexto, surge la Justicia Transicional que, como lo menciona la catedrática Tatiana Rincón, se refiere a “la idea de que luego de los periodos de violaciones masivas a los Derechos Humanos, las transiciones de la guerra a la paz, o de las dictaduras a la democracia, no pueden hacerse de cualquier manera, sino que deben tener unos mínimos de justicia, asociados al respeto de los derechos de las víctimas”<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Ob. Cit 1.

<sup>7</sup> Daniel H Levine, José Enrique Molina. *La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada América Latina*. Internet. [www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804502](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804502), pág. 19. Acceso: 17 de diciembre de 2014.

<sup>8</sup> Human Rights. *Derechos Humanos en el mundo*. Internet. [www.derechos.org/ddhh/mundo](http://www.derechos.org/ddhh/mundo). Acceso: 17 de diciembre de 2014.

<sup>9</sup> Ibídem.

<sup>10</sup> Por ejemplo: Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), dictaduras en América Latina en el siglo XIX, crímenes en Ruanda, entre muchas otras.

<sup>11</sup> Tatiana Rincón. *Verdad, justicia y reparación: la justicia de la justicia transicional*. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2010. Pág. 27.

En el mismo sentido, la Justicia Transicional, para varios doctrinarios es una expresión ambigua, pues es un término nuevo, sobre el cual no existe una definición o conceptualización aceptada por la doctrina, sin embargo, ésta ha sido analizada desde algunas perspectivas. A continuación se expondrán varias de ellas: Pablo de Greiff analiza a la Justicia Transicional como una disciplina normativa de respeto a estándares jurídicos desde una perspectiva empírica<sup>12</sup>; Iván Orozco ha señalado que la Justicia Transicional implica: una tensión entre las posiciones fácticas y las pretensiones idealistas y normativas<sup>13</sup>.

De esta manera, la Justicia Transicional alude a los procesos y mecanismos judiciales y políticas en los cuales un Estado o la sociedad buscan que los responsables rindan cuentas (derecho a la justicia), lograr la reconciliación y reparar integralmente a las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos, como lo ha definido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas:

la noción de la justicia de transición abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción de cargo o combinaciones de todos ellos<sup>14</sup>.

La Justicia Transicional ha adquirido un importante reconocimiento internacional, incluso por parte por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)<sup>15</sup>, como una herramienta para resolver los problemas derivados de

---

<sup>12</sup> Cfr. Pablo de Greiff. *Reparations Efforts in International Perspectives: What Compensation Contributes to the Achievement of Imperfect Justice*. New York, Oxford. Pág. 40.

<sup>13</sup> Iván Orozco. *Justicia Transicional en el tiempo del deber de memoria*. Bogotá, Temis.

<sup>14</sup> ONU. Consejo de Seguridad, Informe S/2004/616, III. *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, agosto 2004, párrafo 8.

<sup>15</sup> Corte IDH. Caso de Las Masacre del Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C No.134. Párr. 285 y voto concurrente del juez diego García- Sayán, párr.38.



un pasado de abusos a gran escala<sup>16</sup>. A partir de estos procesos y mecanismos se busca reconocer a las víctimas de los conflictos, la promoción de iniciativas para restablecer la justicia y lograr la reconciliación<sup>17</sup>.

También, la CIDH ha reiterado que un modelo de Justicia Transicional debe ser respetuoso de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos. La jurisprudencia del sistema interamericano señala que la obligación de asegurar la protección judicial necesaria para proteger derechos fundamentales no se encuentra sujeta a suspensión, aún en tiempos de guerra<sup>18</sup>.

Se debe recalcar que, muchos países aplican sus propias estrategias de Justicia Transicional, unas veces por iniciativa propia, otras con orientación y apoyo externo<sup>19</sup>. Sin embargo, de manera general se puede establecer que existen diferentes procesos por los cuales un Estado logra aplicar la Justicia Transicional como son: las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales<sup>20</sup>. Por ejemplo, varios países como Paraguay, Colombia, Perú, Argentina, entre otros, han optado por mecanismos de Justicia Transicional que consiste en el establecimiento de programas, procesos y mecanismos de justicia y reconciliación con el fin de reparar a las víctimas<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Centro Internacional para la Justicia Transicional. *Enfoque: Justicia Transicional. ¿Qué es la Justicia Transicional?*. Bogotá. Pág. 1. 2009.

<sup>17</sup> Asamblea General de las Naciones Unidas. Consejo de derechos Humanos. *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*. Pablo de Greiff.A/HRC/21/46. Párr. 8. Asamblea General de las Naciones Unidas. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. 21 March 2006. A/61/636;

<sup>18</sup> CIDH. Verdad, justicia y reparación: Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 2013. Párr. 49.

<sup>19</sup> Cfr. *Ibídem*.

<sup>20</sup> Ob. Cit. 11.

<sup>21</sup> Fundación para el Debido Proceso Legal. *Las Víctimas y la Justicia Transicional ¿Están cumpliendo los estados Latinoamericanos con los Estándares Internacionales?*. Washington, Editorial DPLF, 2012. Pág. 2-3.

En el mundo se encuentran ejemplos de Estados y sociedades que han aplicado a la Justicia Transicional como forma de conciliación. Por ejemplo, Colombia lleva desde los años cuarenta un conflicto armado interno complejo que involucra a varios actores: grupos subversivos, el ejército, los grupos paramilitares, por lo que, ha buscado por intermedio de leyes de Justicia y Paz restablecer derechos y propender a la reconciliación de su nación<sup>22</sup>; de esta manera Colombia ha establecido diferentes mecanismos de Justicia Transicional como son los programas de reparación, la promulgación de leyes y las actuales negociaciones en La Habana con las FARC<sup>23</sup>.

En conclusión, la fundamentación de los Derechos Humanos es la dignidad humana, que se traduce en el derecho de las víctimas a que se respeten los Derechos Humanos. Históricamente, han existido conflictos sociales como guerras, dictaduras, entre otras, que producen secuelas en las sociedades. Por ello, surge la Justicia Transicional que busca procesos de justicia y la reconciliación en Estados donde han existido abusos a Derechos Humanos a gran escala, con el fin de reparar a las víctimas de estas violaciones por medio de procesos judiciales o extrajudiciales; mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un orden social y político determinado que enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia<sup>24</sup>.

### **1.1.2 Perspectivas históricas y normativas de la Justicia Transicional**

Rodrigo Uprimny, manifiesta que la Justicia Transicional puede ser analizada desde dos perspectivas que no son excluyentes sino complementarias: a) perspectiva histórica, b) desde un enfoque normativo de estándares jurídicos relativos a los

---

<sup>22</sup> Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon. *Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia*. Santiago de Chile, Anuario CDH de la Universidad de Chile. Pág. 165.

<sup>23</sup> Cfr. International Crisis Group. *Justicia transicional y los diálogos de paz en Colombia*. Informe sobre América Latina N°49, 29 de agosto de 2013. Pág. 3.

<sup>24</sup> Rodrigo Uprimny, María Paula Saffon. *Estándares Internacionales y Procesos de Paz en Colombia. Entre el perdón y el paredón, preguntas y dilemas de justicia transicional*. Bogotá, Corcas Editores, 2005, pág. 24.

Derechos de las víctimas, es decir las normas imperativas aplicables en los procesos de Justicia Transicional<sup>25</sup>.

*a) Perspectiva histórica de la Justicia Transicional*

En la doctrina existen varios criterios sobre la perspectiva histórica de la Justicia Transicional así, Jon Elster, considera que “es una expresión nueva, pero que hace referencia a un fenómeno muy viejo, que se remonta incluso a la Grecia Antigua, habida cuenta que tiene que ver con la manera como las democracias enfrentan los crímenes de los regímenes dictatoriales que las precedieron”<sup>26</sup>. Por el contrario, para Ruti Teitel, es “un fenómeno contemporáneo, ya que se construye sobre el legado de los juicios de Nuremberg y supone la consolidación de los estándares jurídicos universales relativos a los derechos de las víctimas y al deber estatal de castigar los crímenes atroces”<sup>27</sup>; así, la autora considera que existen tres fases en la genealogía de la Justicia Transicional<sup>28</sup>, a saber:

a) La primera fase, asociada con la Justicia Transicional de posguerra, en donde se establecieron tribunales internacionales para procesar los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se crearon respuestas internacionales como el Derecho de los Conflictos Armados y se trascendió a la actuación individual por encima de los Estados. El Tribunal Internacional de Nuremberg abrió el camino del derecho internacional, por las normas sobre las que se constituyó y la definición de los crímenes.

b) En la segunda fase, está presente el modelo de Justicia Transicional de las dos últimas décadas del Siglo XX, donde se incluye las transiciones en América Latina.

Esta fase refleja un dilema entre castigo y amnistía en medio de cambios políticos, se caracteriza por el modelo restaurativo, que se basa en levantar una historia a partir de

---

<sup>25</sup> Ob. Cit. 11, pág. 10-11.

<sup>26</sup> Ob. Cit. 11. Quien cita a: Jhon Elster. *Closing the Books, Transitional Justice in Historical Perspective*. Cambridge University Press, 2004.

<sup>27</sup> Cristina Gómez. *Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación dentro de los parámetros de la justicia transicional*. Bogotá, Universidad Javeriana, 2009. Pág. 9. Disponible en: <http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis104.pdf>. Quien cita a: TEITEL, Ruti G. “Genealogía de la justicia transicional”, en Harvard Human Rights Journal, 2003 vol. 16. pp. 69-94

<sup>28</sup> *Ibíd.*

los abusos sufridos en el pasado y es por esto que se desarrolló una nueva institución conocida como las comisiones de la verdad, con el fin de investigar, documentar y hacer públicos los abusos a los Derechos Humanos<sup>29</sup>.

Jo-Marie Burt<sup>30</sup>, cita algunos casos que usó la segunda fase de la Justicia Transicional al enjuiciar a casos de violaciones a Derechos Humanos como “Grecia y Argentina que procesaron con éxito a los generales que gobernaron estas Naciones por períodos largos en los setenta y ochenta, establecieron leyes generales como Brasil y Uruguay y comisiones de la verdad para investigar casos de abuso pero sin que esto implicara un esfuerzo por abrir un proceso (como en Chile, El Salvador y Guatemala en los noventa). En cualquier caso manifiesta el autor, que los procesos se abstuvieron de ser una opción normativa, y se presume que fue porque el carácter negociador de las transiciones del régimen militar hizo que esos procesos fueran difíciles, por no decir imposibles (como en Chile, El Salvador o Sudáfrica en los noventa)”. En efecto, para algunos profesionales y académicos, la verdad se promovió como un arma preferida de justicia, ya que supuestamente reducía el conflicto y fomentaba la reconciliación<sup>31</sup>. Como manifiesta Burt, estas acciones trascendían el Estado-nación.

Por último, sobre la tercera fase podemos parafrasear lo siguiente:

c) La tercera fase, surgida en el siglo XXI está marcada por la masificación y la normalización de los mecanismos de la Justicia Transicional<sup>32</sup>. Si bien los procesos penales no son, de ninguna manera, la norma en esta nueva y tercera fase que constituye

---

<sup>29</sup> Cfr. Cristina Gómez. *Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación dentro de los parámetros de la justicia transicional*. Bogotá, Universidad Javeriana, 2009. Pág. 9. Disponible en: <http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis104.pdf>. Quien cita a: TEITEL, Ruti G. “Genealogía de la justicia transicional”, en *Harvard Human Rights Journal*, 2003 vol. 16. pp. 69-94.

<sup>30</sup> Jo-Marie Burt. *Desafiando a la Impunidad en Tribunales Nacionales: Juicios por Derechos Humanos en América Latina*, pág. 309. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29763.pdf>.

<sup>31</sup> Robert Rotberg y Dennis Thompson. *Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions*. Princeton University Press, 2000. Pág. 30.

<sup>32</sup> T. Risse, S.C. Roppe, y K. Sikkink. *The Power of Human Rights: international norms and domestic change*. Cambridge University Press, 1999.

la “justicia globalizada”, criterio que ha sido reiterado por Lutz y Sikkink<sup>33</sup>, donde se ha visto una lucha global para establecer mecanismos que garanticen la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, con la detención del dictador general Augusto Pinochet en Londres, en 1998, la afirmación del principio de jurisdicción universal que el proceso de extradición conllevó y la firma, también en 1998, del Tratado de Roma que llevó a la creación, en 2002, de la Corte Penal Internacional<sup>34</sup>.

Se puede colegir que las tres fases de la Justicia Transicional, según Ruti Teitel son: Fase I-modelo de justicia posterior a la Segunda Guerra Mundial; Fase II-modelo de Justicia Transicional de las dos últimas décadas del Siglo XX (incluidas las transiciones en América Latina); Fase III- un periodo de expansión o normalización de la Justicia Transicional.

*b) Perspectiva normativa de la Justicia Transicional*

El segundo análisis de la Justicia Transicional es el normativo. Tatiana Rincón, analiza este fenómeno en base a la genealogía hecha por Teitel, ya que los tres periodos han estado acompañados por un enorme desarrollo (cuantitativo y cualitativo) de los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. Se podría decir, en este sentido, que si en:

- 1.- La primera fase (la del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, cuyos principios fueron codificados en 1950, en años posteriores a la celebración de los juicios) la Justicia de Transición significó, ella misma un fuerte impulso al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en las fases posteriores.
- 2.- La fase contemporánea, han sido los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, así como las decisiones de los órganos internacionales, los que han determinado el marco mínimo normativo de evolución de la concepción de la Justicia Transicional.

---

<sup>33</sup> Ellen Lutz y Kathryn Sikkink, “*The Justice Cascade: The Evolution and Impact of Foreign Human Rights Trials in Latin America*”, Chicago Journal of International Law, 2001. Pág. 1-34. Véase también Naomi Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*. University of Pennsylvania Press, 2005.

<sup>34</sup> Véase, por ejemplo, Benjamin Schiff, *Building the International Criminal Court*. Cambridge University Press, 2008.

3.- La fase más reciente, la relación entre estos instrumentos y decisiones internacionales, de un lado y la Justicia Transicional, del otro, parece haber dado pasos a una forma más compleja, de doble vía: la Justicia Transicional está delimitada, en su núcleo normativo duro, por los principios y estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pero a su vez, a través de la implementación en contextos y situaciones concretas de los mecanismos de Justicia Transicional. Ésta aporta, a partir de la experiencia, a la formulación de nuevos principios de Derechos Humanos, a la mejor comprensión de principios ya existentes y a la ampliación y mejoramiento de los estándares. Y en, una segunda vuelta, los principios y los estándares enriquecidos entran a jugar y a delimitar otra vez más los procesos de Justicia Transicional<sup>35</sup>.

De esta manera, la autora destaca que la relación entre las condiciones jurídicas y políticas durante periodos de transformación política han hecho que la Justicia Transicional esté íntimamente ligada al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el desarrollo de principios de protección a las víctimas<sup>36</sup>, que se describirán en el siguiente subtítulo.

## **1.2 Principios relativos a la Justicia Transicional**

La Justicia Transicional ha sido desarrollada en varias normas jurídicas internacionales como el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, además en las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2005 sobre “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, Principios de Chicago, entre otros. A continuación se explicarán los Principios más relevantes.

---

<sup>35</sup> Cfr. Ob. Cit. 11, pág. 28.

<sup>36</sup> Cfr. *Transitional Justice Genealogy*. Publicado en Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, Spring 2003, Cambridge, MA, pp. 69-94. Art. traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. (2003). *The President and Fellows of Harvard College and Harvard Human Rights Journal*. Disponible en: <http://estadodederechocdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/18/59.pdf>.

### 1.2.1 Principios de Joinet

El Sr. Louis Joinet, Relator Especial sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó una serie de principios relacionados al derecho de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, a la entonces denominada Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1997. Existen dos versiones del informe final preparado por el Sr. Joinet; la primera de junio y la siguiente de octubre de 1997<sup>37</sup>. En ambas, se hace referencia al conjunto de principios contenidos en cada uno de ellos como «las Directrices Joinet» y «las Directrices Joinet revisadas»<sup>38</sup>.

Las Directrices de Joinet, resumen un conjunto de principios y sus fundamentos en relación con los derechos de las víctimas consideradas como sujetos de derecho, es decir: a) el derecho de las víctimas a saber; b) el derecho de las víctimas a la justicia; y, c) el derecho a obtener reparación. Reconoce que estos derechos son de carácter preventivo, con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones<sup>39</sup>.

### 1.2.2 Principios de Chicago

En el año 2007, aparecen los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional, que se han diseñado para contribuir al movimiento internacional para hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el

---

<sup>37</sup> Cfr. La Subcomisión sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos revisó el primer documento (E/CN.4/Sub.2/1997/20 de 16 de junio de 1997) y la revisión se hizo (E/ CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 de 2 de octubre de 1997).

<sup>38</sup> ONU. Consejo Económico y Social. *Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: La independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad*. Las directrices de Bassiouni 1999. E/CN.4/1999/65 8 de febrero de 1993, pág. 3.

<sup>39</sup> Cfr. ONU. Comisión de Derechos Humanos, 49vo periodo de sesiones. *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión*. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev. 1; Orentlicher, D. (2004).

pasado. Por medio de un compromiso fundamental del Estado con la verdad, la paz, la reconciliación, los derechos de las víctimas y el carácter inherente del ser humano<sup>40</sup>.

Estos Principios, son el resultado de una serie de reuniones y consultas que tuvieron lugar durante un periodo de siete años con la participación de distinguidos académicos, juristas, periodistas, líderes religiosos y otros. Los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional se han diseñado para contribuir al movimiento internacional para hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario en el pasado<sup>41</sup>.

Los Principios de Chicago manifiestan que, de conformidad con los estándares internacionales, los Estados deben realizar los siguientes procesos para alcanzar Justicia Transicional: 1) Investigación, y procuración de justicia; 2) Búsqueda de la verdad e investigaciones por los delitos del pasado; 3) Reconocimiento a las víctimas, recursos y reparaciones; 4) Realizar “Vetting”, por medio de inhabilitaciones, sanciones y medidas administrativas; 5) Ejecución de una conmemoración, educación y preservación de la memoria histórica; 6) creación de enfoques de acceso a la justicia y reparaciones a grupos; 7) obtener con una reforma institucional para garantizar un el gobierno eficaz<sup>42</sup>.

Así, se puede observar que los Principios de Chicago desarrollan una serie de estrategias variadas e interdisciplinarias, que si bien son específicas, no pueden ser aplicadas con éxito por sí solas<sup>43</sup>, ya que los ejes fundamentales de los procesos de Justicia Transicional son la triada de: justicia, verdad y reparación<sup>44</sup>. La ausencia de uno de estos elementos impide consolidar una iniciativa transicional<sup>45</sup>.

En este orden de ideas, los Principios de Chicago constituyen recomendaciones que deben orientar el diseño de sistemas transicionales que no tienen, por ahora, fuerza

---

<sup>40</sup> Cfr. Ob. Cit. 24.

<sup>41</sup> Ibídem, pág. 1.

<sup>42</sup> Ibídem, pág. 18-35.

<sup>43</sup> Cfr. Ob. Cit. 24, pág. 14-15.

<sup>44</sup> Justicia Transicional en América Latina. “Chile, una vergüenza”, *Dialogando con Víctor Rodríguez Rescia*. Reflexión N 42, 2012. Disponible en: <http://www.cintras.org/textos/reflexion/r42/entrevista.pdf>.

<sup>45</sup> Ibídem.



vinculante. Sin embargo, por el reconocimiento que gozan quienes hicieron parte de las mesas de discusión (y en particular el conocido doctrinante Cherif Bassiouni, redactor de la versión final), se trata de principios que orientan mundialmente el debate a la vez jurídico y político alrededor de los esquemas de Justicia Transicional<sup>46</sup>.

### **1.3 Justicia Transicional y derecho de las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos y Derecho Humanitario**

#### **1.3.1 Definición de víctimas**

De manera general, se define a una víctima como “la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento determinado por factores de origen muy diverso- físico, psíquico, económico, político o social así como el ambiente natural o técnico”<sup>47</sup>.

El VI y VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Caracas en 1980 y Milán en 1985, determinan que víctima es la persona que ha sufrido un daño o lesión, en su persona, propiedad o sus Derechos Humanos; y, se clasificó a la víctima de dos maneras:

1. Víctimas de delitos: es toda aquella persona individual o que colectivamente ha sufrido daño (lesiones físicas o mentales), sufrimiento emocional, pérdida financiera o pérdida sustancial de derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal de su Estado.

---

<sup>46</sup> Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. *Justicia y Paz, ¿Verdad Judicial o Verdad Histórica?* Editorial D’vinni S.A., 2012. Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/documentos/informes/informes2012/verdad-judicial-verdad-historica.pdf>.

<sup>47</sup> Sánchez Cevallos. *Las medidas de protección de víctimas y testigos, que rige el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal*. Quito, Universidad de las Américas, 2013. Quien cita a: Mendelsohn. *La victimología y las tendencias de la sociedad contemporánea*. Editorial Mesis. México, 1958, pág. 58.

2. Víctimas de abuso de poder: es aquella persona que individual como colectivamente ha sufrido daños (lesiones físicas o mentales), sufrimiento emocional, pérdida financiera o pérdida sustancial de derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que no constituyan una violación del derecho penal nacional, que no se le considere un delito, pero que viole normas internacionalmente reconocidas referentes a los Derechos Humanos<sup>48</sup>.

La Constitución de la República del Ecuador<sup>49</sup> manifiesta en el Art. 78 que las víctimas de infracciones penales tendrán derecho a la verdad, justicia y reparación<sup>50</sup>; además establece en el Art. 198 que la Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal<sup>51</sup>.

La Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008 (en adelante, Ley de Víctimas), no establece una definición de víctima, pero si establece en el Art. 5, quienes son beneficiarios de la Ley:

Son beneficiarias de las medidas individuales del programa de reparación por vía administrativa, las víctimas directas de las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y también sus cónyuges o parejas por

---

<sup>48</sup> Ibídem.

<sup>49</sup> Constitución de la República del Ecuador. Publicado el 20 de octubre de 2008 en el Registro Oficial 449.

<sup>50</sup> Ibídem. **Art. 78.-** Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.

<sup>51</sup> Ibídem. Art. 198.-La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

unión de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, en los casos y condiciones determinados en esta Ley.

Tanto las víctimas, como sus cónyuges, parejas por unión de hecho y familiares consanguíneos hasta el segundo grado de parentesco, accederán directamente a las medidas de reparación desarrolladas por el programa de reparación por vía administrativa<sup>52</sup>.

Ante estas afirmaciones del Derecho nacional e internacional sobre la definición de víctimas, es importante destacar que, en el caso ecuatoriano, varias de las víctimas manifiestan que no debería usarse el término de víctimas, sino de actores sociales, porque crea una condición desigual entre las personas y las estigmatiza<sup>53</sup>.

### **1.3.2 Justicia Transicional y Derecho de las víctimas**

Para la doctrina, cuando se habla de los derechos de las víctimas, se habla de Derechos Humanos que han sido reconocidos internacionalmente y que, conforme al Derecho Internacional, los Estados tienen la obligación de garantizar y respetar en todo momento. Es decir, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, no son derechos vinculados exclusivamente a la Justicia Transicional; son derechos que, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, las personas tienen en razón de su calidad fáctica de víctimas de violaciones a Derechos Humanos<sup>54</sup>.

En el marco de los procesos de Justicia Transicional y en general, las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos y al Derecho Humanitario tienen reconocidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición:

---

<sup>52</sup> Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008. Publicada el 13 de diciembre de 2013 en el Registro Oficial S. 143.

<sup>53</sup> Talleres de Socialización de los Procesos de Reparación Integral. *Con la participación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Defensoría del Pueblo*, 2015.

<sup>54</sup> Cfr. Ob. Cit. 11, pág. 11.

- El Derecho de toda persona a “un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley” Art. 8 Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Reconoce el derecho al recurso efectivo pero imponiendo la obligación a los Estados de garantizar su efectivo acceso a las personas bajo su jurisdicción PIDCP de 1966 (Art. 2 numeral 3).
- La Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, Convención ADH), establece obligaciones de garantía y respeto (Art. 1.1), reconoce el derecho de ser indemnizadas (Art. 10) y puede determinar el incumplimiento de las obligaciones de los Estados y su deber de reparar (Art. 63)<sup>55</sup>.
- Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 que establecen la obligación de los Estados de prevenir y prohibir y de investigar y juzgar las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario, misma que debe ser cumplida en tiempos de paz y durante los conflictos armados, es así que los Art. 49, 50, 129 y 146 de los cuatro convenios de Ginebra los establecen.

El Estado ecuatoriano ha firmado y ratificado todos estos convenios y tratados y por lo tanto está obligado a cumplirlos, inclusive en base al principio *pacta sunt servanda* del Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe”<sup>56</sup>.

En base a este análisis se describirá el derecho a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos a la verdad, justicia y reparación.

---

<sup>55</sup> *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa). Ratificada por el Ecuador el 12 de agosto de 1977.

<sup>56</sup> *Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados*. Ratificado por el Ecuador el 11 de febrero de 2005 y entró en vigencia para el país el 11 de marzo de 2005.

## 1.4 Derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación

### 1.4.1 Derecho a la Verdad

El derecho a la verdad es reconocido como un ingrediente fundamental para la reconciliación en sociedades donde han existido conflictos armados o periodos represivos.

De esta manera, después de conflictos armados o periodos represivos, las sociedades y los individuos tienen derecho a saber la verdad sobre las violaciones masivas de Derechos Humanos. Todas las culturas reconocen la importancia que tiene el correspondiente duelo para la cicatrización de las heridas personales y comunitarias, ya que la búsqueda de la verdad contribuye a la creación de un registro histórico que impida esta clase de manipulación<sup>57</sup>.

Este criterio ha sido ratificado por Amnistía Internacional, que ha destacado la importancia de la construcción del derecho a la verdad ya que, “todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad sobre los crímenes de los que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento, para desmentir toda acusación falsa, conocer el paradero de sus familiares y las causas de las vulneraciones para evitar repeticiones”<sup>58</sup>.

Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y a sus familiares<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Cfr. ICTJ, Centro Internacional para la Justicia Transicional. *Cuestiones de Justicia Transicional, regiones y países. Verdad y Memoria*. Internet. <http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/verdad-y-memoria>. Acceso: 28 de diciembre de 2014.

<sup>58</sup> Amnistía Internacional. *Truth Comissions*. Fecha de búsqueda 30 de agosto de 2014. Disponible en: <http://www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions>.

<sup>59</sup> CIDH. *El Derecho a la Verdad en América*. OEA/Ser.L/V/IL.152. Doc 2, 13 de agosto de 2014. Párr. 18. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>.

Si bien, el derecho a la verdad fue analizado en casos de desaparición forzada en un inicio por la Corte IDH, en su desarrollo jurisprudencial se ha manifestado que el derecho a la verdad no se limita a estos casos, sino que también se aplica a cualquier tipo de violación grave de los derechos humanos<sup>60</sup>.

De esta manera, el derecho a la verdad dentro de la Corte IDH se define como el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron<sup>61</sup>.

En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha inferido el derecho a la verdad como parte del derecho de estar libre de la tortura o los malos tratos, el derecho a un recurso eficaz, y el derecho a una investigación efectiva y a ser informado de los resultados. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que el hecho de que un Estado omita realizar una investigación eficaz “destinada a aclarar el paradero y la suerte” de “personas desaparecidas en circunstancias que ponen en riesgo la vida” constituye una violación persistente de su obligación procesal de proteger el derecho a la vida (artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales)<sup>62</sup>.

Por su parte, la Constitución ecuatoriana vigente reconoce el Art. 78 el Derecho a la Verdad:

---

<sup>60</sup> Cfr. Caso Barrios Altos. Sentencia del 14 de marzo de 2000, párr. 48.

<sup>61</sup> OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) “*El derecho a la verdad*”. Cfr. ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Estudio sobre el derecho a la verdad*, E/CN.4/2006/91, 9 de enero de 2006.

<sup>62</sup> Sentencia del 10 de mayo de 2001, *Cyprus v. Turkey*, solicitud n.o 25781/94, párr. 136; v. también, entre otros, sentencia del 18-12-1996, *Aksoy v. Turkey*, solicitud n.o 21987/93; y sentencia del 28 de marzo de 2000, *Kaya v. Turkey*, solicitud n.o 22535/93. Este concepto también se aplica en el caso de Estados que no son partes: *Tanrikulu v. Turkey*, 1999-IV, Tribunal Europeo de Derechos Humanos 459 (1999).

**Art. 78.-** [...]. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, *el conocimiento de la verdad de los hechos* y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. [...] <sup>63</sup>. (el énfasis me pertenece).

Por último, en la aplicabilidad práctica del derecho a la verdad son muy diversas -incluyen leyes que garantizan la libertad de expresión, desclasificación de archivos o investigaciones sobre desaparecidos—y también conducen al establecimiento de comisiones de investigación no judicial, entre ellas las Comisiones de la Verdad <sup>64</sup>. A continuación se expondrá los principales preceptos sobre las Comisiones de la Verdad.

#### *1.4.1.1 Comisiones de la Verdad como mecanismo de la Justicia Transicional*

Los Principios de Chicago, proponen en específico sobre el derecho a la verdad, que se instalen Comisiones de la Verdad como un mecanismo importante para abordar el derecho a la verdad de las víctimas, sus familias y la sociedad en general, con el objetivo de:

el establecimiento de un registro histórico preciso de las violaciones del pasado; la determinación de la responsabilidad individual u organizacional de los hechos; un debate sobre la historia oficial donde las víctimas puedan ser reconocidas y escuchadas; desafío a la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación; facilitar la reconciliación nacional y el abierto reconocimiento de irregularidades y recomendar las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas <sup>65</sup>.

En este sentido, se proponen también la creación de otros órganos y acciones para la búsqueda de la Verdad, diseñados para revelar la verdad acerca de los distintos elementos de violación del pasado, estos son:

a) Objetivos de los órganos de investigación.- Órganos alternativos de investigación podrían examinar otros eventos que, por ser muy específicos o muy generales, no

---

<sup>63</sup> Ob. Cit. 54.

<sup>64</sup> Ibídem.

<sup>65</sup> Ob. Cit. 24, pág. 25.

pueden ser cubiertos por comisiones de la verdad, como por ejemplo, el papel de las organizaciones profesionales en general y otras cuestiones históricas.

b) Investigaciones no oficiales.- Las organizaciones privadas, tales como grupos religiosos y las asociaciones profesionales, pueden presentar investigaciones de violaciones del pasado, a fin de contribuir con la búsqueda de la verdad y el apoyo después del postconflicto.

c) Exhumaciones.- Los Estados deben apoyar las exhumaciones de cementerios clandestinos y sitios en los que se encuentren los restos de las víctimas y deben ayudar en las investigaciones judiciales adecuadas, así como en la realización de actividades culturalmente sensibles durante los respectivos sepelios<sup>66</sup>.

Por último, se plantea la creación de archivos relacionados con las violaciones durante el pasado, con las siguientes acciones: Creación de archivos, Gestión de archivos, Acceso a los archivos, Derecho de los acusados para responder a la información dispuesta en los archivos<sup>67</sup>.

Ante lo expuesto la Corte IDH ha determinado, que si bien los Estados pueden establecer Comisiones de la Verdad, que contribuyan a la construcción y preservación de la memoria histórica, esto no sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos judiciales, por lo cual era una obligación del Estado de Cardenal iniciar investigaciones penales para determinar responsabilidades<sup>68</sup>

#### *1.4.1.2 Comisiones de la Verdad en el mundo*

En relación a las Comisiones de la Verdad, podemos colegir, en base a lo expuesto, que éstas constituyen organismos oficiales, temporales, no tienen carácter judicial y se ocupan de constatar hechos, investigar abusos contra los Derechos Humanos, incluidos los crímenes contra el Derecho Internacional, y determinar la verdad<sup>69</sup>; además las Comisiones clasifican los hechos, contribuyen a la justicia y

---

<sup>66</sup> Ibídem, pág. 25-26.

<sup>67</sup> Ibídem, pág. 26.

<sup>68</sup> Corte IDH. *Caso Contreras y otros vs. El Salvador*. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 135.

<sup>69</sup> ECOREPUBLICANO. *Comisión de la Verdad*. Fecha de la búsqueda: 19 de noviembre de 2014. Disponible en: <http://www.ecorepublicano.es/2014/08/comision-de-la-verdad.html>.



rendición de cuentas, responden a las necesidades de las víctimas y su misión principal es promover la reconciliación<sup>70</sup>. En un informe final las Comisiones de la Verdad] recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones<sup>71</sup>.

Según Amnistía Internacional, se crearon 40 Comisiones de la Verdad en todo el mundo entre 1974 y 2010<sup>72</sup>. Así, entre 1974 y 1999 se crearon doce Comisiones<sup>73</sup>, entre 1995 y 2001 se formaron otras diez<sup>74</sup>, de 2001 a 2005 nacieron once<sup>75</sup> y entre 2005 y 2010 nacieron siete Comisiones<sup>76</sup>.

---

<sup>70</sup> Cfr. *Experiencia de otras Comisiones de la Verdad en el mundo*. Fecha de búsqueda: 19 de ago. de 2014. Disponible en: <http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/experiencias-de-otras-comisiones-de-la-verdad-en-el-mundo/20140331/nota/2155288.aspx>.

<sup>71</sup> Ob. Cit. 69.

<sup>72</sup> Cfr. AMNISTÍA INTERNACIONAL. *Comisionar la Justicia. Las Comisiones de la Verdad y la Justicia Penal*. Editorial Amnistía Internacional España (EDAI). Madrid, 2010, pág. 10. Disponible en: <http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL30/004/2010/en/46206892-791e-45c5-a31f-ff069b369c0b/pol300042010spa.pdf>.

<sup>73</sup> *Ibidem*, pág. 2. Uganda: Comisión de Investigación sobre las Desapariciones de Personas, 1974; Bolivia: Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos, 1982; Argentina: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), 1983; Uruguay: Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985; Uganda: Comisión de Investigación sobre las Violaciones de Derechos Humanos, 1986; Nepal: Comisión de Investigación para Localizar a Personas Desaparecidas durante el Periodo Panchayat, 1990; Chile: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990; Chad: Comisión de Investigación de los Crímenes y Malversaciones Cometidos por el ex Presidente Habré, sus Coautores y/o Cómplices, 1990; El Salvador: Comisión de la Verdad, 1991; Alemania: Comisión de Investigación en el Bundestag Alemán para Tratamiento del Pasado y las Consecuencias de la Dictadura del SED en Alemania 1992; Alemania: Comisión de Investigación sobre la Superación de las Consecuencias de la Dictadura del SED en el Proceso de la Unificación Alemana, 1995; Haití: Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia, 1995.

<sup>74</sup> *Ibidem*, pág. 2. Sri Lanka: tres Comisiones Presidenciales de Investigación sobre el Traslado o la Desaparición Involuntarios de Personas en las Provincias Occidental, Meridional y de Sabaragamuwa (de ámbito regional: provincias Occidental, Meridional y de Sabaragamuwa; provincias del Centro, del Noroeste, del Centro Septentrional y de Uva, y provincias Septentrional y Oriental), 1994;1 Sudáfrica: Comisión de la Verdad y la Reconciliación 1995; Ecuador: Comisión Verdad y Justicia, 1996; Guatemala: Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1997; Nigeria: Comisión para la Investigación de las Violaciones de Derechos Humanos, 1999; República de Corea: Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas, 2000; Sierra Leona: Comisión de la Verdad y Reconciliación 2000; Uruguay: Comisión para la Paz, 2000; Panamá: Comisión de la Verdad, 2001; República Federativa de Yugoslavia: Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2001.

De esta manera, podemos observar que la mayoría de Comisiones de la Verdad se encuentran en América Latina y África, y entre los pocos países europeos está Alemania, que tuvo una Comisión de Investigación creada en 1992 para el tratamiento del pasado por las atrocidades del holocausto, en la Segunda Guerra Mundial<sup>77</sup>.

Países como Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay, han tenido Comisiones de la Verdad en América Latina. Por ejemplo, el informe en Argentina tuvo como título “Nunca Más” y se expuso en 1985. En Chile se crearon dos comisiones, una para la verdad y reconciliación y otro sobre la prisión política y la tortura. La Comisión de la Verdad en El Salvador promulgó un informe titulado “De la locura a la esperanza” y el de Guatemala tuvo como título “memoria del silencio”<sup>78</sup>.

Amnistía Internacional menciona que al analizar las Comisiones de la Verdad en el mundo, llegaron a las siguientes conclusiones:

- a) La práctica de las Comisiones de la Verdad rechaza la concesión de amnistías por crímenes de Derecho Internacional en relación con procesos de búsqueda de la verdad.

---

<sup>75</sup> *Ibidem*, pág. 3. Perú: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2001; Timor Oriental: Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación, 2001; Granada: Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2001; Ghana: Comisión para la Reconciliación Nacional, 2002; Argelia: Comisión ad hoc, 2003; Chile: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2003; Paraguay: Comisión de Verdad y Justicia, 2003; Marruecos y Sahara Occidental: Comisión de Equidad y Reconciliación, 2004; República Democrática La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2004 de la República Democrática del Congo fue la primera que se puso en funcionamiento en un país donde la Corte Penal Internacional (CPI) estaba realizando una investigación); Burundi: Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, 2004 (no designada); Indonesia: Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004 (no designada).

<sup>76</sup> *Ibidem*, pág. 4. República de Corea: Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2005; Liberia: Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2005; Canadá: Comisión de la Verdad y la Reconciliación de las Escuelas Residenciales Indígenas 2006; Ecuador: Comisión de la Verdad, 2007; Islas Salomón: Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2008; Kenia: Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación 2008; Togo: Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, 2009.

<sup>77</sup> Noticias “Caracol”. *Experiencia de otras Comisiones de la Verdad en el mundo*. Internet. [www.caracol.com.co/noticias/actualidad/experiencias-de-otras-comisiones-de-la-verdad-en-el-mundo/20140331/nota/2155288.aspx](http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/experiencias-de-otras-comisiones-de-la-verdad-en-el-mundo/20140331/nota/2155288.aspx). Acceso: 29 de octubre de 2014.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

b) La práctica de las Comisiones de la Verdad permite la concesión de amnistías en relación con procesos de búsqueda de la verdad solo si las amnistías no se aplican a los delitos de Derecho Internacional.

c) La práctica de las Comisiones de la Verdad apoya rotundamente el inicio de enjuiciamientos por crímenes de Derecho Internacional. La mayoría está firmemente a favor del inicio de investigaciones y enjuiciamientos por todos los crímenes de Derecho Internacional: más de la mitad de las 38 Comisiones de la Verdad con práctica pertinente examinadas en este documento, recomendaron el inicio de enjuiciamientos por todos los crímenes de Derecho Internacional, contribuyeron activamente a él o ambas cosas<sup>79</sup>.

En específico en el Ecuador, con el objetivo de recuperar la memoria histórica e investigar los graves casos de violaciones ocurridos en el país, el presidente Rafael Correa expidió, mediante Decreto Ejecutivo 305 publicado el Registro Oficial Nro. 187 del 2007, crear la Comisión de la Verdad<sup>80</sup>. La función principal de ese organismo consistió en la identificación de los casos y tipos de violaciones a los Derechos Humanos y sus posibles responsables, con el fin de llevarlos a la justicia, imponer sanciones y evitar la impunidad<sup>81</sup>.

La Comisión de la Verdad del Ecuador, inició funciones el 14 de enero de 2008. Aunque se previó inicialmente que tendría una duración de solo nueve meses prorrogables por tres más, su mandato fue prorrogado en tres ocasiones mediante decretos presidenciales<sup>8283</sup>, estableciendo como fecha de terminación de su

---

<sup>79</sup> Ob. Cit. 77. Las Comisiones de la Verdad y la Justicia Penal.

<sup>80</sup> NB. Cabe destacar, que en 1997 hubo un primer intento de creación de Comisión de la Verdad, mismo que no fue fructífero, como analizaremos en el Capítulo 2.

<sup>81</sup> Cfr. MJDHC, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. *Revista Justicia & Derechos*. 2011. Internet. [www.justicia.gob.ec/content%2Fplugins%2Fdownloadmonitor%2Fdownload.php%3Fid%3D445%26force%3D1&ei=egFGU7faBaqT0QHB1oCABw&usg=AFQjCNHZXuLfyCa-KfF6ZMnFtM0Qkq5hmA&bv=bv.64507335.d.dmq](http://www.justicia.gob.ec/content%2Fplugins%2Fdownloadmonitor%2Fdownload.php%3Fid%3D445%26force%3D1&ei=egFGU7faBaqT0QHB1oCABw&usg=AFQjCNHZXuLfyCa-KfF6ZMnFtM0Qkq5hmA&bv=bv.64507335.d.dmq). Acceso: 29 de octubre de 2014.

<sup>82</sup> NB. Por ejemplo en el Art. 9 literal k) La Comisión de la Verdad se manifestó que durante la prórroga garantizará lo siguiente: 1. La coordinación de la respuesta inmediata de reparación de los casos presentados en el informe final de la Comisión de la Verdad; lo que incluye generar una agenda de consenso en relación a las reparaciones materiales e inmateriales, el acompañamiento psicosocial y de salud a las víctimas, con las consideraciones necesarias que generará una eventual exposición mediática.

trabajo, la presentación del Informe final, la cual tuvo lugar en Quito, el 7 de junio de 2010<sup>84</sup>.

Para Cristhian Bahamonde, secretario de la Comisión de la Verdad, cuando se realizó la presentación del Informe Final de la Comisión, manifestó que se comenzó a escuchar la parte de la verdad ecuatoriana que permaneció oculta:

con la presentación pública, en junio [del año 2010], del Informe Sin verdad no hay justicia, la Comisión de la Verdad considera que finalmente se comenzó a escuchar esa parte de la verdad que pasó por tanto tiempo oculta. A pesar de que, durante años, muchas víctimas intentaron decirla, denunciarla, compartir su dolor e indignación, llamar la atención de las autoridades y demandar el amparo de la justicia; la amenaza y el miedo, la complicidad y la corrupción, la indolencia y la desinformación pudieron más<sup>85</sup>.

En conclusión, sobre el derecho a la verdad se puede decir que, para las sociedades, individuos y para el Derecho Internacional, este derecho tiene el fin de que

---

<sup>83</sup> Según el decreto de su creación, tendría una duración de nueve meses prorrogables a otros tres que se vencieron en diciembre de 2007. Su mandato fue prorrogado durante tres ocasiones: inicialmente, seis meses por el decreto presidencial 1514, del 29 de diciembre de 2008; luego, tres meses más por el decreto 1794, del 22 de junio de 2009; y finalmente, con el decreto 81, del 30 de septiembre de 2009, se determinó como fecha de terminación de las funciones la presentación del Informe Final. Fuente: Comisión de la Verdad. *Sin Verdad no hay Justicia-Informe de la Comisión de la Verdad*. Ediecuatorial, Quito, 2010. Pag. 21, 22.

<sup>84</sup> Cfr. Carlos Beristaín, Patricia Tappatá de Valdez, Elizabeth Lira, Nelson Camilo Sánchez, Rodrigo Uprimny, Benjamín Cuéllar; Mónica Leonardo, Alejandro Valencia, Rolando Amés y Félix Reátegué. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*. Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH. Costa Rica, 2011, pág. 218-220. Disponible en: [http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/12\\_2011/1eda085a-9276-4000-ad56-0d43b2222eb8.pdf](http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/12_2011/1eda085a-9276-4000-ad56-0d43b2222eb8.pdf).

<sup>85</sup> Cristhian Bahamonde Galarza. *Breve descripción y contenido del informe final de la Comisión de la Verdad de Ecuador*. En: *Develando el desencanto: informe sobre derechos humanos*. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, Abya Yala, 2010. Págs. 43-45.

las víctimas tengan más información sobre los hechos y puedan cerrar esa etapa, además de contar su historia que en ocasiones es negada por la historia oficial; el derecho a la verdad también contribuye a la creación de un registro histórico y como ingrediente de la reconciliación. La verdad se puede encontrar por medio de: leyes, desclasificación de archivos o investigaciones, Comisiones de la Verdad, entre otras, sin embargo esta no sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos judiciales. Por lo que, el derecho a la verdad se relaciona también con el derecho a la justicia, descrito a continuación.

### 1.4.2 Derecho a la Justicia

El anhelo por la verdadera paz, la que brota de la justicia, es muy antiguo. En este sentido, Rabban Simeon ben Gamiel dijo: “el mundo descansa en tres pilares: la verdad, la justicia y la paz”; y un comentarista del Talmud agregó: "Estos tres pilares son en realidad uno. Si la Justicia es alcanzada, la verdad es reivindicada y la paz ocurre"<sup>86</sup>.

Así, la justicia es una de las principales búsquedas de la humanidad y es el motor para la dinámica pacífica de las relaciones sociales, no en vano las revoluciones, violentas y pacíficas, se han dado en nombre de cambiar situaciones y relaciones injustas<sup>87</sup>. Razón por la cual, la justicia es un requerimiento vital para que los perpetradores rindan cuentas de sus actos, se curen las heridas y se puedan restablecer las relaciones de equidad y respeto<sup>88</sup>.

La Justicia como un derecho, es reconocida en el Derecho Internacional<sup>89</sup> como la obligación de los Estados de investigar las violaciones graves a los Derechos

---

<sup>86</sup> Cfr. Diario “Nación”. *Trabajar por la justicia. Hay memorias que recobrar y verdades que enfrentar. Internet.* [www.nacion.com/ln\\_ee/ESPECIALES/tiempo2000/edicion4/umbra11.html](http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/tiempo2000/edicion4/umbra11.html) . Acceso: 29 de diciembre de 2014.

<sup>87</sup> Diana Britto Ruiz. *Justicia Restaurativa, Reflexiones sobre la experiencia de Colombia*. Loja, Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, 2010. Pág. 12.

<sup>88</sup> Ob. Cit. 61.

<sup>89</sup> NB. Convención Americana de Derechos Humanos. (Art. 8, 25 y 44); Declaración Universal de DD.HH. (Art. 8 y 10); Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos (Art. 2, 3 y 14); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 6); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Humanos y al Derecho Humanitario que han ocurrido dentro de su territorio. En específico, la Convención ADH en el Art. 8, reconoce el derecho al debido proceso, mismo que es una de las garantías esenciales del procedimiento para la protección de los derechos<sup>90</sup>. En el mismo sentido, el Art. 25 de la Convención ADH consagra el derecho a la tutela judicial, sobre el cual la Corte IDH ha manifestado que no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos<sup>91</sup>; se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido<sup>92</sup> que permita alcanzar, la protección judicial requerida<sup>93</sup>.

En este sentido, podemos manifestar que el derecho a la justicia en la Convención ADH es garantía que impone al Estado la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad. Esta obligación implica: i) el establecimiento de mecanismos jurídicos idóneos para llegar al descubrimiento de los hechos y la condena de los responsables; ii) El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos; iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo; y iv) el deber de respetar las garantías del debido proceso<sup>94</sup>.

---

Cruelles, Inhumanos o Degradantes (Art. 14); y la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 39); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 2 inciso c); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal (Art. 40-42). Del mismo modo, la víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, tienen reconocido su derecho de acceder a la justicia en: el Art. 3 de la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 (Convención IV), en el Art. 91 del Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977, y en los Art.s 68 y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

<sup>90</sup> Corte IDH. *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.

<sup>91</sup> Corte IDH. *Caso Cantos vs. Argentina*. Excepciones preliminares, sentencia del 7 de septiembre de 2001, párr. 52.

<sup>92</sup> Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 101.

<sup>93</sup> Corte IDH. *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009, párr. 69.

<sup>94</sup> Corte Constitucional de Colombia. Internet. <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-180-14.htm>. Acceso: 10 de abril de 2015.

Por otro lado, la Constitución del Ecuador del año 2008 marcó varios avances en la garantía normativa de los Derechos Humanos, es así que se reconoce en el Art. 1 al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano ...]<sup>95</sup>; el Art. 11 del mismo cuerpo normativo, determina que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos; asimismo, se reconoce el acceso gratuito a la justicia y a la tutela de sus derechos y en específico a las víctimas de infracciones penales se reconoce el derecho de las personas de acceder a la justicia (Art. 75, 78, 80)<sup>96</sup>.

La Ley de Víctimas ha reconocido la responsabilidad objetiva del Estado en las violaciones a Derechos Humanos por el error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y, por violaciones de los principios y reglas del debido proceso documentadas por la Comisión de la Verdad. Además, manifiesta que debe garantizarse el derecho a la justicia de las víctimas (Art. 2)<sup>97</sup>.

El derecho a la justicia, ha mostrado una evolución histórica, ya que después de la Segunda Guerra Mundial se daba importancia a la justicia retributiva penal, sin la participación de las víctimas, pero en la actualidad se reconoce la igual importancia a la justicia penal, a los espacios judiciales de la verdad y de construcción de memoria colectiva, a la reparación, entre otros<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> Ob. Cit. 54.

<sup>96</sup> Ibídem.

<sup>97</sup> Ibídem.

<sup>98</sup> Ob. Cit. 11. NB. La autora manifiesta que “[e]n los juicios de Núremberg y de Tokio no se contempló, por ejemplo, la participación de las víctimas. Esta participación, con el fin de garantizarles en el proceso penal internacional el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, solo fue reconocida y regulada expresamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Corte PI o CPI), y en sus Reglas y Procedimientos y Pruebas. La Corte PI ha señalado al respecto que de esta forma se logra un balance entre la justicia retributiva (conduciendo los criminales ante la Corte) y la justicia restaurativa (contribuyendo con las víctimas mismas a obtener justicia). La forma precisa de participación de las víctimas-desde la etapa de la investigación y de manera amplia- fue decidida por la CPI por primera vez, en relación con el *Caso Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06. En igual sentido, el

En base a la mencionada evolución, podemos analizar que han existido distintos modelos de aplicabilidad de la justicia, estos son:

- a) Justicia Retributiva: Tiene como presupuesto fundamental el castigo a la infracción de la ley, y supone una sociedad de individuos regulada por un contrato social.
- b) Justicia Distributiva: Esta modalidad de justicia está centrada en los aspectos económicos de las relaciones sociales y se preocupa por dar a todos los miembros de la sociedad, una “parte justa” de los beneficios y recursos disponibles.
- c) Justicia Reparativa: También llamada justicia compensatoria. La justicia reparativa se preocupa por devolver a las víctimas lo que ellas han perdido durante el curso del conflicto. Estas reparaciones pueden ser individuales o colectivas y pueden ser económicas o no.
- d) Justicia Restaurativa: Es un tipo de justicia centrada en la dimensión social del delito. Busca restaurar el lazo social dañado por la acción criminal en un proceso de reparación y reconciliación entre la víctima y el infractor, con la mediación de la comunidad<sup>99</sup>.

Destacaremos a la Justicia Restaurativa, como un modelo de justicia comunitaria que pone todo su énfasis en la dimensión social de los delitos y conflictos. Busca restaurar el lazo social dañado, a través de un proceso de reparación y reconciliación entre la víctima y el ofensor, con la mediación de la comunidad.

En este orden de ideas, se concluye que el derecho a la justicia es vital y constituye una obligación de los Estados de promover la máxima justicia. Por otro lado, la aplicabilidad de la justicia, se ha dado por distintos modelos como son: la justicia retributiva, distributiva, reparativa y restaurativa.

---

Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, establece, en el Principio 19, el deber de los Estados de garantizar la participación de las víctimas, sus familiares o herederos en los procesos penales, y en el principio 32 el deber de garantizar que las víctimas y otros sectores de la sociedad civil desempeñen un “papel significativo” en la elaboración y aplicación de los programas de reparación. [... Por ejemplo,] el tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha dado a las voces e historias de las víctimas en sus decisiones y en el registro de las memorias de sus actividades”.

<sup>99</sup> L. Montada. *Justice and its Many Faces: Cultural Concerns*. En *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Volume 12. Great Britain. Elsevier Science Ltda., 2001.



### 1.4.3 Derecho a la reparación

#### *Definición*

La reparación ha sido determinada en la doctrina, como un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de las violaciones<sup>100</sup>. La reparación se fundamenta en términos morales y legales; sobre los aspectos morales, debe considerar el aspecto cultural, con el objetivo de que las medidas de reparación sean adecuadas.

En relación a los términos legales, el derecho a la reparación ha sido reconocido por instrumentos nacionales, por la Constitución del Ecuador y en la Ley de Víctimas. Así, se indica que el Derecho a la reparación, es un derecho internacionalmente reconocido por los distintos Pactos, Convenciones y Principios Internacionales<sup>101</sup>.

El Art. 63 numeral 1 de la Convención ADH manifiesta que:

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las

---

<sup>100</sup> Ob. Cit. 4.

<sup>101</sup> NB. Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9 inciso 5); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 6); Convención de los derechos del niño (Art. 39); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Art. 16 inciso 4; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Art. 7 inciso g); Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los niños, relativos a la venta de personas menores de edad relativo a la venta de personas menores de edad, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía (Art. 9 inciso 3 y 4), Estatuto de Roma (Art. 75), Reglas de Procedimiento de la Corte Penal Internacional (Art. 75), Reglas Mínimas de tratamiento de los reclusos norma 65 y 66, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal (Art. 43); Principios para la Protección de Todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Art. 35), Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Art. 17, 18, 24), Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder (Art. 8 al 13); Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Art. 10 al 13),

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”<sup>102</sup>.

El mismo cuerpo legal, establece en el Art. 10 “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

La ONU, aprobó en 2005, un conjunto de “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que han manifestado que:

La reparación debe entenderse como la política orientada a favorecer el retorno a la ciudadanía y el reconocimiento de las víctimas como sujetos con derechos que fueron vulnerados. Una de las premisas básicas para que las medidas puestas en marcha sean reparadoras tiene que ver con la dignidad. La restitución de la dignidad tiene que estar presente en cada acción, de forma que suponga un reconocimiento de la injusticia y un respeto a los derechos y al valor de las víctimas<sup>103</sup>.

La Constitución ecuatoriana, reconoce el Derecho a la reparación en el Art. 78, de la siguiente manera:

**Art. 78.-** Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización [...]. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. [...] <sup>104</sup>.

La Ley de Víctimas señala en el Art. 3, que la reparación integral buscará la solución que restituya a las víctimas en sus derechos al estado anterior, de la siguiente forma:

---

<sup>102</sup> Ob. Cit. 55.

<sup>103</sup> Ob. Cit. 24. pág. 173-174.

<sup>104</sup> Ob. Cit. 54.

La reparación integral buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos, al estado anterior a la comisión del daño e incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado<sup>105</sup>.

De esta manera, se puede notar que la reparación es un conjunto de medidas que buscan restituir a las víctimas y mejorar su situación.

*a) Perspectivas del análisis del Derecho de Reparación*

Existen, para la doctrina, dos formas de analizar el derecho de reparación: i) desde una perspectiva jurídica del ideal de la *restitutio in integrum*, ii) desde un enfoque centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas y sus familiares.

Desde el primer enfoque, el ideal de la *restitutio in integrum*, marca una perspectiva jurídica en situaciones de irreversibilidad de la pérdida de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y sus familiares, ya que nada puede remplazar a los familiares fallecidos o reparar el dolor de las víctimas. Es por esto, que una sociedad fracturada por un conflicto violento debe enfrentar las consecuencias de esa violencia, apoyar a las víctimas y sobrevivientes, y reconstruir las relaciones sociales. Está más allá de toda duda que, en términos legales internacionales, el gobierno o régimen postconflicto es responsable de los abusos del régimen anterior. En esencia, la reparación vista desde este punto, hace referencia a un problema sin solución, pero a la vez, a la necesidad de un compromiso para restituir los derechos de las víctimas y familiares, ayudar a enfrentar las consecuencias de las violaciones y promover su reintegración social<sup>106</sup>.

En la segunda perspectiva, la reparación no trata de volver a una situación inicial, anterior a las violaciones, cuando la realidad de las víctimas estaba caracterizada por discriminación y exclusión social o política, sino que la reparación debe tener un enfoque centrado en el ejercicio pleno de sus derechos, proporcionando un horizonte más cercano a su verdadero sentido. Para las víctimas, la reparación debería ser la

---

<sup>105</sup> Ob. Cit. 58.

<sup>106</sup> Ob. Cit. 85. pág. 43.

manifestación más tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño que han sufrido. Pero para ello, se necesita avanzar, tanto en los criterios para hacer que sea más positiva y esté más adaptada a las necesidades de las víctimas, como en su cumplimiento efectivo. Para el Estado la reparación es una oportunidad de integrar a las víctimas en la sociedad, pero también de prevenir nuevas violaciones en el futuro<sup>107</sup>.

*b) Dimensiones del Derecho de Reparación*

Mario Beristaín, manifiesta que existen cinco dimensiones del derecho a la reparación de las víctimas que han sido desarrolladas por la Corte IDH, y son:

- a) “La restitución, que busca restablecer la situación previa de la víctima. Incluye entre otros, el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de bienes y el empleo.
- b) La indemnización se refiere a la compensación monetaria por daños y perjuicios. Incluye tanto daño material, como físico y moral (miedo, humillación, estrés, problemas mentales, reputación).
- c) La rehabilitación alude a medidas tales como atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad.
- d) Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas.
- e) Las garantías de no-repetición pretenden asegurar que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. También requieren reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los Derechos Humanos, para evitar la repetición de las violaciones”<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Ob. Cit.4. pág. 174.

<sup>108</sup> Ibídem. NB. Este criterio ha sido reiterado por la Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art. 33. Ver también ONU. Comisión de Derechos Humanos. *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher*, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. (8 de febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.

En los primeros casos de la Corte IDH, la reparación era casi la concebida bajo lo reconocido por el Derecho Civil, únicamente haciendo hincapié en el lucro cesante, en el daño emergente y en el daño moral<sup>109</sup>.

Sin embargo; con el transcurso del tiempo la comunidad internacional ha reformulado el alcance de la reparación del daño tradicional, a través de la compensación económica hacia el concepto de la reparación integral, el cual configura un remedio más amplio para reparar los daños de las víctimas a violaciones de Derechos Humanos<sup>110</sup>. De esta manera, por ejemplo, la Corte Permanente de Justicia en el caso *Factory at Chorzow* de 1927, estableció que la reparación es uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional sobre la responsabilidad de un Estado<sup>111</sup>. Posteriormente, dicho concepto operante en el Derecho Internacional público permeó en la decisión de la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>112</sup> y posteriormente recogido en el caso *Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*<sup>113</sup> y subsiguientes ante la Corte IDH<sup>114</sup>.

---

<sup>109</sup> *Ibíd.*

<sup>110</sup> Cfr. Dinah Shelton. *Remedies In International Human Rights Law*. USA, Oxford University Press, 2010.

<sup>111</sup> Cfr. PCIJ. *Factory at Chorzów*. Competencia. Sentencia No. 8, 26 de julio de 1927, Series A, No. 9, pág. 21; PCIJ. *Factory at Chorzów*. Fondo. Sentencia No. 13, 13 de septiembre de 1928, Series A, No. 17, pág. 29; ICJ. *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* [Reparaciones por lesiones sufridas al servicio de la Organización de las Naciones Unidas]. Corte IDH, Opinión Consultiva 7 de diciembre de 1948, pág. 184.

<sup>112</sup> Cfr. EDH. *Neumeister vs. Austria*, 7 de mayo de 1974; TEDH. *Ringeisen vs. Austria*, 16 de Julio de 1971; TEDH. *De Wilde, Ooms y Versijp v. Bélgica*, 10 de marzo de 1972; TEDH. *Guzzardi v. Italia* 6 de noviembre de 1980; TEDH. *De Becker v. Bélgica*, 27 de marzo de 1962.

<sup>113</sup> Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 227

<sup>114</sup> CDH. *The Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and 6 others) v. Nigeria*. Comunicación 87/93; ACDH. *Association Mauritanienne des Doits de l'Homme v. Mauritania*, Comunicación. No. 210/98.

Tanto en la Corte IDH con sus sentencias, como en el marco de la CIDH en sus informes y acuerdos de solución amistosa, se definen medidas de reparación atendiendo al tipo de violación, el impacto de la misma, las circunstancias del caso, las demandas de los representantes y los criterios jurídicos internacionales, incluyendo la propia jurisprudencia de la Corte IDH<sup>115</sup>.

Sin embargo, en términos generales, debemos partir de la base de que no existe un criterio claro en lo que respecta a la cuantía de las indemnizaciones, por lo que no debe extrañar en casos similares visualizar montos diferentes<sup>116</sup>.

*d) Diferencia entre indemnización y reparación*

Muchas veces se ha confundido el concepto de reparaciones con el de indemnizaciones, pero se trata de dos nociones distintas que se encuentran en relación de género a especie<sup>117</sup>.

Sobre las indemnizaciones, se debe considerar que la finalidad de fijar montos indemnizatorios no tiene por objeto constituir una sanción por la conducta imputable a un Estado, sino que busca reparar las consecuencias del mismo. En la generalidad de los casos incluirá lo relativo al daño moral, como así también el daño emergente y el lucro cesante o pérdida de ingresos como también lo ha denominado la Corte IDH en su jurisprudencia<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> Cfr. Ob. Cit. 4. pág.182.

<sup>116</sup> Cfr. Andrés Javier Rousset Siri. *El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Revista Internacional de Derechos Humanos /ISSN 2250-5210/2011 año I –Nº1. Pág. 69.

<sup>117</sup> *Ibídem*.

<sup>118</sup> *Ibídem*.

## **CAPÍTULO II.- PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR**

En el capítulo 1 se concluye que la Justicia Transicional es una respuesta que ha dado la humanidad para enfrentar las violaciones a Derechos Humanos en sociedades democráticas o no democráticas, entendiendo que si una de las fundamentaciones es la dignidad humana, esta se traduce en el derecho a las víctimas a la Verdad, Justicia y Reparación.

Si bien cada sociedad construye sus propios procesos transicionales, muchas veces con apoyo internacional, de manera general se puede establecer que existen diferentes procesos por los cuales un Estado logra aplicar la Justicia Transicional como son: las acciones penales, las Comisiones de la Verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales<sup>119</sup>.

Así, en el capítulo 2, se profundizará en el estudio de la materialización del derecho a la verdad de las Víctimas, a través de la conformación y trabajo de la Comisión de la Verdad en Ecuador, desde un contexto histórico y como una lucha de los grupos de víctimas y familiares de ellas por alcanzar y materializar sus derechos.

Además, se describirá cómo a raíz del Informe de la Comisión de la Verdad, surgieron dos importantes procesos como son: a) la judicialización de casos por parte de la Fiscalía del Ecuador, misma que busca garantizar el derecho de las víctimas a la Justicia; b) la expedición de la “Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008”, misma que busca garantizar el derecho de las víctimas a la reparación, al crear un Programa de Reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo y el desarrollo de Acuerdos Indemnizatorios por medio del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

---

<sup>119</sup> Ob. Cit. 4.

## 2.1 Comisión de la Verdad en el Ecuador

### 2.1.1 Contexto histórico de la Comisión de la Verdad en el Ecuador

En agosto de 1984, el Ing. León Febres Cordero fue elegido Presidente de la República del Ecuador, por voto popular, en representación de los sectores de derecha. Su régimen impuso un modelo económico de corte neoliberal y un estilo de gobierno autoritario y de permanente confrontación con los sectores que discrepaban con su proyecto político. Su discurso violento siempre estuvo dirigido a atacar a la oposición, especialmente a los sectores de izquierda. Para reprimir a los movimientos sociales, el Gobierno utilizó especialmente las fuerzas policiales y servicios de inteligencia, creando, con el apoyo de la empresa privada, los escuadrones volantes de fuerzas policiales, que junto con grupos paramilitares reprimieron manifestaciones estudiantiles, huelgas obreras y ocasionaron el desalojo de muchos pobladores<sup>120</sup>.

Durante su mandato, surgió la organización Alfaro Vive Carajo (AVC), cuya visión política estaba inclinada al socialismo y quiso llegar al poder mediante las armas<sup>121</sup>. Con este fin, realizó varias acciones de propaganda armada (como tomas de medios de comunicación, pintas en las paredes, sustracción de la espada y de un busto del líder histórico Alfaro Vive, entre otras) y utilizó como método de financiamiento los asaltos a bancos y a empresas, llevando a cabo algunos secuestros<sup>122</sup>. La respuesta del

---

<sup>120</sup> Cfr. Ob. Cit. 85.

<sup>121</sup> Diario "El Comercio". El ex grupo subversivo Alfaro Vive Carajo será movimiento político. Internet. [www.elcomercio.com/actualidad/avc-alfaro-vive-carajo-subersivo.html](http://www.elcomercio.com/actualidad/avc-alfaro-vive-carajo-subersivo.html). Acceso: 31 de octubre de 2014.

<sup>122</sup> Ibídem. NB. Además del Grupo AVC, el Grupo Montoneros Patria Libre hizo su aparición el 22 de enero de 1986, con la toma del Museo de la Libertad en Quito. El 21 de mayo de 1986, el grupo secuestró a Enrique Echeverría, miembro de Tribunal de Garantías Constitucionales, y exigió la destitución del presidente León Febres Cordero. El rehén fue liberado cinco días después. El 26 de enero de 1988, comandos de los grupos, guerrilleros Alfaro Vive y Montoneros Patria Libre asaltaron diez emisoras de radio en Quito y otras ciudades y obligaron a emitir una "proclama a la nación" sobre la situación política que atraviesa el país". La proclama exigía también el cese del ministro de Gobierno y Policía, Luis Robles. Diario "El País". El Grupo Montoneros Patria Libre asegura que tiene en su poder a Berrocal".



Estado a estas acciones de AVC se hizo al margen del marco legal y constitucional, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales<sup>123</sup>.

En palabras de la Comisión de la Verdad del Ecuador, en esta época el Ecuador

fue víctima, al igual que otros países del continente latinoamericano, de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Estado que impuso el terror en proyectos de dominación política, económica y cultural. No hubo hechos aislados, se respondió a políticas expresas como la Doctrina de Seguridad Nacional<sup>124</sup> y el control de toda organización que se opusiese al proyecto impuesto a través de las Fuerzas Armadas. Éstas fueron el instrumento, pero no quienes pensaron y ejecutaron en todos los ámbitos la política de terror<sup>125</sup>.

AVC dejó las armas en 1989, durante el gobierno de Rodrigo Borja y, además, firmó un acuerdo de paz<sup>126</sup>.

Las políticas que limitaban los Derechos Humanos para supuestos narcotraficantes, delincuentes y “terroristas”, continuaron vigentes durante el periodo

---

Internet. [http://elpais.com/diario/1989/08/31/espana/620517603\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1989/08/31/espana/620517603_850215.html). Acceso: 14 de octubre de 2014. Adicionalmente, el Centro de Documentación de Movimientos Armados realiza una entrevista en el año 2010 al compañero “Antonio” integrante del Movimiento, que expone la situación actual del mismo. Disponible en: <http://www.cedema.org/ver.php?id=4141>.

<sup>123</sup> Ibídem.

<sup>124</sup> Ibídem. NB. Los diversos Gobiernos utilizaron la Ley de Seguridad Nacional, declarando el estado de emergencia, para mantener lo que denominaban el orden y la paz de la República. Las huelgas obreras, los levantamientos indígenas, los paros provinciales o regionales, las manifestaciones estudiantiles y otras formas de lucha empleadas por sectores populares para conseguir sus reivindicaciones, fueron calificados como amenazas a la seguridad del Estado o, incluso, como asuntos delincuenciales.

<sup>125</sup> Comisión de la Verdad. *Sin Verdad no hay Justicia-Informe de la Comisión de la Verdad*. Ediecuatorial, Quito, 2010, pág. 15.

<sup>126</sup> Diario “El Comercio”. *El ex grupo subversivo Alfaro Vive Carajo será movimiento político*. Internet. <http://www.elcomercio.com/actualidad/avc-alfaro-vive-carajo-subersivo.html>. Acceso: 19 de enero de 2015.

1988-2007<sup>127</sup>, lo que produjo también violaciones de Derechos Humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas<sup>128</sup>.

Cabe preguntarse ante estos hechos históricos si es que el Ecuador actuó acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la lucha contra el terrorismo es un justificado para las vulneraciones de DDHH. Ante estas inquietudes, la Corte IDH ha manifestado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos<sup>129</sup>. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualquier otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas<sup>130</sup>. Por tanto, el Ecuador y todos los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen la obligación de garantizar en todo tiempo la vigencia de Derechos Humanos aún en situaciones de aparente conflicto.

Así se puede deducir que, en el Ecuador entre 1984 y 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, se cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población civil ecuatoriana, sin la exclusión de la existencia de otros crímenes de lesa humanidad

---

<sup>127</sup> NB. Después del Gobierno de Febres Cordero, entre los años 1988 y 2007 se continuó implementando el modelo neoliberal que agudizó las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, lo que provocó descontento y descomposición social. La crisis y la inestabilidad política fue una tendencia persistente a lo largo de todos estos años. En el período que abarca desde 1995-1997 hasta las elecciones de 2006, se profundizó la crisis política de las elites dominantes, la cual se evidenció en la caída de los tres presidentes elegidos durante esos años: Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2002-2005).

<sup>128</sup> Ob. Cit. 87.

<sup>129</sup> Cfr. *Caso J. Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 304. Cfr. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 95.

<sup>130</sup> Cfr. *Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 100, y *Caso J. Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 304.

cometidos contra la población civil de Ecuador posteriormente<sup>131</sup>. Estos crímenes no fueron juzgados de manera global y oportuna por parte de la justicia, ni existió un proceso de reparación, dando paso a la impunidad; por ejemplo, Juan Cuvi, una de las presuntas víctimas de tortura en el gobierno de León Febres Cordero, manifestaba en el año 2005 que “han pasado 20 años desde todos los latrocinios y barbaridades que cometió el ex presidente y hasta el momento no se ha tomado ninguna acción de carácter penal que permita sancionar a los responsables de los abusos cometidos durante este régimen”<sup>132</sup>.

Ante los hechos descritos atentatorios a los Derechos Humanos, el Ecuador debió respetar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, que como se analizó en el capítulo 1, son los pilares fundamentales para que un Estado cumpla con las garantías y deberes fundamentales; esto implica que el Estado está obligado a investigar los hechos y esclarecerlos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas. Uno de los mecanismos que los Principios de Chicago han planteado para materializar el derecho a la verdad, es la creación de Comisiones de la Verdad.

### **2.1.2 Comisiones de la Verdad en Ecuador**

Con el fin de recuperar la memoria y esclarecer la verdad de los hechos antes descrito, en el Ecuador, se crearon dos Comisiones de la Verdad, una creada en 1996 por el presidente Abdalá Bucaram y otra creada en el año 2007 por el presidente Rafael Correa, descritas a continuación:

---

<sup>131</sup> Cfr. Ob. Cit. 125.

<sup>132</sup> Diario “Ecuador Inmediato”. *Comité Contra la Impunidad iniciará acciones penales contra Febres Cordero*. Internet: [www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=25716&umt=comite\\_contra\\_impunidad\\_iniciara\\_acciones\\_penales\\_contra\\_febres\\_cordero](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=25716&umt=comite_contra_impunidad_iniciara_acciones_penales_contra_febres_cordero). Acceso: 17 de septiembre de 2014.

### 2.1.2.1 Comisión de la Verdad del año 1996

Fue creada mediante Acuerdo Ministerial del 17 de septiembre de 1996<sup>133</sup>, a raíz de las denuncias del ex agente de Policía Hugo España, sobre excesos policiales en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988)<sup>134</sup> y como parte del proceso de lucha del reconocimiento de los derechos de las víctimas y de sus familiares. Las funciones de la Comisión, fueron:

- i) recoger denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, especialmente desapariciones, torturas y demás agresiones contra la vida y la integridad personal ocurridas en el Ecuador desde 1979, sean estas atribuibles a agentes del Estado o a particulares; ii) investigar denuncias por todos los medios a su alcance; iii) elaborar el informe “Verdad y Justicia” en el que se sistematizará la información, denuncias e investigaciones realizadas, así como sus antecedentes, conclusiones y recomendaciones en el plazo de un año<sup>135</sup>.

Para Nelsa Curbelo, la creación de la Comisión fue muy importante, porque implicaba la investigación y sistematización de denuncias de violaciones a Derechos Humanos.

Esta creación significó un hecho notable, ya que suponía la investigación de acontecimientos vinculados a la violación de derechos humanos en el marco de regímenes “democráticos”. Se inició la sistematización de denuncias a fin de entregarlas a un equipo de abogados que prepararía informes a ser entregados a la Corte Suprema de Justicia. Se han establecieron lugares de recepción de denuncias en las diferentes provincias a partir de los grupos de Derechos Humanos existentes y de organizaciones de iglesias. La investigación de la desaparición de los hermanos Restrepo significó la apertura frente a los hechos de violencia institucionalizada<sup>136</sup>.

---

<sup>133</sup> Félix Reátegui. *Justicia Transicional Manual para América Latina*. Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil. Brasil, 2011, pág. 250-251.

<sup>134</sup> Diario “Hoy”. *Apoyan a la Comisión Justicia y Verdad*. Internet. <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/apoyan-a-comision-justicia-y-verdad-70151.html>. Acceso: 25 de agosto de 2014.

<sup>135</sup> Ob. Cit. 125.

<sup>136</sup> Cfr. Derechos.org. *Discurso de Nelsa Curbelo en Seminario Internacional “Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos”*. Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996. Disponible en: <http://www.derechos.org/koaga/xi/2/curbelo.html>.

Uno de los datos interesantes de la Comisión de la Verdad es la recolección de cementerios clandestinos, como lo menciona el Manual de Justicia Transicional para América Latina:

Se recogieron varias denuncias sobre la existencia de cementerios clandestinos en recintos policiales y militares, así como en el campo, se tuvo gran cobertura informativa. Sin embargo, resultó difícil la búsqueda de la verdad en dicho contexto. De esta manera, diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en el país impulsan la creación de una nueva comisión que investigue los casos relacionados con desapariciones, asesinatos, y tortura en dicho periodo (1985-1989)<sup>137</sup>.

La iniciativa de la creación de la Comisión de la Verdad fue aplaudida por el director ejecutivo de Human Rights Watch en 1996, Miguel Vivanco, quien manifestó que “la creación de la Comisión es un paso preliminar para poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Ecuador”<sup>138</sup>. Es así que, “instó al gobierno ecuatoriano a colaborar con la Comisión Verdad y Justicia proporcionando los recursos, documentos e información necesaria para cumplir con esta tarea”<sup>139</sup>.

La creación de la Comisión también generó otras opiniones, como la de ciertos sectores de la Policía Nacional:

reacciones de la policía que consideraban que se la estaba humillando. Algunas autoridades del Estado se sumaron a esta protesta. Muchos policías han muerto en enfrentamientos con delincuentes o por problemas domésticos, en los últimos meses. Se sostuvo que las Organizaciones de Derechos Humanos no decían nada frente a esto ni defendían a los policías que también eran víctimas. Se sumaron las voces de algunas autoridades<sup>140</sup>.

La Comisión se componía por 7 miembros, disponiendo de un año para realizar las investigaciones, sin embargo, contó con poco apoyo económico por parte del Estado y

---

<sup>137</sup> Ob. Cit. 125.

<sup>138</sup> *Ibidem*.

<sup>139</sup> Cfr. Ob. Cit. 143. NB. El director además manifestó que “en 1988 ellos presentaron un informe documentado de las violaciones cometidas por agentes del Estado, en el gobierno de León Febres Cordero, incluyendo casos de tortura”.

<sup>140</sup> Ob. Cit. 136.

su relación con éste se vio afectada con la salida del presidente Abdalá Bucaram, tal y como se describe a continuación:

La Comisión Verdad y Justicia estaba compuesta de siete miembros: un Ministro Presidente (Frank Vargas) así como otros tres representantes nombrados por las organizaciones internacionales de derechos humanos trabajando en Ecuador y tres representantes de instituciones nacionales de derechos humanos.

Disponía de un año para realizar sus investigaciones y transmitir sus conclusiones, con la posibilidad de prolongar su mandato. También podía producir reportes sobre temas o casos particulares cuando lo estimara necesario. De éste modo, una comisión especial fue establecida para investigar la desaparición de los hermanos Restrepo de 14 y 18 años quienes fueron reportados desaparecidos en 1988 después de haber sido detenidos por la policía ecuatoriana.

A principios de 1997, varios miembros de la comisión comenzaron a quejarse de la falta de recursos, de equipo y de personal prometido por el gobierno en la resolución de 1996. El 3 de febrero de 1997, la comisión rompe sus relaciones con el gobierno que se encontraba en medio de una crisis política (el presidente Bucaram es destituido y huye del país el 11 de febrero de 1997) <sup>141</sup>.

Siete años después de la salida de Bucaram de la presidencia, el 2 de diciembre de 2004, el presidente de aquella época Lucio Gutiérrez, declaró que “suscribiría un decreto supremo para dar vida a la Comisión de la Verdad que analizaría las violaciones de los Derechos Humanos que se hubieran cometido en los Gobiernos pasados, indicando que aquella estaría conformada por gente notable y valiente”<sup>142</sup>.

En este sentido, el 27 de diciembre de 2004 el ex presidente Bucaram señaló que:

“la integración de la Comisión de la Verdad se dará a mediados del próximo mes refiriéndose a que el coronel Lucio Gutiérrez, se comprometió a crear el organismo a mediados de enero del 2005. Según Bucaram, la Comisión de la Verdad la integrarán personalidades ecuatorianas y extranjeras. Señaló que se ha pensado en el padre de los hermanos Restrepo, desaparecidos durante el gobierno de León Febres- Cordero (1984-

---

<sup>141</sup> Cfr. TRIAL (Track Impunity Always). *Comisión de la Verdad-Ecuador*. Internet. [www.trial-ch.org/es/recursos/comisiones-de-la-verdad/america/equateur.html](http://www.trial-ch.org/es/recursos/comisiones-de-la-verdad/america/equateur.html). Acceso: 25 de agosto de 2014.

<sup>142</sup> Ob. Cit. 143.

1988). También, precisó, se ha sugerido pedir a la Comisión Carter que delegue un miembro y la participación de un abogado de un bufete español para que represente al juez Baltazar Garzón, reconocido internacionalmente por su intervención en la detención de Augusto Pinochet (chileno). El ex mandatario exiliado en Panamá señaló que ya existen documentos para empezar el trabajo de la Comisión, que pondrá especial énfasis en las denuncias contra Febres-Cordero”<sup>143</sup>.

Esta iniciativa no se materializó debido al derrocamiento de Lucio Gutiérrez.

En este orden de ideas, se concluye que el primer intento de búsqueda de los derechos a la verdad, justicia y reparación en el Ecuador, por medio de un mecanismo de Justicia Transicional, fue la Comisión de la Verdad y Justicia, creada en 1996 por el presidente Abg. Abdalá Bucaram. Esta Comisión trajo reacciones diversas dentro del plano nacional e internacional, sin embargo, la falta de apoyo económico y político hizo que esta Comisión no pueda finalizar con su trabajo. En 2004, se anunció que se daría vida a la Comisión, misma que no se materializó. Así, las víctimas y sus familiares debieron esperar once años, desde el primer intento de creación de la Comisión de la Verdad en 1996.

#### *2.1.2.2 Comisión de la Verdad del año 2007*

La Comisión de la Verdad del Ecuador del año 2007, se creó como resultado de un proceso histórico impulsado por diversas organizaciones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y familiares de éstas durante más de veinte años (Comité de Familiares de Presos Políticos, Comité de Familiares contra la Impunidad y en los últimos años El Comité Ecuatoriano No Impunidad -CENIMPU-en el que a más de familiares se integraron también algunas víctimas directas), que venían exigiendo al Estado ecuatoriano una satisfacción adecuada de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación<sup>144</sup>.

Es así, que con el objetivo de recuperar la memoria histórica e investigar los graves casos de violaciones ocurridos en Ecuador, el presidente Rafael Correa expidió

---

<sup>143</sup> Cfr. Diario “El Universo”. *Comisión de la Verdad se creará el próximo mes*. Internet. <http://www.eluniverso.com/2004/12/27/0001/8/D86F1C494C104749B03B0330BA0779DF.html>.

Acceso: 25 de agosto de 2014.

<sup>144</sup> Ob. Cit. 136, pág. 17.

el Decreto Ejecutivo 305<sup>145</sup>, publicado en el Registro Oficial Nro. 187 del 2007, que crea la Comisión de la Verdad con los objetivos de:

- a) Realizar una investigación profunda e independiente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales, como el llamado caso Fybeca, así como las causas y circunstancias que las hicieron posibles.
- b) Solicitar la desclasificación de archivos del Estado que tengan carácter confidencial o de seguridad nacional.
- c) Promover un reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y diseñar las políticas de reparación.
- d) Recomendar las reformas legales e institucionales necesarias, así como los mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos humanos.
- e) Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes<sup>146</sup>.

Las funciones de la Comisión de la Verdad fueron:

- a) “Establecer canales de comunicación y mecanismos de participación de la población, especialmente de la que fue afectada por la violencia.
- b) Gestionar ante el Ministerio de Gobierno las medidas de seguridad para las personas que a criterio de la Comisión, se encuentren en situación de amenaza a su vida o integridad personal.
- c) Entrevistar y recopilar información de cualquier persona en el país o en el exterior, de cualquier autoridad, funcionario o servidor público que se considere pertinente, así como tener acceso a cualquier archivo que se encuentre protegido con el carácter de confidencial o de seguridad nacional.
- d) Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que se considere pertinente. Para tal efecto, la Comisión de Verdad podrá contar con el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante sus labores.

---

<sup>145</sup> Ob. Cit. 24. pág. 23. NB. Los Principios de Chicago, manifiestan que “las comisiones de la verdad pueden ser creadas a través de la legislación, los tratados de paz, decretos u otros actos jurídicos que comúnmente definen un mandato oficial”.

<sup>146</sup> Decreto Ejecutivo 305 publicado el Registro Oficial Nro. 187 del 2007. Art. 2.



- e) Realizar audiencias y diligencias que estime conveniente en forma pública y/o reservada y garantizar la reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o participen en las investigaciones.
- f) Facilitar los mecanismos e información para lograr que las personas involucradas como presuntas responsables en pasadas violaciones de los derechos humanos sean sometidas a los procesos judiciales y las sanciones debidas por los organismos competentes.
- g) Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares.
- h) Manejar la información de los testimonios y documentos de manera reservada”<sup>147</sup>.

La Comisión de la Verdad del Ecuador inició funciones el 14 de enero de 2008. Aunque se previó inicialmente que tendría una duración de solo nueve meses prorrogables por tres más, su mandato fue prorrogado en tres ocasiones mediante decretos presidenciales<sup>148</sup>. Se estableció como fecha de terminación de su trabajo el 7 de junio de 2010, en la presentación del Informe Final<sup>149</sup>.

La Comisión estuvo integrada por cuatro comisionados y contó con un comité de soporte de cinco personas, tres de las cuales eran víctimas y familiares de víctimas<sup>150</sup>.

---

<sup>147</sup> Ibídem. Art. 4.

<sup>148</sup> Ob. Cit. 126, pág. 21-22. NB. Según el decreto de su creación, tendría una duración de nueve meses prorrogables a otros tres que se vencieron en diciembre de 2007. Su mandato fue prorrogado durante tres ocasiones: inicialmente, seis meses por el decreto presidencial 1514, del 29 de diciembre de 2008; luego, tres meses más por el decreto 1794, del 22 de junio de 2009; y finalmente, con el decreto 81, del 30 de septiembre de 2009, se determinó como fecha de terminación de las funciones la presentación del Informe Final.

<sup>149</sup> Cfr. Ob. Cit. 55.

<sup>150</sup> Ob. Cit. 126, pág. 22. NB. La Comisión de la Verdad estuvo integrada por cuatro comisionados: Julio César Trujillo, Luis Alberto Luna Tobar, Elsie Monge Yoder y Pedro Restrepo Bermúdez (art. 7o del decreto), y por un Comité de Soporte conformado por familiares de las víctimas: Mireya Cárdenas, Clara Merino y Francisco Acosta, Ramiro Ávila Santamaría, y un delegado del ministro de Gobierno que, inicialmente, fue Julio César Quiñónez hasta octubre de 2008, Iván Granda hasta febrero de 2009 y Gabriela Espinoza hasta la finalización del informe. Se nombró un Secretario Ejecutivo que tuvo la responsabilidad de coordinar técnica y administrativamente el trabajo de investigación encomendado a la Comisión de la Verdad, de enero de 2008 a enero de 2009 la secretaría estuvo a cargo de Romel Jurado Vargas, y de enero de 2009 hasta el final, el cargo lo desempeñó Cristhian Bahamonde Galarza.

La Comisión contó con un secretario ejecutivo <sup>151</sup> y un equipo investigativo interdisciplinario de profesionales con sede en la ciudad de Quito, además de consultores nacionales e internacionales y un equipo técnico administrativo. Estos profesionales viajaron permanentemente por todo el país para recibir los testimonios de las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos<sup>152</sup>.

*Trabajo de la Comisión de la Verdad*

La Comisión de la Verdad trabajó a partir de declaraciones, documentos desclasificados de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, prensa, expedientes judiciales, entre otros documentos descritos, realizó un relato de los episodios de violaciones a Derechos Humanos y una investigación contrastada con otras fuentes:

Con base en toda la información obtenida, la Comisión de la Verdad estructuró un relato lógico y secuencial de cada uno de los episodios de violación de derechos humanos y realizó su investigación desde una perspectiva de derechos humanos, esta información es: las declaraciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos y con la información de más de 300.000 documentos desclasificados por el Estado, provenientes del Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, además de expedientes judiciales, documentos de prensa, documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; toda esta información que fue contrastada con otras fuentes<sup>153</sup>.

Como resultado, la Comisión de la Verdad preparó un Informe Final en el año 2010, de más de 2.400 páginas. El Informe se compone de cinco tomos con veintiséis secciones o capítulos, en los que se describen y analizan las graves violaciones de Derechos Humanos investigadas por la Comisión, el contexto sociopolítico en el que ocurrieron, las consecuencias o el impacto psicosocial sufrido por las víctimas, las

---

<sup>151</sup> Ibídem. NB. Se nombró un Secretario Ejecutivo que tuvo la responsabilidad de coordinar técnica y administrativamente el trabajo de investigación encomendado a la Comisión de la Verdad, de enero de 2008 a enero de 2009 la secretaría estuvo a cargo de Romel Jurado Vargas, y de enero de 2009 hasta el final, el cargo lo desempeñó Cristhian Bahamonde Galarza. Fuente: Comisión de la Verdad.

<sup>152</sup> Ob. Cit. 85.

<sup>153</sup> Cfr. Ob. Cit. 126. pág. 19.

estructuras institucionales involucradas y los presuntos responsables<sup>154</sup>. La estructura del Informe, según el Libro “Breve descripción y contenido del informe final de la Comisión de la Verdad de Ecuador”, es la siguiente:

En el tomo 1, se analiza los delitos y prácticas de violaciones a Derechos Humanos, se establece el número de víctimas y los tipos de violaciones. En el tomo 2, se examina los contextos socioeconómicos y políticos en los años investigados, en relación a la estrategia de reprimir a la oposición política, por estructuras especiales de la Policía como de las Fuerzas Armadas. En los tomos 3 y 4, se hace un relato de los casos investigados y los resultados de la investigación documental y de campo. En el tomo 5, se presenta la lista de las víctimas y de los presuntos responsables, su implicación, el grado de su participación, el cargo o función que detentaban y la institución a la que pertenecían<sup>155</sup>.

Asimismo, existen las conclusiones del Informe y 155 recomendaciones que incluyen reformas legales e institucionales (como el proyecto de Ley de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos), y medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición, un programa de víctimas y mecanismos para superar la impunidad<sup>156</sup>.

El Informe, cuenta con un Resumen Ejecutivo de 435 páginas para facilitar su lectura y difusión. Adicionalmente, la Comisión produjo un documental de dos horas de duración, con la finalidad de facilitar una mayor difusión. Por último, fuera del informe, se preparó un análisis legal para respaldar la judicialización de los casos<sup>157</sup>.

En el mencionado Informe se identificó y señaló a los presuntos perpetradores a los Derechos Humanos; de esta manera, se establecieron los siguientes datos:

---

<sup>154</sup> Cfr. América Latina en movimiento ALAINET. *Víctimas dicen que sin verdad no hay justicia: Comisión de la Verdad entregó informe*. Disponible en: <http://alainet.org/active/38775>.

<sup>155</sup> Ob. Cit. 85.

<sup>156</sup> *Ibídem*.

<sup>157</sup> *Ibídem*.

456 personas fueron víctimas directas de violaciones graves a sus derechos. Dado que se cometieron varios delitos contra una misma persona, la cifra de perpetraciones asciende a 831 violaciones de derechos humanos.

La mayor parte de las víctimas, 311, -el 68 por ciento- se produjo bajo el gobierno de León Febres Cordero, y las otras 145 víctimas corresponden al resto del período analizado. En ese lapso de casi dos décadas, el mayor número de víctimas que rindieron su testimonio corresponde a los años 1993, 97, 99 y 2003.

En 94 de los 118 casos de violaciones graves de derechos humanos –es decir en el 80% del total- la Comisión de la Verdad identificó a presuntos responsables con distintos grados de implicación, entre ellos, superiores directos o máximas autoridades de las dependencias en que se produjeron los hechos. Se establecieron 460 presuntos responsables. Siendo mencionados como supuestos responsables por ejemplo: León Febres-Cordero, Carlos Pareja, Washington Herrera y Édgar Vaca<sup>158</sup>, Jaime Nebot, y al ex mandatario, Abdalá Bucaram<sup>159</sup>. Dentro de los responsables de la violación de los derechos humanos en el periodo 1984 -1988 se menciona a oficiales de la Policía Nacional, autoridades de gobierno y políticos<sup>160</sup>. Del total de presuntos responsables:

- casi el 50 por ciento corresponde a oficiales y miembros activos y pasivos de la Policía Nacional,
- el 28 por ciento son miembros activos y pasivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas,
- el 10 por ciento son ex autoridades de distintos gobiernos,
- el 6 por ciento son funcionarios o ex funcionarios judiciales,
- y el 6 por ciento restante corresponde a ex autoridades o agentes de estados extranjeros”<sup>161</sup>.

---

<sup>158</sup> NB. Ex comandante de la Policía Nacional, Édgar Vaca, fue mencionado por la Comisión de la Verdad como presunto responsable de violaciones a los derechos humanos. A él se lo vincula con 10 casos de detención y tortura contra integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo.

<sup>159</sup> NB. A Jaime Nebot y a Abdalá Bucaram se los acusa de presenciar las torturas de Juan Cuví, ex miembro de Alfaro Vive, cuando se desempeñaban como gobernador del Guayas y alcalde de Guayaquil, en su orden. A Nebot se lo señala también como testigo de la tortura a los comandos de aviación que participaron en el caso Taura, en el que se vincula además a Miguel Orellana, ex Secretario de la Presidencia y a Luis Robles Plaza, ex ministro de Gobierno. Diario “El Universo”. *Fiscalía investigará casos de Comisión de la Verdad*. Internet: <http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/alistan-juicios-civiles-penales-violaciones-dd-hh.html>. Acceso: 15 de enero de 2015

<sup>160</sup> Ibídem.

<sup>161</sup> Cfr. O Cfr. IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Reparación Desafíos para la democracia y la convivencia social*. Artículo “Reconciliación luego de Conflictos Violentos: un marco

Un total de nueve casos de violación a los Derechos Humanos, en el que se registraron diecisiete víctimas, ocurrieron durante los años 2007 y 2008 que corresponden al gobierno del presidente Rafael Correa<sup>162</sup>. Éstos son:

- a) la represión ejercida por el Ejército (18 de junio del 2007) en las poblaciones de Pindo y Dayuma, es uno de los casos. Como consecuencia de la represión a las manifestaciones, varias personas resultaron con heridas de bala; sin embargo, la Comisión de la Verdad no menciona a los responsables, pero sí a las víctimas: William Cruz, Jorge Macías, Genit Maribel Solórzano y Luis Suquilanda. Respecto de este caso, el presidente, Rafael Correa, afirmó durante la recepción del informe, que la Comisión de la Verdad omitió convocar a declarar a todos los involucrados, entre ellos, a los militares que resultaron heridos de bala o al juez que conoció la causa.
- b) caso de la violencia sexual, cometida en contra de Álex Santander, un detenido en la cárcel de Azogues que fue sometido a torturas (junio 2007), cuando cumplía su condena de cuatro años de prisión.
- c) Un morador de La Tola, en la provincia de Esmeraldas, fue ejecutado por miembros de la Marina, durante una minga de la comunidad (6 de octubre del 2007) y no permitieron que sus familiares o amigos lo ayuden”<sup>163</sup>.

Se debe recordar que la importancia del derecho a la verdad, radica en que las víctimas puedan: contar la verdad histórica negada por la historia oficial, averiguar qué ocurrió y que la sociedad conozca los hechos y no se repitan<sup>164</sup>.

---

teórico” de Carlos Martín Beristán. Unidad de Información y de Servicio Editorial del IIDH, San José de Costa Rica, 2005, pág. 18.

<sup>162</sup> Diario “El Universo”. *Nueve casos implican al Gobierno de Correa*. Internet: <http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/nueve-casos-implican-gobierno-correa.html>. Acceso: 15 de septiembre de 2014.

<sup>163</sup> Diario “El Universo”. *Nueve casos implican al Gobierno de Correa*. Internet: <http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/nueve-casos-implican-gobierno-correa.html>. Acceso: 15 de septiembre de 2014.

<sup>164</sup> Cfr. IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Reparación Desafíos para la democracia y la convivencia social*. Art. “Reconciliación luego de Conflictos Violentos: un marco teórico” de Carlos Martín Beristán. San José de Costa Rica. Unidad de Información y de Servicio Editorial del IIDH, 2005. Pág. 18.

En el Ecuador, si bien el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad fue trascendental para que las víctimas puedan contar su verdad, pues se recogieron sus testimonios, queda pendiente el deber del Estado de garantizar que estos hechos no se repitan y que se sancione a los responsables, ya que la verdad por sí misma no trae la reconciliación; es sólo un ingrediente de la misma<sup>165</sup>.

#### *Reacciones sobre trabajo de Comisión de la Verdad*

Antes de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, en octubre de 2009, la Comisión de Defensa Jurídico-Institucional de la Policía Nacional publicó el Libro “Terrorismo y Subversión-La Verdad que no se ha dicho”, donde se da a conocer detalles, documentos, fotografías e investigaciones de los hechos delictivos que presuntamente cometieron miembros de AVC, Montoneras Patria Libre y otras organizaciones que estaban aliadas al movimiento M-19<sup>166</sup>. Además, se realizan acusaciones a las organizaciones de Derechos Humanos como la Hna. Elsie Mongue de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos como protectoras de los derechos de los delincuentes; también se detallan hechos y datos de miembros de la Policía Nacional heridos o asesinados en actos delictivos<sup>167</sup>.

Otra de las reacciones a la publicación del Informe de la Comisión fue la del General Edgar Vaca<sup>168</sup>, quien manifestó que:

---

<sup>165</sup> Ibídem.

<sup>166</sup> Cfr. Comisión de Defensa Jurídico-Institucional de la Policía Nacional. *Terrorismo y Subversión. La verdad que no se ha dicho*. Quito, segunda edición, 2010. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/143159555/Terrorismo-y-Subversion-en-Ecuador>.

<sup>167</sup> Cfr. Diario “Ecuador Inmediato”. *Policías dan su versión sobre terrorismo y subversión en un libro*. Internet.

[http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=118088&umt=policias\\_dan\\_version\\_sobre\\_terrorismo\\_y\\_subversion\\_en\\_un\\_libro](http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=118088&umt=policias_dan_version_sobre_terrorismo_y_subversion_en_un_libro). Acceso: 15 de octubre de 2014.

<sup>168</sup> NB. Edgar Gonzalo Vaca Vinuesa, fue desde 1967 hasta 2003 miembro de la Policía Nacional de Ecuador; en 1986 dirigió la Unidad de Investigaciones Especiales, un grupo de élite de la Policía, experto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En esa unidad permaneció cumpliendo diversas funciones hasta 1995. El informe de la Comisión de la Verdad del año 2010, señala que diez casos involucran al ex comandante de la Policía, Édgar Vaca. La mayoría están relacionados con ex militantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), como responsable del desaparecido SIC-10. Entre los denunciantes está Beatriz Jarrín, hermana del ex líder de AVC, Arturo Jarrín, quien dijo que Vaca estuvo presente durante

No descarta adoptar acciones legales por el informe. El ex comandante de Policía, general Édgar Vaca, rechazó el informe de la Comisión de la Verdad, en el que lo involucran por aparentemente ser responsable en la detención, tortura y violación de derechos humanos durante los periodos 1984 hasta la época de Lucio Gutiérrez. Vaca no descarta adoptar acciones legales si él va detenido por las acusaciones del informe <sup>169</sup>.

Otra reacción es la del actual Alcalde de Guayaquil Abg. Jaime Nebot<sup>170</sup>, quien manifestó que el Informe de la Comisión de la Verdad tiene “una redacción mañosa”<sup>171</sup>.

José Gallardo, ex General relacionado con el Caso Sabanilla, sobre la Comisión de la Verdad manifestó:

Lo que señala el informe de la Comisión es una tontería y una payasada porque la sociedad de Loja estaba asombrada de ver que un comandante de Brigada (de Infantería) era responsable de cuidar la seguridad de la provincia y que no cometía ningún acto contra la población. Los capturamos, hicimos un interrogatorio breve y al

---

su tortura, cuando la interrogaban sobre otros militantes de la agrupación subversiva en las instalaciones del SIC de Pichincha. Así como ella, Piedad Jarrín también testificó que fue Édgar Vaca quien la torturó y la amenazó con hacerla abortar mientras la ‘interrogaba’ en esa dependencia. Además, las investigaciones de la Comisión de la Verdad revelaron que Vaca dirigió un oficio al director del Departamento Nacional de Investigación de las Fuerzas de Defensa de Panamá para localizar a Arturo Jarrín, lo cual significaba que conocía de la presencia del ex líder de AVC en ese país, un hecho que las autoridades ecuatorianas siempre negaron. Edgar Vaca, además es representante de la Comisión de Defensa Jurídico - Institucional de la Policía. Fuente: Diario “El Telégrafo”. *Edgar Vaca podría esclarecer varios casos de lesa humanidad*. Internet: <http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/edgar-vaca-podria-esclarecer-varios-casos-de-lesa-humanidad.html>. Acceso: 15 de septiembre de 2014.

<sup>169</sup> Ob. Cit. 129.

<sup>170</sup> Ob. Cit. 125. NB. El Abg. Jaime Nebot es una de las autoridades de Estado citadas en el Informe como posibles responsables de “crímenes de lesa humanidad”. Cuando León Febres Cordero era Presidente de la República, Nebot era Gobernador del Guayas. La investigación de la CV detalla cómo Nebot presenció las torturas en al menos cuatro casos.

<sup>171</sup> Diario “El Comercio”. *Jaime Nebot niega supuestos abusos de DD.HH.* Internet. [www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/jaime-nebot-niega-supuestos-abusos.html](http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/jaime-nebot-niega-supuestos-abusos.html). Acceso: 17 de octubre de 2014.

otro día los llevamos de la frontera a Loja, para entregarlos a las autoridades. Eso fue todo<sup>172</sup>.

El ex vicepresidente de la República Blasco Peñaherrera, por su parte rechazó el informe de la Comisión de la Verdad, al opinar que:

Es un informe mutilado. Sobre todo la reproducción en ciertos medios ha sido mutilada, porque omiten lo fundamental, que es describir la situación política en la que se produjeron los hechos. En el gobierno de Febres-Cordero se combatió a la insurgencia. Las movilizaciones terroristas de Alfaro Vive, Patria ni se cuánto; produjeron asaltos, asesinatos de miembros de la Policía, cobardes asesinatos de un empresario como el señor Briz, como el señor Isaías. Toda clase de atentados que fueron combatidos severamente y por suerte eliminados, los brotes terroristas, no las personas. En el informe no se hace referencia alguna a los actos delictivos perpetrados por los terroristas”. Para Peñaherrera la falencia sería que el Informe es “una de las tantas maniobras que se han hecho en América Latina para reescribir la historia, es decir, escribir una historia amañada según los intereses de la extrema izquierda”; sin embargo afirma que en el Gobierno de Febres-Cordero “hubo atentados a los derechos humanos de parte de los guerrilleros también, y en alguna medida –sin duda– de los miembros de la Policía”. Sobre la judicialización consideró que es: “un disparate sin cabeza que no tiene sentido, porque esta es una denuncia de orden político, estrictamente de orden político y las denuncias de orden político no se procesan judicialmente<sup>173</sup>”.

El Asambleísta Andrés Páez, manifestó:

Que cada uno de los contenidos del documento debe ser analizado, “con pinzas, rigurosidad y prudencia. Páez resaltó que la administración [Rodrigo Borja] eliminó el Servicio de Investigación Criminal y formó una Comisión para investigar la desaparición de los hermanos Restrepo<sup>174</sup>”. “Ese gobierno tuvo un compromiso con los

---

<sup>172</sup> Ibídem.

<sup>173</sup> Diario “El Universo”. Blasco Peñaherrera P.: “Es una denuncia de orden político”. Internet. [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/blasco-penaherrera-pes-denuncia-orden-politico.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/blasco-penaherrera-pes-denuncia-orden-politico.html). Acceso: 15 de septiembre de 2014.

<sup>174</sup> NB. El informe señala que durante el gobierno de Rodrigo Borja, entre los años 1988 y 1992 se cometieron 10 casos de violación a los derechos humanos.



derechos humanos”, dijo y espera que el informe no se transforme en un instrumento de persecución”<sup>175</sup>.

Ante estas reacciones, es importante recalcar el criterio de Elsie Mongue, quien manifestó que:

La defensa real de los derechos humanos toma distancia de cualquier juicio sobre las víctimas. No importan sus motivaciones o las opciones ideológicas que determinaron su conducta. Nada atenúa la gravedad de los delitos ni excusa las violaciones cometidas.

Y esas violaciones, aparte de mostrar el abuso de poder de las autoridades implicadas, dejaron al descubierto la peligrosa deformación de conceptos de los agentes de la fuerza pública respecto de sus obligaciones<sup>176</sup>.

Entonces se puede establecer que la Comisión de la Verdad, fue creada en el año 2007 por Decreto Ejecutivo del presidente Eco. Rafael Correa, sin embargo ésta es una muestra de la lucha de las organizaciones de familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Como parte final de su trabajo, la Comisión elaboró un Informe Final, anteriormente explicado. Cabe recalcar que en específico, la creación de Comisiones de la Verdad, responden a los Principios de Chicago sobre la consecución del derecho de las víctimas a la verdad.

En este sentido, el Ecuador formalmente cumplió con una de las aristas del derecho a la verdad al crear la Comisión y obtener resultados de la misma como el Informe Final. Sin embargo, el derecho a la verdad va más allá de la creación de la institucionalidad, ya que éste tiene una dimensión individual y colectiva, es imprescriptible e inalienable, no puede ser satisfecho por investigaciones realizadas por Comisiones de la Verdad u otros organismos, pues sólo logra su objetivo cuando es un juez independiente el que investiga y sanciona a los responsables de violaciones a los derechos fundamentales<sup>177</sup>. Como mencionamos en el Capítulo I la creación de éstas no

---

<sup>175</sup> Diario “El Universo”. *Fiscalía investigará casos de Comisión de la Verdad*. Internet. <http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/alistan-juicios-civiles-penales-violaciones-dd-hh.html>.

<sup>176</sup> Cfr. Ob. Cit. 164.

<sup>177</sup> Luis Giancarlo Torreblanca. *El Derecho a la Verdad en el ámbito Iberoamericano*. Ius Humani, v. 3, 2012-2013. Pág. 31.

restringue la obligación de esclarecer la verdad histórica de los hechos, ni de investigar y sancionar a los responsables.

Por lo tanto, con la Creación de la Comisión de la Verdad en 2007, no se satisface el derecho de las víctimas a la verdad, ni puede ser tomada como el cumplimiento de la obligación de esclarecer los hechos, investigar y sancionar.

## **2.2 Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía**

La Fiscalía General del Estado previó iniciar las investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1984 y 2008, después de recibido el Informe de la Comisión de la Verdad<sup>178</sup>, con el fin de efectivizar el derecho de las víctimas a la justicia.

El ministro de Justicia de la época, José Serrano, señaló que las violaciones registradas serán parte de “una hoja de ruta” para continuar con juicios civiles y penales, “judicializando y sancionando a los responsables”<sup>179</sup>. De esa tarea estarían a cargo la Subsecretaría de Derechos Humanos y los comisionados que elaboraron el informe. El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, también se sumó a esas voces asegurando que el organismo no permitirá que la historia de tortura, desaparición y muerte, que detalla la Comisión de la Verdad, quede en la impunidad<sup>180</sup>.

En este marco, por Resolución No. 049-2010-FGE<sup>181</sup> del 25 de noviembre de 2010, el Fiscal General Dr. Washington Pesantez crea la “Unidad Especializada”, integrada por un equipo con personal operativo que actuará a nivel nacional y conocerá

---

<sup>178</sup> Diario “El Universo”. *Fiscalía investigará casos de Comisión de la Verdad*. Internet: [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/alistan-juicios-civiles-penales-violaciones-dd-hh.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/alistan-juicios-civiles-penales-violaciones-dd-hh.html). Acceso: 15 de septiembre de 2014.

<sup>179</sup> *Ibídem*.

<sup>180</sup> *Ibídem*.

<sup>181</sup> Resolución 049-2010-FGE. Registro Oficial 267, 30-VIII-2010.

exclusivamente los casos denunciados por la "Comisión de la Verdad", con el objetivo de investigar los presuntos cometimientos de violaciones de los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad. Así, se manda a que "en todas las provincias donde se hubieren cometido violaciones de los Derechos Humanos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, el Fiscal Provincial designará un Agente Fiscal corresponsal, encargado de proporcionar información e intervenir en diligencias que se practiquen en la provincia; además el Equipo operativo deberá disponer y actuar en cuanto diligencia sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los presuntos responsables de infracciones penales, para lo cual entre otras diligencias solicitará experticias especializadas"<sup>182</sup>.

El fiscal general del Estado, Washington Pesantez, declaró sobre la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad que "Cree que es necesario formar un equipo de 15 ó 20 fiscales y, si es indispensable, contratar a expertos para que contribuyan a esclarecer la verdad", sobre las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos; señaló que "al país, al Estado ecuatoriano, al mundo le interesa conocer la verdad" y agregó que, "sobre la verdad, se tomarán las decisiones judiciales enmarcadas en el debido proceso"<sup>183</sup>.

Para el 2011, se manifestó que el Ecuador tiene 40 casos de la Comisión de la Verdad que están en la Fiscalía General del Estado para investigación y que potencialmente van a ser documentados como casos de tortura a través del Protocolo de Estambul<sup>184</sup>.

En julio de 2011, cuando llega la administración de Galo Chiriboga Zambrano a la Fiscalía General del Estado, analizando que los avances no eran mayores, decide en marzo de 2012, cambiar la naturaleza de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad a la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, con el

---

<sup>182</sup> Cfr. Ibídem. Art. 3 y 4.

<sup>183</sup> Revista "Vistazo". *Fiscalía creará unidad especial para investigar delitos de Estado*. Internet. [www.vistazo.com/webpages/pais/?id=10387](http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=10387). Acceso: 16 de septiembre de 2014.

<sup>184</sup> Memoria Seminario Latinoamericano de Salud Integral y Derechos Humanos. *Fortalecimiento de los procesos de incidencia en políticas públicas con relación a la documentación y prevención de la tortura*. Lima, DIAMA Consorcio C.A., 2011. Pág. 22.

objetivo de coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio nacional<sup>185</sup>.

En conclusión, a raíz de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General del Estado previó iniciar las investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos, creando mediante Resolución 049 en noviembre de 2010, la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad para investigar exclusivamente estos casos, determinando que en todas las provincias donde se hubieren cometido violaciones de los Derechos Humanos se designe un agente fiscal corresponsal y de ser necesario, un equipo de 20 fiscales y expertos en la temática.

Posteriormente en marzo de 2012, se cambia la naturaleza de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad a la *Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos*, con el objetivo de coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio nacional.

### **2.2.1 Descripción de casos relevantes judicializados por la fiscalía hasta julio de 2014<sup>186</sup>.**

*Casos Arturo Jarrín, Susana Cajas y Luis Vaca*

Los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra Arturo Jarrín, Susana Cajas y Luis Vaca, se encuentran actualmente en procesos judiciales ante la justicia ecuatoriana. Los hechos del caso señalan que estas personas fueron sometidas en los años 80 a torturas, desaparición forzada, entre otros delitos.

---

<sup>185</sup> Cfr. Fiscalía General del Estado. *Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos*. Internet. <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/servicios/fiscalias-especializadas/comision-de-la-verdad.html>. Acceso: 16 de septiembre de 2014.

<sup>186</sup> NB. La Fiscalía General del Estado a la presente fecha ha presentado procesos penales en los casos: Lema, Damián Peña, Gonzales y otros y Susana Cajas, Luis Vaca y Arturo Jarrín Jarrín.

El 10 de noviembre de 1985, tres integrantes del Grupo Alfaro Vive AVC, Arturo Jarrín Susana Cajas y Luis Vaca, fueron detenidos mientras estaban reunidos en un restaurante del sector del parque infantil de la ciudad de Esmeraldas. Al día siguiente, los trasladaron atados y con capuchas en las cabezas hasta el cuartel de Conocoto, al sur-orienté de Quito, donde en ese entonces funcionaba el CIQ (Centro de Inteligencia Quito). Al cabo de 15 días, Susana y Javier Jarrín fueron sacados de la celda en la madrugada y llevados a un terreno baldío. A los pocos minutos pasó un patrullero, presumiblemente con personal del Servicio de Investigación Criminal SIC 10, y los llevó a una instalación policial donde los ingresaron acusados de portar documentos falsos; luego los llevaron al penal, de donde salieron después de un año<sup>187</sup>.

Luis Vaca permaneció detenido por tres años; su madre intentó buscarlo, pero de alguna manera su identidad en el Registro Civil fue borrada, por lo que las autoridades de ese entonces, cuestionaron la existencia de su hijo. Después fue abandonado en la madrugada al frente de su casa, en Ibarra<sup>188</sup>.

En relación al caso de Arturo Jarrín, Susana Cajas y Luis Vaca, la Fiscalía llevó este caso a la justicia en el 2013, constituyendo el primer caso de delitos contra lesa humanidad documentado por la Comisión de la Verdad, en el que serían acusados diez mandos policiales y militares de los años ochenta, por supuestos delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada<sup>189</sup>.

Así, acusó a diez ex oficiales militares y policiales<sup>190</sup> de supuesta tortura, desaparición forzada y agresión sexual contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín.

---

<sup>187</sup> Cfr. Ob. Cit. 125, pág. 176.

<sup>188</sup> Diario “El Telégrafo”. Comisión de la Verdad señala a mentalizadores. Internet. [www.telegrafo.com.ec/justicia/item/comision-de-la-verdad-senala-a-mentalizadores.html](http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/comision-de-la-verdad-senala-a-mentalizadores.html). Acceso: 17 de septiembre de 2014.

<sup>189</sup> Cfr. Diario “El Universo”. *Fiscalía denunciará violaciones a DD.HH.* Internet. <http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/27/nota/1501271/fiscalia-denunciara-violaciones-ddhh>. Acceso: 16 de septiembre de 2014.

<sup>190</sup> NB. Luis P., ex ministro de Defensa del gobierno de León Febres-Cordero; Jorge Asanza., también ex ministro de Defensa en el período y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; Carlos Jarrín Jarrín, ex director de Inteligencia del Ejército (de septiembre de 1985 a enero de 1986); Marcelo Delgado Alvear,

Posteriormente el 03 de Octubre de 2013, la mencionada jueza Lucy Blacio, ordenó la prisión preventiva contra el ex ministro de Defensa Luis P. y el ex comandante de la Policía Edgar V., de quienes se conoció que ya abandonaron el país. La misma medida contra Fernando R., ex médico de la unidad militar, mientras que dispuso arresto domiciliario contra el resto de implicados<sup>191</sup>.

Uno de los argumentos usados por la Fiscalía del Ecuador es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, según el Estatuto de Roma<sup>192</sup>. Además, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 80 establece que " las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles". Por su parte, el Código Penal también refiere la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, como lo establece el Art. 114.6 del título V: "Las acciones y penas previstas para los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, o crímenes de agresión a un Estado son imprescriptibles"<sup>193</sup>. Para Farith Simon "los delitos de lesa humanidad ya están definidos en el Estatuto de Roma y son aquellos que repugnan a la conciencia de los seres humanos y, por sus características, deben ser perseguidos en toda circunstancia y

---

ex director de Inteligencia (de enero de 1987 a agosto de 1988); Juan Viteri Vivanco., ex comandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto; Mario Apolo William, ex director del AIM; Nelson Enríquez Gómez, exjefe del Servicio de Inteligencia de Quito (SIQ); Guillermo Rodríguez, también ex director del SIQ; Fernando Ron Villavicencio, ex médico de la AIM y de quien se presume vigilaba las torturas y suministraba el denominado "suero de la verdad" a los detenidos; y Édgar V., exjefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC 10), responsable de la "lucha antiterrorista". Fuente: Diario "El Telégrafo". *Jueza dicta prisión para 3 ex oficiales por actos de tortura*. Internet. [www.telegrafo.com.ec/politica/item/jueza-dicta-prision-para-3-ex-oficiales-por-actos-de-tortura.html](http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/jueza-dicta-prision-para-3-ex-oficiales-por-actos-de-tortura.html). Acceso: 14 de octubre de 2014.

<sup>191</sup> *Ibidem*.

<sup>192</sup> El Ecuador suscribió el 7 de octubre de 1998 el Estatuto de Roma -aprobado el 17 de julio de 1998 y ratificado por sesenta Estados hasta el once de abril del 2002-, que entra en vigor, en forma general, el 1 de julio del 2002, sexagésimo día a partir de la fecha en que el Estado-Parte depositó el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, como para terceros Estados en algunos aspectos de acuerdo al *ius cogens*. Fuente: Bolívar Vergara. "El Ecuador y la implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno". *Revista Jurídica Online Universidad Católica de Guayaquil*. Disponible en: [www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=121&Itemid=65](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=65).

<sup>193</sup> Ob. Cit. 179.

en todo tiempo, para evitar la impunidad. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar un juicio justo e imparcial a los procesados, respetando el debido proceso y aplicando la normativa existente para el efecto”<sup>194</sup>.

La ex presidenta de la Comisión, Elsie Monge, recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Insistió en que la judicialización del caso de Vaca, Cajas y Jarrín permitirá evitar la impunidad y abrirá las puertas para que se avance en el resto de procesos, que ahora están en la fase de indagación previa<sup>195</sup>.

El siguiente cuadro publicado por el Diario “El Telégrafo”<sup>196</sup> nos permitirá conocer en orden cronológico la judicialización del mencionado Caso Cajas, Vaca y Jarrín:

**CRONOLOGÍA** El proceso inició con la conformación de la Comisión de la Verdad

2007	2010	2010	2011	2012	2013
<b>Creación.</b> El 3 de mayo se formó la Comisión de la Verdad para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1984 y 2008.	<b>Informe.</b> La compilación de los casos se hizo pública en junio de 2010. Al mes siguiente la comisión entregó la documentación a la Fiscalía para las investigaciones judiciales.	<b>Unidad.</b> El 25 de noviembre la Fiscalía creó la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad para indagar 118 casos con soporte documental para investigación judicial.	<b>Cambio.</b> El fiscal general Galo Chiriboga cambió la estructura de la unidad, tras determinar que hubo pocos avances en el trabajo de investigación hasta julio de ese mismo año.	<b>Dirección.</b> En marzo, la unidad cambia a Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos para apoyar e investigar casos de delitos de lesa humanidad dentro del territorio nacional.	<b>Juicio.</b> El director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, dijo el 26 de septiembre que irá ante la justicia por primera vez un caso de crímenes de lesa humanidad.

**Cuadro 1: Cronología de Caso Cajas, Vaca y Jarrín**

Actualmente, a enero de 2015, la justicia ratificó el arresto domiciliario en contra de tres de los implicados<sup>197</sup>; además, denegó el recurso de aclaración y ampliación del auto de llamado a juicios presentados por los procesados<sup>198</sup>.

<sup>194</sup> Apuntes Jurídicos. *Que son los delitos de Lesa Humanidad*. Internet. <http://apuntesjuridicos.com.ec/?IDNOTICIA=5161&tlo=%EF%BF%BDQu%EF%BF%BD%20son%20delitos%20de%20lesa%20humanidad?> Acceso: 15 de octubre de 2014.

<sup>195</sup> Cfr. Diario “El Universo”. Otros casos de la Comisión de la Verdad en indagación”. Internet. <http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/03/nota/1531056/otros-casos-comision-verdad-indagacion>. Acceso: 16 de septiembre de 2014

<sup>196</sup> Ob. Cit. 179.

<sup>197</sup> Diario “El Telégrafo”. *Caso “Vaca, Cajas, Jarrín: 3 procesados continúan con arresto domiciliario*. Internet: <http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/caso-vaca-cajas-jarrin-3-continuan-con-arresto-domiciliario.html>. Acceso: 18 de enero de 2015.

Cuando se crea una Dirección de Derechos Humanos en la Fiscalía, el caso González y otras, comúnmente conocido como el “Casos las Dolores”, fue uno de los escogidos para ser de los primeros a investigar<sup>200</sup>. Se trata de los asesinatos cometidos en la Farmacia Fybeca en noviembre de 2003 y las desapariciones forzadas de cuatro personas<sup>201</sup>.

Los policías que actuaron en este operativo fueron investigados por el fuero policial, por supuesto abuso de autoridad y fueron sobreseídos. Posteriormente, la Corte Nacional consideró que los jueces actuaron sin competencia. Además, se abrió una investigación por desaparición forzada, misma que fue archivada porque el fiscal de la investigación, decidió cerrar el caso aceptando el argumento policial que sí se los había detenido, pero los habían puesto en libertad<sup>202</sup>.

La Teoría del Caso para la Fiscalía es que se cometió asesinato, en contexto de ejecución extrajudicial como grave violación a los Derechos Humanos. Así lo sostuvo el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, en la audiencia de juicio<sup>203</sup>.

El 06 noviembre de 2014, la Corte Nacional de Justicia, dictó sentencia en contra de los ocho imputados y los sentenciaron a 16 años de reclusión como autores del delito de ejecución extrajudicial en la modalidad de asesinato, tipificado en el Art. 450

---

<sup>198</sup> Diario “Ecuador Inmediato”. *Tribunal negó recurso de aclaración y ampliación en caso “Vaca, Cajas, Jarrín”*. Internet: [http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=2818772986&umt=tribunal\\_negf3\\_recurso\\_de\\_aclaracif3n\\_y\\_ampliacif3n\\_en\\_caso\\_22vaca2c\\_cajas2c\\_jarredn22](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818772986&umt=tribunal_negf3_recurso_de_aclaracif3n_y_ampliacif3n_en_caso_22vaca2c_cajas2c_jarredn22). Acceso: 18 de enero de 2015.

<sup>199</sup> Diario “Plan V”. *Caso Dolores el retorno del terror*. Fecha de búsqueda: 13 de sep. de 14. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/caso-dolores-el-retorno-del-horror>.

<sup>200</sup> *Ibídem*.

<sup>201</sup> *Ibídem*.

<sup>202</sup> *Ibídem*.

<sup>203</sup> Fiscalía General del Estado de Ecuador. *El caso “Las Dolores” devela su verdad tras 11 años de impunidad*. Internet: [www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2715](http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2715). Acceso: 05 de noviembre de 2014.



del Código Penal anterior. Se ratificó la inocencia del ex comandante de la Policía y se declaró culpable al ex fiscal Carlos P. como encubridor<sup>204</sup>.

Adicionalmente, se estableció por concepto de indemnización las siguientes cantidades: a Dolores Briones se le indemnizará con \$ 224.600 y a Dolores Vélez se le entregará \$ 210.334, a Olga Reyes, por la muerte y desaparición de sus hijos José y Vicente, se le pagará \$196.064, Iris Vergara, por la muerte de su esposo, recibirá \$186.500<sup>205</sup>.

### **2.2.2 Principales retos y dificultades de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía**

Era evidente que, como deber del Estado con posterioridad al Informe de la Comisión de la Verdad, se debía realizar un proceso real y garantista del derecho a las víctimas a la Justicia. Así por ejemplo, Cristian Bahamonde, Secretario de la Comisión de la Verdad, manifestó que el trabajo posterior de la Comisión requiere de:

“esfuerzos complementarios que involucren a las instancias competentes del Estado, con objeto de dar seguimiento a sus recomendaciones y avanzar efectivamente en la investigación y judicialización de los hechos por lo que la publicación del Informe Sin Verdad no hay Justicia no constituye el final, sino el principio de un largo camino que no puede postergarse”<sup>206</sup>.

Por estas razones, como se analizó en el Capítulo 2, a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Ecuador, se constituyó la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos en la Fiscalía, misma que está encargada de la judicialización de los 118 casos documentados por la Comisión, varios de ellos colectivos, con un total de 456 víctimas en seis tipos de violaciones de los Derechos Humanos entre 1984 y 2008.

---

<sup>204</sup> Diario “El ciudadano”. *Se dictó sentencia en caso las Dolores*. Internet: <http://www.elciudadano.gob.ec/tribunal-penal-de-la-cnj-dicto-sentencia-en-caso-las-dolores/>. Acceso: 18 de enero de 2015.

<sup>205</sup> *Ibíd.*

<sup>206</sup> Ob. Cit. 85.

Cuando se inició con los procesos de Susana Cajas, Arturo Jarrín Jarrín y Luis Vaca, el Director de la Comisión de la Verdad, Fidel Jaramillo, declaró que “Ecuador tiene un muy claro afán de no permitir la impunidad y de que, antes de que sea demasiado tarde, las víctimas accedan a su derecho a la verdad y la justicia”<sup>207</sup>. Además, manifestó en entrevista pública que:

“este proceso, es una reivindicación de la justicia ecuatoriana, afirma, y un cumplimiento del compromiso internacional que tiene el país por los derechos humanos, y espera que este vaya más allá de los perpetradores materiales, sino que alcance también a los perpetradores intelectuales, o de oficina, como los calificó Jaramillo, quien además señaló que los hallazgos presentes en el informe de dicha comisión demuestran una práctica política que habría violado los derechos humanos durante la época de terrorismo de Estado en el país, para lo cual utilizaron en su momento mecanismos definidos por la CIA [...]”<sup>208</sup>.

Fidel Jaramillo, también mencionó que “la Fiscalía tiene la intención de judicializar los 136 casos que presentó la Comisión, pero esto no implica que todos se inicien con la audiencia de formulación de cargos, como en el caso de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín”<sup>209</sup>.

Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado ecuatoriano, en relación a los casos de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, afirmó que “La investigación de casos de lesa humanidad y de graves violaciones de los derechos humanos en el Ecuador, no busca la venganza sino la reparación integral a las víctimas, estas violaciones se dieron en un régimen supuestamente constitucional, donde están

---

<sup>207</sup> Diario “El Universo”. *Fiscalía denunciará violaciones a DD.HH.* Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/09/27/nota/1501271/fiscalia-denunciara-violaciones-ddhh](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/27/nota/1501271/fiscalia-denunciara-violaciones-ddhh). Acceso: 16 de septiembre de 2014.

<sup>208</sup> Diario “Ecuador en vivo”. *Comisión de la Verdad dice que proceso judicial por lesa humanidad ratifica compromiso del país en derechos humanos.* Internet: [www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/12710-comision-de-la-verdad-dice-que-proceso-judicial-por-lesa-humanidad-ratifica-compromiso-del-pais-en-derechos-humanos.html](http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/12710-comision-de-la-verdad-dice-que-proceso-judicial-por-lesa-humanidad-ratifica-compromiso-del-pais-en-derechos-humanos.html). Acceso: 13 de octubre de 2014.

<sup>209</sup> Cfr. Diario “El Universo”. *Algunos casos de la Comisión de la Verdad no irán a juicio.* Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1557936/algunos-casos-cv-no-iran-juicio](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1557936/algunos-casos-cv-no-iran-juicio). Acceso: 16 de septiembre de 2014.

vinculados actores judiciales de aquella época, integrantes de instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin embargo, la Fiscalía ha llevado las investigaciones con absoluta objetividad”<sup>210</sup>.

Dentro de la investigación, sorprenden las declaraciones de Fidel Jaramillo, quien en una entrevista en radio Universal, expresó que no se judicializarían varios casos debido al fallecimiento de los presuntos violentadores:

“una gran parte de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos que investigó la Comisión de la Verdad (CV) no podrían ser judicializados porque varios de los presuntos responsables habrían fallecido”. Según Jaramillo, el informe de la Comisión menciona a los presuntos responsables históricos de la supuesta violación a los derechos humanos; pero como algunos ya fallecieron, en el plano de lo penal “no tendríamos a quién acusar”<sup>211</sup>.

Adicionalmente, ante la falta de celeridad en los procesos de judicialización de los casos investigados por la Comisión de la Verdad, la Mesa Nacional de Familiares y Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, comenzó a manifestar sus posiciones. Así, Clara Merino, vocera de este grupo, expresó que durante cuatro años solo se han judicializado cuatro casos de los 136 que fueron tratados por la Comisión. Por esta razón, exigen que la Fiscalía General del Estado actúe con celeridad y eficacia en los procesos de judicialización. Criterio similar tiene Susana Cajas, vocera y ex miembro de AVC, quien comenta que hay una demora clara por parte de la Fiscalía. “La conformación de la mesa coordinará reuniones con la Fiscalía para ir analizando los nudos críticos que ha significado la demora en la judicialización”<sup>212</sup>.

---

<sup>210</sup> Cfr. Diario “El Ciudadano”. “No se busca la venganza sino la reparación integral” fiscal. Internet. <http://www.elciudadano.gob.ec/no-se-busca-la-venganza-sino-la-reparacion-integral-de-las-victimas-fiscal/>. Acceso: 22 de septiembre de 2014.

<sup>211</sup> Cfr. Diario “El Universo”. *Algunos casos de la Comisión de la Verdad no irán a juicio*. Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1557936/algunos-casos-cv-no-iran-juicio](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1557936/algunos-casos-cv-no-iran-juicio). Acceso: 16 de septiembre de 2014.

<sup>212</sup> Diario “Explored”. *Victimas de lesa humanidad: cuatro casos se han judicializado de 136*. Internet. <http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/victimas-de-lesa-humanidad-cuatro-casos-se-han-judicializado-de-136-610139.html>. Acceso: 18 de enero de 2015.

Hasta inicios del año 2015, la Fiscalía ha judicializado 7 casos, de los 118 que registró la Comisión de la Verdad sobre violaciones a derechos humanos, es decir el 5,9 % de casos investigados por la Comisión de la Verdad.

En este sentido, se observa que la principal dificultad de la Dirección de la Comisión de la Verdad es que han pasado cuatro años desde la entrega del Informe, y en este tiempo únicamente se han logrado judicializar 7 casos; lo que implica, tentativamente, que no se esté respetando el derecho a la justicia y verdad de las víctimas. Inclusive, estos derechos deben enfrentarse al hecho de que los presuntos responsables de varios casos estarían muertos.

Es imprescindible analizar que el derecho a la justicia es reconocido nacional e internacionalmente como un derecho fundamental dentro de una sociedad democrática, con un mayor énfasis en un contexto transicional, ya que el Estado está obligado por todos los medios a garantizar este derecho, si bien la obligación de investigación es de medio y no de resultado, en el Ecuador aparentemente con la demora en la judicialización a los responsables y en reconocimiento público de sus funcionarios en que no se judicializarán todos los casos, está incumpliendo con su obligación de respeto al derecho a la justicia.

## **2.3 Ley para la Reparación de las víctimas y la Judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad (Ley de Víctimas).**

### **2.3.1 Antecedentes fácticos y legales para la creación de la Ley.**

Con fundamento en el Art. 6 del decreto de creación de la Comisión de la Verdad, en el Informe Final del año 2010, se presentó también un proyecto de Ley que contenía los mecanismos institucionales requeridos para que se continúen los esfuerzos

por la superación de la impunidad de las graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad de responsabilidad del Estado cometidos en Ecuador<sup>213</sup>. De esta manera, se pretendía hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación.

En base a este proyecto de Ley, la Defensoría del Pueblo presentó el 08 de junio de 2010, el proyecto de “Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008”<sup>214</sup> (en adelante, “Ley de Víctimas”), al Presidente de la Asamblea Nacional. Acorde al Art. 136 de la Constitución, se generaron dos debates para analizar la factibilidad de la Ley en base al Art. 137 del citado cuerpo legal. El 15 de julio de 2013 se reunió el pleno de la Asamblea para discutir en segundo debate la Ley de Víctimas; posteriormente, el Presidente en uso de las atribuciones del Art. 138 de la Constitución, inciso segundo, vetó la Ley de Víctimas. Parcialmente, se aceptó este veto por la Asamblea Nacional, el 26 de noviembre del 2013, y la Ley de Víctimas fue publicada el 13 de diciembre de 2013, en el Registro Oficial.

El 01 de Octubre de 2013, el mismo día en el que la Corte Nacional de Justicia resolvió dar inicio de la instrucción fiscal en el caso Cajas, Vaca y Jarrín, 92 legisladores aprobaron en segundo debate el proyecto de ley<sup>215</sup>.

Esta Ley plantea regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador, entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008, que fueron documentadas por la Comisión de la Verdad. Además, debe garantizar la judicialización de estas violaciones. Se reconoce también la responsabilidad del Estado ecuatoriano

---

<sup>213</sup> Ob. Cit. 125, pág. 24.

<sup>214</sup> Diario “El Universo”. *Proyecto que plantea indemnizar a víctimas fue entregado a la Asamblea*. Internet. [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/proyecto-plantea-indemnizar-victimas-fue-entregado-asamblea.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/proyecto-plantea-indemnizar-victimas-fue-entregado-asamblea.html). Acceso: 15 de septiembre de 2014.

<sup>215</sup> Diario “Ecuador al día”. *Asamblea del Ecuador aprueba ley de víctimas para reparar las violaciones de derechos humanos*. Internet. <http://ecuadoraldia.ec/index.php/9-noticias/3255-asamblea-del-ecuador-aprueba-ley-de-victimas-para-reparar-las-violaciones-de-derechos-humanos>. Acceso: 22 de septiembre de 2014.

sobre las violaciones de los Derechos Humanos y reconoce que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad<sup>216</sup>.

Por mandato del Art. 7 de la Ley de Víctimas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Programa de Reparación de la Defensoría del Pueblo, debía reglamentar el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento<sup>217</sup>.

Paralelo a la publicación de la ley, la ex presidenta de esa instancia, Elsie Monge, “criticó que la Asamblea haya demorado más de tres años en aprobarla y que la norma final no recogiera del todo el proyecto original”<sup>218</sup>.

#### *Objeción a la Ley de Víctimas*

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 92 votos a favor resolvió de forma distinta la objeción parcial a la Ley de Víctimas. Ramiro Aguilar (Suma) propuso que se ratifique en los textos del proyecto inicial aprobado por la Asamblea. A su juicio, la objeción del Ejecutivo no es correcta, porque no se puede poner en la ley como requisito previo la identificación del torturador para ejercer el derecho de repetición. Probada la tortura, la reparación tiene que hacerla el Estado<sup>219</sup>.

Durante el debate, se produjeron varias críticas a las investigaciones sobre el informe de la Comisión de la Verdad. El ex general, René Yandúm, cuestionó que “se persiga 6 ex generales que tiene orden de prisión por posibles violaciones a los derechos

---

<sup>216</sup> Diario “El Universo”. *Ley de reparación avala el trabajo de la Comisión de la Verdad*. Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/10/02/nota/1529441/ley-reparacion-victimas-avala-trabajo-comision-verdad](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/02/nota/1529441/ley-reparacion-victimas-avala-trabajo-comision-verdad). Acceso: 05 de noviembre de 2014.

<sup>217</sup> Ob. Cit. 58.

<sup>218</sup> Diario “El Universo”. *Reglamento repara daños ciertas víctimas*. Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/12/08/nota/1885151/reglamento-reparar-danos-ciertas-victimas](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/08/nota/1885151/reglamento-reparar-danos-ciertas-victimas). Acceso: 13 de octubre de 2014.

<sup>219</sup> Diario “El Mercurio”. *No pasó la objeción a la Ley de Víctimas*. Internet: [www.elmercurio.com.ec/407464-no-paso-la-objecion-a-la-ley-de-victimas/#.VCILRFcZGZR](http://www.elmercurio.com.ec/407464-no-paso-la-objecion-a-la-ley-de-victimas/#.VCILRFcZGZR). Acceso: 23 de septiembre de 2014.

humanos, y rechazó la actitud de “ciertos asambleístas y ciertas autoridades” a las cuales les tildó de “antimilitaristas y antipoliciales”.

## **2.4 Programa de Reparación por vía administrativa de la Defensoría del Pueblo y Reglamento de Acuerdos Reparatorios por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Museo de la Memoria y otras acciones.**

El Art. 7 numeral 2 de la Ley de Víctimas establece que, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (en adelante MJDHC) debe reglamentar el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento. En este sentido, y con el fin de cumplir con su mandato legal, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos expidió el “Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento”, por medio del Acuerdo 0865, de 03 de febrero de 2015.

Adicionalmente, por Resolución No. 198-DPE-CGAJ-2014, de fecha 13 de noviembre de 2014, la Defensoría del Pueblo expidió las “Directrices para regular el procedimiento para el programa de reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos Documentadas por la Comisión de la Verdad”.

Sin embargo, la disposición general primera de la Ley de Víctimas, prescribió que en un plazo de 90 días, el MJDHC, Defensoría del Pueblo y demás instituciones involucradas, deberán implementar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las responsabilidades determinadas por este cuerpo.

De lo anterior podemos colegir, que el MJDHC incumplió con este mandato, ya que transcurrieron 381 días entre la expedición del Reglamento y la publicación de la Ley (02 de febrero 2015-13 de diciembre 2014) y la Defensoría del Pueblo incumple con 299 días de retraso (13 de noviembre 2014-13 de diciembre 2014).

A continuación, se hará una breve descripción de las “Directrices para regular el procedimiento para el programa de reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos Documentadas por la Comisión de la Verdad” de la Defensoría del Pueblo y del “Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento” del MJDHC. Además, se analizará el Museo de la Memoria y la develación de un mural en conmemoración de las víctimas por la Fiscalía General del Estado.

#### **2.4.1 Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento” del MJDHC**

El Objeto del Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento (en adelante, Reglamento del MJDHC) es establecer el procedimiento administrativo para acordar el monto de la indemnización en los casos en que haya lugar y las medidas para su cumplimiento.

El ámbito del cuerpo normativo es a favor de las víctimas de los casos de violaciones de DDHH documentados por la Comisión de la Verdad, cometidos entre el 04/10/1983 y el 31/12/2008, excepto quienes hayan recibido indemnización del Estado.

Los principios sobre los que se rige son: buena fe, proporcionalidad, celeridad, no revictimización, equidad, no discriminación, gratuidad y accesibilidad, acceso a la información.

Se establece que los beneficiarios son: la víctima directa o en su falta el cónyuge o pareja en unión de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

El procedimiento será el siguiente:

- A) Remisión del expediente



La Defensoría del Pueblo remite el expediente documentado del Programa de Reparación por vía administrativa.

- B) Fase previa

Recepción, examen y registro del expediente.

Aceptación a trámite e inicio del proceso de negociación (Notificación hasta 10 días de recibido el expediente).

No cumple requisitos, no se acepta el trámite y se devuelve.

- C) Proceso de negociación

Propuesta de indemnización (30 días plazo desde la notificación).

Convocatoria al proceso de negociación (dentro de 15 días plazo) víctima o beneficiarios, PGE y DPE.

Realización de audiencias de negociación con Comisión Negociadora

Conclusión del proceso: a) Acuerdo indemnizatorio; o, b) Acta de imposibilidad de acuerdo.

Suscripción y proceso de pago.

El Reglamento prescribe que el daño material (Art. 15), comprende el: daño emergente, lucro cesante, daño físico, detrimento comprobado del patrimonio; en cambio el daño inmaterial o moral (Art. 16) será: la compensación económica por los sufrimientos (aflicciones, angustia, terror...), para ejecución extrajudicial y desaparición forzada la indemnización será por la infracción más grave. Se establece que el monto máximo será 280 Salarios Básicos Unificados, es decir para el año 2015, es \$ 99.120.

Además, el Reglamento prescribe las siguientes prohibiciones: La víctima o beneficiarios no podrán recibir doble indemnización por los mismos hechos documentados. Por lo que, no podrán demandar al Estado otra indemnización en vía judicial, o en el Sistema Interamericano o Universal de Protección de DDHH. En caso de acuerdo, el MJDHC notificará a la Procuraduría, a efectos de que no exista doble indemnización. El MJDHC coordinará con el Ministerio de Finanzas el respectivo proceso de pago, a través de la notificación del acuerdo indemnizatorio.

Además de esta descripción, como Anexo 1, se encuentra un resumen del Reglamento en mención.

### *Cuestionamientos a Reglamento*

La Defensoría del Pueblo y el MJDHC por solicitud de la Mesa Nacional de Víctimas, organizaron varios Talleres de Socialización de los Procesos de Reparación Integral que ha llevado el Estado ecuatoriano, el 13 de marzo de 2015 en Quito, el 09 de abril de 2015 en Cuenca. A continuación se describirán las principales inquietudes:

Juan Sebastián Medina, Subsecretario de Derechos Humanos y Cultos, indicó que el Ecuador ya cuenta con una institucionalidad clara para la reparación, se explicó el Reglamento expedido por el MJDHC; las víctimas por su parte cuestionaron los plazos de acceso a los beneficios, requisitos formales como las declaraciones judiciales o notariales de las uniones de hecho, el techo del monto máximo establecido en caso de daño inmaterial (280 SBU), la división de procedimientos entre la DPE y el MJDHC<sup>220</sup>.

Ante lo anterior se respondió que, en la Ley de Víctimas existe un problema de técnica legislativa que divide los procedimientos en la reparación, sin embargo ambas instituciones trabajarán en conjunto para cumplir con los plazos de las normas. Por otro lado, se explicó varios casos análogos del SIDH donde los montos de reparación estaban relacionados.

### **2.4.2 Directrices para regular el procedimiento para el programa de reparación por vía administrativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos Documentadas por la Comisión de la Verdad”.**

La Defensoría del Pueblo, en base a la Ley de Víctimas, tiene la competencia sobre el programa administrativo de reparación inmaterial.

Dentro de sus competencias, Yolanda Galarza, manifestó en los mencionados Talleres de Socialización de los Procesos de Reparación Integral, que sus líneas de trabajo son: rehabilitación física y apoyo psicológico, coordinación con el Ministerio de

---

<sup>220</sup> Ob. Cit. 54.

Salud, a través de una alianza para la atención en Salud, acompañamiento en procesos penales, eliminar nombres del Record, medidas simbólicas y medidas de satisfacción

Las acciones que hasta ahora ha realizado y realizará la Defensoría del Pueblo en base a sus competencias de coordinación son: colocar nombres de víctimas a escuelas del Milenio, se buscará modificar por medio del Ministerio de Educación los textos de bachillerato sobre 1984-1988 y en varios colegios se ha proyectado el Documental de la Comisión de la Verdad, se han eliminado nombres del Record Policial, se otorgó la verdadera identidad a Eloy Basantes, se han atendido solicitudes de víctimas que no forman parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

### **2.4.3 Museo de la Memoria**

La Ley de Víctimas en la Disposición General Segunda dispone “en el plazo de noventa días, el Ministerio rector en materia de cultura dará inicio a la creación del “Museo de la Memoria”, dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ecuador”<sup>221</sup>.

Así, el Museo de la Memoria nace por disposición de la Ley de Víctimas, ante lo cual, Andrea Nina, Subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, manifestó que se ha hecho una propuesta a la Defensoría del Pueblo y al Centro Cultural de Desarrollo, para materializar el museo en un ala del Regimiento Quito Nro. 2, con el siguiente cronograma: a) se empezará con una muestra de contexto social, espacios artísticos, tecnológicos; b) se realizarán exposiciones a cielo abierto en el Centro Histórico de Quito, para ciudadanizar la propuesta del Museo; 3) se ejecutarán exposiciones a nivel nacional, ya que existen 14 museos a nivel nacional donde se podrían realizar las muestras. Ante esta propuesta las víctimas manifestaron lo siguiente:

a) Se felicita la propuesta, pero se solicita que el espacio del Museo en el Regimiento Quito sea total, para no descontextualizar y aislar la globalidad de

---

<sup>221</sup> Ob. Cit. 84.

violaciones a DDHH. Parecería que la policía únicamente da un espacio corto, a su criterio, debe ser un espacio de memoria digno.

b) Se propone que el Museo no es la única forma de recuperar la memoria, y que se podría desarrollar libros, documentales, etc., ya que la memoria debe ser viviente. Además, se debería reformar los textos de historia y Ciencias Sociales, por ejemplo, el Municipio de Guayaquil da a la ciudadanía textos históricos donde se da la versión de la historia por parte del Partido Social Cristiano.

c) Piden revivir, reeditar la historia, reeditar a las víctimas, sesiones de tortura. La juventud ha olvidado el precio de una lucha.

d) La reparación inmaterial no es una dádiva que debe dar el Estado, sino una obligación.

e) Las víctimas deben fijar los contenidos.

f) Se debe recordar cada caso, no únicamente a los AVC, las víctimas de Taura solicitan se haga el museo en todos los espacios de tortura. Inclusive el espacio llamado “infiernillo”. Deben ser espacios más dinámicos<sup>222</sup>.

Ante estas inquietudes, Andrea Nina manifestó que los contenidos se realizarán en conjunto con las víctimas e indicó que se trabajará con el Ministerio de Educación y la Asociación de Municipalidades<sup>223</sup>.

### **2.3.4 Otras acciones**

El 10 de diciembre del 2014 y en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, develó en los exteriores de su edificio de Quito el mural ‘Grito de la Memoria’, obra del pintor y muralista ecuatoriano Pavel Éguez<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> Ibídem.

<sup>223</sup> Ibídem.

<sup>224</sup> Diario “Confirmado”. Fiscalía develó Mural “Grito de la Memoria” en homenaje a víctimas de violaciones de DDHH. Internet. <http://www.confirmado.net/fiscalia-develo-mural-grito-de-la-memoria-en-homenaje-victimas-de-violaciones-de-ddhh/>. Acceso: 19 de enero de 2015.

El mural vincula la temática de los Derechos Humanos a los capítulos históricos de represión estatal registrados a finales de los años 70 y principios de los 80, en Ecuador y América Latina donde varios países se encontraban bajo regímenes dictatoriales<sup>225</sup>.

Para la Fiscalía la obra pictórica constituye parte de la reparación simbólica a las víctimas, tal como se contempla en el art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece a más de una indemnización económica, una reivindicación inmaterial<sup>226</sup>.

De esta manera, se concluye en este capítulo que, en el Ecuador el derecho a la verdad se ha visto manifiesto por medio de la creación de la Comisión de la Verdad, a raíz de ésta, han surgido dos procesos como son: a) la judicialización de casos a cargo de la Fiscalía General del Estado misma que busca proteger el derecho de las víctimas a la Justicia ; y, b) la Ley de Víctimas, misma que ha creado un Programa de Reparación y una posibilidad de llegar a un acuerdo indemnizatorio con el Estado, a fin de proteger el derecho a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, se busca crear un Museo de la Memoria y se han realizado otras acciones como la develación de un Mural por parte de la Fiscalía General del Estado.

---

<sup>225</sup> Ibídem.

<sup>226</sup> Ibídem.

# **CAPÍTULO III.- DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR.**

Hasta este punto, se puede determinar que la Justicia Transicional alude a aquellos procesos políticos y jurídicos por medio de los cuales una sociedad, donde han existido violaciones de Derechos Humanos, busca la reconciliación, y ésta se traduce en los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Se buscó garantizar los Derechos a la Verdad y a la Justicia en el Ecuador, con la creación de la Comisión de la Verdad, además, por intermedio de la Judicialización de casos a cargo de la Fiscalía del Estado. Asimismo, para garantizar el Derecho de Reparación, se creó la Ley de Víctimas, cuerpo legal que prevé la reglamentación y ejecución del Programa de Reparación por vía Administrativa, a cargo de la Defensoría del Pueblo y de los Acuerdos de Indemnizatorios, a cargo del MJDHC.

En este capítulo, se analizará cómo la Justicia Transicional puede tener dos usos, uno democrático y otro manipulador; adicionalmente, se indagará si los procesos de Justicia Transicional en el Ecuador responden a los estándares nacionales e internacionales de respeto a las víctimas de los derechos a la verdad, justicia y reparación. Para finalizar, se conocerán los estándares que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad y su aplicabilidad a la Ley de Víctimas de Ecuador.

## **3.1 Uso manipulador de los procesos de Justicia Transicional en el Ecuador**

Según el criterio de Rodrigo Uprimny y María Paula Saffón, se puede identificar al menos dos usos del discurso de la Justicia Transicional, que dependen de los diferentes intereses que puede servir, a saber: el uso manipulador y el uso democrático de la Justicia Transicional, descritos de la siguiente manera:

a) El primero consiste en el uso del discurso de la Justicia Transicional, y en particular de los derechos de las víctimas, con el principal propósito de ocultar la impunidad. Se trata de un uso manipulador, en la medida en que adopta el lenguaje de la Justicia Transicional como un instrumento meramente retórico, a través del cual no se realiza ninguna transformación material o práctica, pero sí se obtiene un importante efecto simbólico.

Dichas fórmulas son diseñadas y acordadas haciendo caso omiso de los derechos de las víctimas y, como tal, son enteramente moldeadas por la política.

b) El segundo uso posible del discurso de la Justicia Transicional se caracteriza por su naturaleza democrática o emancipatoria. Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, son concebidos como herramientas para lograr ese propósito, el uso democrático de dicho discurso consiste precisamente en reclamar la aplicación efectiva de estos mecanismos.<sup>227.</sup>

En base a estos criterios se analizará el proceso de Justicia Transicional en el Ecuador; pero primero, se debe establecer si el derecho a las víctimas a la verdad, justicia y reparación, se encuentra garantizado y respetado en el Ecuador.

### **3.2 Los procesos de Justicia Transicional en Ecuador responden al derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, en base a los estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos.**

#### **3.2.1 Sobre el derecho a la justicia y a la verdad**

En el segundo capítulo se analizó la conformación de la Comisión de la Verdad en Ecuador, misma que identificó a 456 víctimas de violaciones a Derechos Humanos dentro de 118 casos; de esta manera, cumplió con las directrices dadas por su decreto de creación con apego a los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional.

---

<sup>227</sup> Cfr. Ob. Cit. 22.

Para Elsie Mongue, la entrega de la información en el Informe Final de la Comisión de la Verdad constituyó, sin duda, un importante aporte para la construcción del derecho a la verdad y la justicia:

“Tan importante como hacer justicia es impedir que esta historia se repita. El “nunca más” es un acto colectivo y permanente de memoria y aprendizaje que comienza por el reconocimiento de los hechos por parte de todas las instituciones y dependencias estatales involucradas en esos actos. Sigue por la toma de responsabilidad por parte del estado; demanda la dignificación de las víctimas a través de un pedido formal de perdón a toda ellas; y continúa con el compromiso público de no repetición de los hechos.

Para Elsie, el “esclarecimiento de la verdad, la determinación, juzgamiento y sanción de los responsables, la reparación integral a las víctimas y las reformas legales para prevenir la repetición de los hechos son acciones complementarias que no se debe postergar”<sup>228</sup>.

A la luz de lo señalado por esta Corte, las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad, por lo que el Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, lo cual ha sido considerado por este Tribunal como un mecanismo de reparación<sup>229</sup>.

La Corte IDH ha determinado que, si bien los Estados pueden crear Comisiones de la Verdad que contribuyan a la construcción y preservación de la memoria histórica, esto no sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad, a través de procesos judiciales<sup>230</sup>.

Conforme a la anterior idea es obligación del Ecuador iniciar investigaciones penales para determinar responsabilidades. Por lo tanto, a raíz de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General del Estado previó iniciar las

---

<sup>228</sup> Cfr. Ob. Cit. 161.

<sup>229</sup> Corte IDH. *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108. Párr. 81.

<sup>230</sup> Corte IDH. *Caso Contreras y otros vs. El Salvador*. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. Nro. 232, párr. 135.



investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos. Así, se creó por Resolución 049 en noviembre de 2010, la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad para investigar exclusivamente estos casos, se mandó que en todas las provincias donde se hubieren cometido violaciones de los Derechos Humanos se designe un agente fiscal corresponsal, y se contó con un equipo de 20 fiscales y expertos en la temática.

Posteriormente, en marzo de 2012, se cambia la naturaleza de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad a la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con el objetivo de coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio nacional.

Pese a este importante avance en la institucionalización de la protección del derecho a la justicia de las víctimas, hasta inicios del 2015, la Fiscalía ha judicializado únicamente 7 casos, es decir el 5,9 % de su totalidad. Es así que el Estado se enfrenta a la dificultad de que han pasado cuatro años desde la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad, y en este tiempo únicamente se han logrado judicializar 7 casos, lo que implica que no se está respetando el derecho a la justicia y verdad de las víctimas.

Se debe recordar que la Justicia Transicional es, una justicia que mira tanto hacia el pasado como hacia el futuro, ya que no solo tiene que ver con la garantía de la justicia retributiva penal con respecto a los crímenes cometidos en el pasado, sino que pretende dar cuenta de una noción mucho más amplia de justicia, en la que el conocimiento de lo que pasó, la reparación de los daños causados a la víctimas por los crímenes y las violaciones cometidas y el diseño de instituciones que garantice que los horrores del pasado no volverán a repetirse<sup>231</sup>.

La Corte IDH, ha dicho que el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación<sup>232</sup>.

---

<sup>231</sup> Cfr. Ob. Cit. 11, pág. 26.

<sup>232</sup> Aplicación De La Resolución 60/251 De La Asamblea General, De 15 De Marzo De 2006, Titulada

El preámbulo de la Ley de víctimas también ha destacado la importancia del esclarecimiento de la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas:

[...] el esclarecimiento de la verdad, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de las graves violaciones, la reparación integral a las víctimas y las reformas legales e institucionales para prevenir la repetición de tales violaciones, son medidas interdependientes, complementarias e inaplazables<sup>233</sup>;

En el primer capítulo se indicó cómo la justicia es una de las principales búsquedas de la humanidad; y se describió cómo el derecho a la justicia es reconocido en el Derecho Internacional como una obligación de los Estados de investigar las violaciones graves a los Derechos Humanos. Así mismo la Constitución ecuatoriana prescribe este derecho y la Ley de Víctimas reconoció la responsabilidad del Ecuador por violaciones a la tutela efectiva y acceso a la justicia.

El acceso a la justicia, ha sido definido por la Comisión IDH como un derecho humano fundamental, consagrado en el Art. 8 y 25 de Convención ADH<sup>234</sup>.

Hacer efectivo este derecho implica la obligación estatal de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona, sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados. El acceso efectivo a la justicia requiere además, que las personas conozcan los derechos de los que son titulares y los mecanismos disponibles para exigirlos<sup>235</sup>.

Es así que, el Art. 8 de la Convención ADH consagra el derecho al debido proceso, sobre éste, la Jurisprudencia de la Corte IDH ha expresado que este derecho es una de las garantías esenciales del procedimiento para la protección de los derechos,

---

"Consejo De Derechos Humanos". El Derecho A La Verdad

<sup>233</sup> Ob. Cit. 52.

<sup>234</sup> Cfr. CIDH. *El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales*. Estudio de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington, 2007. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/AccessoDESC07sp/Accessodescv.sp.htm>.

<sup>235</sup> Ibídem.

pues permite la tutela judicial efectiva e implica el acceso a la justicia formal<sup>236</sup>. En consecuencia, es obligación de los Estados suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de DDHH, los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal<sup>237</sup>, en armonía con el art. 8.1 de la Convención ADH<sup>238</sup>, que es el derecho que toda persona tiene a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente<sup>239</sup>, independiente<sup>240</sup> e imparcial<sup>241 242</sup>.

Carlos Martín Beristaín, ha manifestado que la justicia por sí sola no conduce al éxito de los procesos de reconstrucción postconflicto; pues en muchas ocasiones, las víctimas que han sufrido graves daños ven con suspicacia los procesos de reconciliación, en razón de que los perciben como excusas para ignorar sus sufrimientos o pasar rápidamente por encima de ellos<sup>243</sup>.

En base a estos argumentos, se observa que: el Ecuador ha dado un paso muy importante en el reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia con la Comisión de la Verdad, ya que ésta identificó a presuntos responsables con distintos

---

<sup>236</sup> Corte IDH. *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.

<sup>237</sup> Corte IDH. *Caso Mohamed Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2012. Serie C No. 255, párr. 82 y *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C. No. 250, párr. 191.

<sup>238</sup> Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párr. 76.

<sup>239</sup> Cfr. Corte IDH. *Caso Apitz Barbera ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C. No. 182, párr. 50.

<sup>240</sup> Corte IDH. *Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr.186.

<sup>241</sup> *Ibíd.*

<sup>242</sup> Además otros instrumentos internacionales reconocen el derecho a un recurso a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, por ejemplo, el Art. 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Art. 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

<sup>243</sup> *Ob. Cit.* 54.

grados de implicación, entre ellos, superiores directos o máximas autoridades de las dependencias en que se produjeron los hechos; se establecieron 460 presuntos responsables. La Ley de Víctimas también representó una premisa fundamental para el reconocimiento de la responsabilidad del Ecuador por violaciones a la tutela efectiva y el acceso a la Justicia.

Sin embargo, para que un Estado cumpla con los estándares de respeto a este derecho, se debe garantizar el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Actualmente, se encuentran en indagación previa 136 casos, lo que ha llevado a que únicamente 7 casos se encuentren en etapa procesal penal. Sin embargo, como se manifiesta en los hechos relatados en el capítulo segundo, la investigación de la Fiscalía se ha retardado aparentemente sin razones legítimas; y, en relación con la razonabilidad del plazo, la Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables<sup>244</sup>.

La Corte IDH ha establecido que para determinar la razonabilidad debe considerarse: a) la complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso<sup>245</sup>.

En este sentido, no es razonable el plazo, puesto que en relación al primer punto, el Estado puede acceder de manera normal a la información para realizar su investigación<sup>246</sup>. Respecto del segundo punto, al encontrarse la investigación en etapa

---

<sup>244</sup> Corte IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114.

<sup>245</sup> Corte IDH. *Caso Bayarri Vs. Argentina*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 107; y *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 155.

<sup>246</sup> Corte IDH. *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname*. Sentencia de 15 de junio de 2005, (Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas), párr. 162.

de indagación previa y por ser ésta de carácter pre procesal<sup>247</sup> y privada (no pública), corresponde al Estado el ejercicio de la acción penal y en consecuencia, no se puede trasladar al interesado la carga del ejercicio de la acción penal pública, pues el titular es el Estado<sup>248</sup>. En virtud del tercer punto, el Estado ha retardado la investigación en una etapa pre procesal por cuatro años; y, es evidente entonces, que el Estado no puede alegar un retardo justificado beneficiándose de su falta de diligencia. En cuanto al cuarto punto, es indiscutible la afectación generada al retardar la justicia e impedir el ejercicio pleno del derecho a la verdad de las víctimas, pues no se puede esperar a determinar responsables de un asesinato por un período tan largo de tiempo, pues la consecuencia directa es la revictimización de los ofendidos<sup>249</sup>.

La Corte IDH también ha señalado que el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, las cuales deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho<sup>250</sup>.

Ante este señalamiento hecho por la Corte IDH, cabe destacar lo mencionado por Diego Peñafiel, Asesor de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado:

Han existido varios obstáculos en el país para alcanzar los procesos de justicia, por ejemplo, Fidel Jaramillo, se ha manifestado sobre la imposibilidad de la desclasificación de documentos, la imposibilidad que se obtenga información Pública, que sigue calificando como secreta o extraviada; por otro lado, jamás se había hablado con seriedad con respecto a la gravedad y fraudulencia que tienen ciertas actuaciones judiciales, en las que justamente los propios policías o los propios militares intervinieron muchas veces en el cometimiento de los delitos investigados.

---

<sup>247</sup> Jaime Bernal Cuellar. *El proceso penal. Fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio*. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2004.

<sup>248</sup> Corte Constitucional Colombiana. *Sentencia T-293/13*, 2013. Pág. 5.

<sup>249</sup> CIDH. Alegatos ante la Corte IDH en relación al *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*, Sentencia del 8 de Septiembre de 2005, párrafo 111.c).

<sup>250</sup> Corte IDH. *Caso Mémoli Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr.193.

En el caso Fybeca [denominado actualmente como “Caso Gonzales y otros”] ha tenido ya la primera sentencia, respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros desde la fiscalía estamos conscientes, de lo largo y difícil que ha sido éste proceso [judicialización de casos], hemos hecho algo ya en el proceso, aún está pendiente el tema de las desapariciones forzadas, todavía está pendiente los 140 casos de la Comisión de la Verdad, vamos alrededor de 7 casos judicializados, sin embargo esto casos como mencionó Fidel Jaramillo, abren una punta de lanza para todos los demás, porque empiezan a dejar los primeros precedentes jurídicos reales de la imprescribibilidad de éstos hechos, de la cosa juzgada fraudulenta de éstos hechos, y por tanto la Fiscalía ha iniciado éste proceso, y permanentemente ha estado ocultando a todas las Instituciones del Estado<sup>251</sup>.

De esta manera, se visualiza que la Fiscalía ha manifestado que existen varias dificultades para garantizar el derecho a la justicia como son la imposibilidad de la desclasificación de los documentos e información. Se prevé que estos siete casos judicializados abran esquemas para el esclarecimiento de más casos.

Dentro de la Casa Abierta Memoria, Justicia y Género: La Comisión de la Verdad, se dieron varios puntos de vista de los panelistas y de los presentes en el auditorio sobre el derecho a la justicia en el Ecuador, así se consideró que:

El derecho a la justicia de las víctimas es una parte vital de la garantía de derechos de un estado; en el Ecuador la Comisión de la Verdad, únicamente encontró pistas e identificó el tipo de infracción, por lo tal, le corresponde al justicia la judicialización de los casos, ya que un Informe no es una sentencia y por lo tal, le corresponde a los jueces investigar.

Se consideró en la actualidad aparentemente la justicia difícilmente podrá investigar la verdad, porque con la judicialización de únicamente 4 casos de la Comisión de la Verdad, se estaría dando una especie de justicia selectiva. Inclusive se podría decir que presuntamente los procesos de surgieron a raíz de la Comisión de la Verdad [Judicialización de casos por intermedio de la Fiscalía, Ley de Víctimas, etc.], son

---

<sup>251</sup> Carlos Peñafiel. Asesor Jurídico de la Fiscalía General del Estado. *Seminario Internacional Verdad, Justicia y Reparación*. Organizado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Quito, 09 de diciembre de 2014.

únicamente una forma de instrumentación y justificación del poder mediante mecanismos judiciales, tomando como analogía la Teoría crítica de Michael Foucault<sup>252</sup>.

En este orden de ideas, se concluye que si bien, el Ecuador reconoce el derecho a la justicia de las víctimas, éste no se ha materializado acorde a las necesidades de las mismas, no obstante, sí se ha dado un efecto simbólico de legitimación de las actuaciones del Estado.

### **3.2.2 Sobre el derecho a la reparación de las víctimas**

Habitualmente se habla de reparación como el conjunto de medidas y políticas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de la violencia<sup>253</sup>.

Todas las medidas poseen una dimensión de integralidad. Una integralidad interna, que supone que los criterios y la manera de llevarse a cabo tienen coherencia con su sentido; y, una externa entre las diferentes medidas, dado que el significado que adquieren es interdependiente de su relación<sup>254</sup>.

La falta de integralidad en el diseño, y particularmente en el cumplimiento, puede cuestionar el significado de las medidas. Por ejemplo, una medida de satisfacción como el reconocimiento público de responsabilidad puede perder sentido si se demora excesivamente. La reparación económica es una forma de asumir la responsabilidad; pero su cumplimiento, en ausencia de pasos significativos que muestren la voluntad del Estado en la investigación de los hechos, o la sanción a los responsables, cuestiona su sentido y transmite frecuentemente una idea equivocada sobre ella. En este sentido, las medidas de reparación deben tener coherencia entre sí para ser realmente eficaces, no pueden verse aisladas<sup>255</sup>.

---

<sup>252</sup> Cfr. Flacso. Casa Abierta Memoria, Justicia y Género: La Comisión de la Verdad. Quito, 10 de Julio de 2014. Sala de Conferencias N. 2. Panelistas invitados: Julio César Trujillo, Natalia Sierra, Ramiro Ávila, Clara Merino.

<sup>253</sup> Ob. Cit. 85. pág. 43.

<sup>254</sup> Ob. Cit. 4. pág. 175.

<sup>255</sup> Ibídem.

El derecho a la reparación integral como se analizó en el primer capítulo, comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho (i) a la restitución, (ii) a la indemnización, (iii) a la rehabilitación, (iv) a la satisfacción y (v) a la garantía de no repetición<sup>256</sup>. Lo cual ha sido previsto por la Ley de Víctimas mediante:

- i) El Programa de Reparaciones a cargo de la Defensoría del Pueblo,
- ii) El pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
- iii) el Museo de la Memoria bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y
- iv) La judicialización de las graves violaciones de Derechos Humanos<sup>257</sup>.

Como se determinó en el capítulo segundo, la Ley de Víctimas establece la creación del Programa de Reparación por vía administrativa a cargo de la Defensoría del Pueblo, y el MJHC deberá establecer el procedimiento para los acuerdos reparatorios.

En primer lugar, la Defensoría del Pueblo, por medio de la Dirección de Reparación y Prosecución de Acciones Judiciales es la unidad que se encargará de gestionar el Programa de Reparación de las Víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, documentadas por la Comisión de la Verdad (1984-2008), la cual comenzaría a funcionar desde enero de 2015. Lo anunció Yolanda Galarza, responsable del programa de Reparación de Víctimas, durante el taller de socialización efectuado ayer en la Defensoría del Pueblo de Quito.

Galarza manifestó que se buscará la atención de las 456 víctimas o sus familiares que constan en el informe de la Comisión de la Verdad. La reparación inmaterial dependerá de la Defensoría del Pueblo, y la material, del Ministerio de Justicia. Ambas incluirán la rehabilitación física, la atención sicosocial, así como indemnizaciones económicas por los daños que se produjeron por las violaciones a los DD.HH. Andrés Aguirre, asesor legal de la Defensoría, dijo que se prevé contactar como mínimo al 50% de las víctimas hasta finales de año<sup>258</sup>.

---

<sup>256</sup> Ob. Cit Lucha contra la impunidad.

<sup>257</sup> Ob. Cit. 11.

<sup>258</sup> Diario “El Telégrafo”. Se socializa programa para atender a 456 víctimas de violaciones a DDHH. Internet. <http://telegrafo.com.ec/justicia/item/se-socializa-programa-para-atender-a-456-victimas-de-violaciones-a-ddhh.html>. Acceso: 19 de enero de 2015.



El borrador del Proyecto de reglamento para establecer el procedimiento de los acuerdos reparatorios a cargo del Ministerio de Justicia, establece que quienes serán víctimas directas y quienes personas beneficiarias, entendiendo a las primeras como toda persona natural que haya sufrido daños individualmente, físico o moral, material o psicológico, como consecuencia de la violación a sus Derechos Humanos, en los casos documentados por la Comisión de la Verdad, y se establece que persona beneficiaria es la víctima directa y en caso de su fallecimiento, su cónyuge o pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad<sup>259</sup>.

Cabe considerar que la Dirección de Derechos Humanos del MJDHC, será la encargada de receptor, examinar y registrar los expedientes que envíe la Defensoría del Pueblo, dentro de su programa de reparación. Se realizará una propuesta de indemnización en 30 días, pero cuando la víctima directa o personas beneficiarias inicien un proceso de negociación conforme a lo dispuesto en este Reglamento y hubiesen iniciado o mantengan un proceso en la vía nacional o internacional sobre materia indemnizatoria, deberán desistir formalmente de este último, según el procedimiento del respectivo órgano, a través de la Procuraduría General del Estado, previo a la suscripción del correspondiente acuerdo (Capítulo 1, Art. 8 y 10).

De esta manera, se puede colegir que el proyecto de reglamento del MJDHC, estaría estableciendo limitaciones al derecho de reparación, entendida como la indemnización de las víctimas, porque se establece que las personas beneficiarias podrán hacer uso de su derecho únicamente en caso de fallecimiento de las víctimas directas. Además, se estaría limitando el derecho a la justicia internacional de las

---

<sup>259</sup> MJDHC. *Borrador del Proyecto de Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento*. “Art. 6.- Definiciones.- Para efecto de las disposiciones contenidas en este reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

Víctima directa.- Toda persona natural que haya sufrido daños individualmente, físico o moral, material o psicológico, como consecuencia de la violación a sus Derechos Humanos, en los casos documentados por la Comisión de la Verdad, cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.[:] Persona(s) beneficiaria(s).- Es beneficiario/a la víctima directa y en caso de su fallecimiento, su cónyuge o pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad”.

víctimas que ya hayan iniciado o mantengan un proceso en la vía nacional o internacional<sup>260</sup>.

Sin embargo, hay que recordar que la materialización del derecho de reparación ha sido una ardua tarea en los procesos de Justicia Transicional, por lo que la doctrina ha sugerido que:

Dado que es poco probable que sea posible satisfacer todas las expectativas de las víctimas en una base individual, es aconsejable utilizar una combinación de medidas de reparación: individuales y colectivas, pecuniarias y no pecuniarias; medidas de reparación conmemorativa y reformas institucionales.

La reparación debe incluir un conjunto de medidas, desde recursos económicos a servicios como educación o salud, o una combinación de ambos, que considere todos los factores prácticos y económicos que condicionan el acceso de las víctimas y sus familias a los servicios básicos, así como tener en cuenta sus propias preferencias.

Las compensaciones o indemnizaciones no deberían considerarse como una forma de medir el sufrimiento, aunque se definan cantidades o servicios a proporcionar a víctimas que hayan sufrido diferentes violaciones.

Sin embargo, las formas de reparación deben tener un mínimo de duración, constituir una fuente de ayuda y contribuir a la inclusión social y económica de las poblaciones victimizadas<sup>261</sup>.

La doctrina propone que la participación sea parte importante en las medidas de satisfacción, es por esto, que los Estados deben abrir espacios en la relación con las víctimas desde una nueva perspectiva en la fase de cumplimiento, para proporcionar información sobre el proceso, afrontar las dificultades, pero también escuchar sus percepciones, demandas e ideas que pueden enriquecer y dar más sentido a esta reparación<sup>262</sup>.

Adicionalmente, es indispensable recordar que en derecho de reparación es importante mantener cierto vínculo entre la reparación material y el reconocimiento de la responsabilidad. En la práctica, se tiende a reducir la reparación a las compensaciones económicas, que son tanto más bajas cuando más amplio es el universo de víctimas [...]

---

<sup>260</sup> Ibídem.

<sup>261</sup> Cfr. Ob. Cit. 54. pág. 49.

<sup>262</sup> Ob. Cit.4, pág. 180-181.

los programas de reparación no deberían permitir que el Estado responsable renuncie a algunas de sus obligaciones bajo su propia discreción. La reparación tiene que estar ligada a la verdad y a la justicia; si la indemnización se usa solamente para comprar el silencio de las víctimas, su rehabilitación no será posible<sup>263</sup>.

En conclusión, en el Ecuador a partir de la creación de la Comisión de la Verdad, en el año 2007, se abrieron procesos de Justicia Transicional como son la creación de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, mismo que ha tenido dificultades en el respeto y garantía del derecho de las víctimas a la justicia y verdad. Así mismo, presentan varias dudas la aplicabilidad del Derecho de Reparación por parte de la promulgación de la Ley de Víctimas y su reglamentación por parte de la Defensoría del Pueblo y del MJDHC.

Razones por las cuales, las instituciones estatales, las víctimas y sus familiares, deben prestar especial atención para que el uso de la Justicia Transicional en el Ecuador no sea manipulado con el fin de ocultar la impunidad, ya que si bien es digno de destacar la importancia de la institucionalización y legalización de los derechos, éste no debe ser únicamente formal, sino que debe estar acompañado de una transformación radical del Estado y sus instituciones.

### **3.3 Control de convencionalidad de la Ley**

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 424 inciso segundo, determina que “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”<sup>264</sup>; en el mismo sentido el Art. 426 establece que “los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación”.

---

<sup>263</sup> Ob. Cit. 54. pág. 44-45.

<sup>264</sup> Ob. Cit. 55.

De esta manera, se puede establecer que en el Ecuador se ha producido la Constitucionalización del Derecho Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido, la “Cláusula de interpretación conforme” establece que los derechos deben interpretarse a la luz de los tratados favoreciendo a la persona. Esta cláusula permite la armonización entre el derecho nacional e internacional<sup>265</sup>.

El Ecuador es parte de la Convención ADH, misma que en sus Art.s 62.1 y 62.3 establece la competencia de interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención que le sean sometidas a su consideración, es decir, se encargará de revisar que los actos y hechos de los Estados que han reconocido su competencia, se ajusten a las disposiciones de la Convención; así como también de vigilar la efectiva supremacía de la Convención en los Estados parte<sup>266</sup>. En otras palabras, hace las veces de una Corte Constitucional a nivel Regional. El control de convencionalidad toma fuerza en el 2006 con el caso *Almonacid vs. Chile* y se ha desarrollado, por ejemplo, en los casos *Cabrera García Montiel vs. México*, *Gelman vs. Chile*, *Masacre de el Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador*.

En el caso *Almonacid Arellano Vs. Chile*<sup>267</sup>, la Corte IDH estableció que los jueces se encuentran en la obligación de ser garantes de la Convención, impidiendo que leyes contrarias al objeto y fin de la misma generen efectos contrarios a la protección de los derechos de la Convención, es decir deben ejercer un control difuso de convencionalidad. En el Caso *Cabrera García Montiel vs. México* se dio un avance al considerar que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad”.

La jurisprudencia más reciente sobre el control de convencionalidad aparece en el caso *Gelman vs. Uruguay* del año 2011, que de manera explícita señala que la

---

<sup>265</sup> Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ayuda memoria Control de Convencionalidad. Amparo Esparza, Andrea Bustos. 2012, pág. 1.

<sup>266</sup> Ob. Cit. 55.

<sup>267</sup> Corte IDH. Caso *Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, 125.

legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad, está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los Derechos Humanos, como la Convención ADH que constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías en la medida en que el “control de convencionalidad” es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial<sup>268</sup>. En este sentido, en el caso *Gelman vs. Uruguay*, la Corte establece que el ejercicio del control de convencionalidad no se limita a la función de los jueces, sino que se amplía a toda autoridad dentro de sus competencias<sup>269</sup>.

De esta manera, se puede colegir que el control de convencionalidad prevé que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las disposiciones de toda autoridad de Estado dentro de sus competencias deben velar que sus disposiciones no sean contrarias al objeto y fin de la Convención<sup>270</sup>. Ahora bien, en base a estos puntos se establecerá si lo prescrito en la Ley de Víctimas respondió al control de convencionalidad en relación: a) prohibición de demandar al Estado en vía judicial ni ante sistemas internacionales de Derechos Humanos; b) límite a los sujetos de la ley.

En relación al primer punto, la Ley de Víctimas en el Art. 8 inciso segundo prescribe:

Se prohíbe otorgar o recibir doble indemnización por el mismo hecho, o por error judicial. La víctima y, a falta de ella, su cónyuge, su pareja por unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, que obtuvieron o hubieren recibido indemnización a través de un acuerdo indemnizatorio suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no podrán demandar al Estado otra indemnización por el mismo hecho a través de la vía judicial, ni en el Sistema Interamericano o Universal de Protección a los Derechos Humanos<sup>271</sup>.

---

<sup>268</sup> Corte IDH. Caso *Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 238.

<sup>269</sup> *Ibidem*. Párr. 193.

<sup>270</sup> Información tomada de la conferencia dictada por el ex magistrado Eduardo Mac- Gregor, el 22 de marzo de 2012, en la Universidad Flasco, Quito – Ecuador.

<sup>271</sup> Ob. Cit. 56.

Sobre el segundo punto, la Ley de Víctimas establece en el Art. 1, que los beneficiarios de esta norma serán los identificados por la Comisión de la Verdad entre los años 1983 y 2008:

La presente ley tiene por objeto regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, que fueron documentadas por la Comisión de la Verdad; y, garantizar su judicialización<sup>272</sup>.

Sobre este punto existieron varias consideraciones de los Asambleístas y de las víctimas, mismas que consideraron que no debería existir un límite, ya que no se juzgaría a otras violaciones a Derechos Humanos, que la reparación debe ser global y que una ley debe ser general, mismos que los describiremos en los siguientes puntos:

a) La Asambleísta Lourdes Tibán manifestó su sorpresa al límite de años (1983-2008) que se ponen en la Ley, entendiendo que antes de este periodo y después de éste, han existido violaciones a Derechos Humanos sin juzgar como antes y después de las dictaduras; o después del 31 de diciembre de 2008, en la presidencia del Eco. Rafael Correa, cita varios como la muerte de Bosco Wisuma, Freddy Taish, casos de persecución política, entre otros<sup>273</sup>.

b) Por su parte, Betty Amores (ex PAIS) indicó que la reparación debe hacerse en todos los casos de lesa humanidad, pero que no se debería incorporar las violaciones de Derechos Humanos porque eso puede ser subjetivo. Además, manifestó que la ley no puede tener fechas<sup>274</sup>.

---

<sup>272</sup> Ibídem.

<sup>273</sup> Cfr. Diario “El Ecuatoriano”. *Ley de reparación de víctimas evita topar el periodo Correista*. Internet: <http://elecuadoriano.net/2013/11/15/ecuador-la-ley-de-reparacion-de-victimas-evita-topar-el-periodo-correista/>. Acceso: 22 de septiembre de 2014.

<sup>274</sup> Diario “La Hora”. *Críticas a la ley contra violaciones a Derechos Humanos*. Internet: [http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101308896/-/Cr%C3%ADticas\\_a\\_ley\\_contra\\_violaci%C3%B3n\\_a\\_derechos\\_humanos\\_.html#.VCCz3FcZGZQ](http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101308896/-/Cr%C3%ADticas_a_ley_contra_violaci%C3%B3n_a_derechos_humanos_.html#.VCCz3FcZGZQ). Acceso: 22 de septiembre de 2014.

c) Luis Almeida (PSP) considera que “la ley debe ser general y para todos, por lo que se debería eliminar el período”<sup>275</sup>.

d) El Asambleísta Miguel Ángel Moreta en entrevista concedida en Radio Centro de Quito, manifestó que la ley de víctimas es inconstitucional porque contraviene mandatos constitucionales (Art. 7 literales a, b, c, h, k, el Art. 76, los Arts 82, 135, 167 y 424 de la Constitución) y otorga al Informe de la Comisión de la Verdad un valor de fallo judicial siendo que la Constitución, prohíbe Tribunales de Excepción y Comisiones Especiales.

e) Del expediente del proyecto de Ley de Víctimas consta la propuesta de la Mesa Nacional de Víctimas y Familiares de las víctimas de “suprimir el periodo de 1983 a 2008”, establecida en el Art. 1.

f) Dentro del último seminario de la Fiscalía General del Estado sobre Verdad, Justicia y Reparación, se preguntó a los panelistas por parte del público “por qué se limita la Ley de Víctimas y las investigaciones de la Fiscalía únicamente a los periodos entre 1984 y 1988 dejando en la impunidad los crímenes de la dictadura de Velasco Ibarra y otros, por qué no se toma en cuenta a víctimas como Abdón Calderón que fue víctima de persecución y fue asesinado por el Estado”. Ante esto, Diego Peñafiel respondió que la Fiscalía está realizando investigaciones en los casos de estos años, sin embargo las puertas no están cerradas para hacer justicia en casos que no corresponden a estos periodos<sup>276</sup>.

En base a estos hechos, se estudiarán los criterios para la realización del Control de Convencionalidad.

### **Criterios para realizar el Control de Convencionalidad**

Tomando los criterios de Néstor Pedro Sagués<sup>277</sup>, quien desarrolla los siguientes argumentos de la Corte IDH para realizar el control de convencionalidad, razonamientos que serán sujetos a un análisis en el actual contexto nacional:

---

<sup>275</sup> Ibídem.

<sup>276</sup> Carlos Peñafiel. Asesor Jurídico de la Fiscalía General del Estado. *Seminario Internacional Verdad, Justicia y Reparación*. Organizado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Quito, 09 de diciembre de 2014.

<sup>277</sup> Néstor Pedro Sagués. *El “Control de Convencionalidad” en el sistema Interamericano, y sus anticipos en el ámbito de los Derechos económico-sociales*. Concordancias y diferencias con el Sistema Europeo.

*I) El principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, por parte de los Estados (quienes se han comprometido a cumplir el Pacto de San José y a obedecer las sentencias de la Corte)*

El principio de buena fe, ha sido desarrollado ampliamente en el Derecho Internacional, es así que en base al Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969<sup>278</sup>, los Estados no pueden, por razones de orden interno, incumplir obligaciones internacionales<sup>279</sup>.

El Ecuador es parte de la Convención ADH desde el 28 de diciembre de 1977, posteriormente el 24 de julio de 1984 reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH.

La Convención ADH establece en sus Art.s 62.1 y 62.3, la competencia de la Corte IDH de interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención que le sean sometidas a su consideración, es decir, se encargará de revisar que los actos y hechos de los Estados que han reconocido su competencia, se ajusten a las disposiciones de la Convención; así como también de vigilar la efectiva supremacía de la Convención en los Estados parte. Se puede decir que hace las veces de una Corte Constitucional a nivel Regional.

Sobre las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, el Art. 416 de la Constitución del Ecuador, establece que éstas responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano. En el mismo sentido, el Art. 417 prescribe que los tratados internacionales

---

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Max Planck Institut de Heidelberg, 2011. Pág. 484. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3063/16.pdf>.

<sup>278</sup> Art. 27 “El derecho interno y las observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 46”. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entrada en vigor en el 27 de enero de 1980. Ecuador ratificó la Convención el 11 de febrero de 2005 y entró en vigencia para el país el 11 de marzo de 2005.

<sup>279</sup> Cfr. Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 177.



ratificados por el Ecuador, se sujetarán a lo establecido en la Constitución y determina el principio pro hominen en la aplicación de tratados; sobre reparación, el Art. 78 del mismo cuerpo legal reconoce el derecho de las personas de acceder a un recurso efectivo y a obtener reparación<sup>280</sup>.

La Convención ADH reconoce el derecho de Acceso a la Justicia Internacional en el Art. 44, mencionando el derecho a que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte<sup>281</sup>.

En este sentido, es obligación de los Estados que han ratificado la Convención, respetar y garantizar los derechos ante sus ciudadanos en el ámbito nacional como internacional. La Corte IDH, dentro de la Opinión Consultiva 14<sup>282</sup>, ha manifestado que un Estado viola la Convención Americana cuando dicta disposiciones que no están conforme a ésta los Estados partes de una Convención tienen la obligación de hacer que sus funcionarios respeten los derechos y obligaciones contenidos en la misma<sup>283</sup>; como las obligaciones legislativas, entre la cuales se encuentra, por ejemplo la de respetar la reserva legal en lo que respecta a las restricciones o limitaciones legítimas a los derechos.

La Corte IDH, ha manifestado que las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos sus poderes y órganos, los cuales deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (*effet utile*) en el plano de su derecho interno<sup>284</sup>. Adicionalmente, el Ecuador al reconocer la aplicación pro hominen de los tratados, ha constitucionalizado el Derecho Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido, la “Cláusula de interpretación conforme” establece

---

<sup>280</sup> Ob. Cit. 54.

<sup>281</sup> Ob. Cit. 55.

<sup>282</sup> Corte IDH. *Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención*, Opinión Consultiva OC-14/49.

<sup>283</sup> Ob. Cit. 267.

<sup>284</sup> Ob. Cit. 279.

que los derechos deben interpretarse a la luz de los tratados favoreciendo a la persona. Esta cláusula permite la armonización entre el derecho nacional e internacional<sup>285</sup>.

Ahora bien, en el Ecuador a raíz de la publicación de la Ley de Víctimas en el año 2013, entre los puntos más relevantes del cuerpo legal se encuentra el Art. 8 inciso segundo que prescribe:

Se prohíbe otorgar o recibir doble indemnización por el mismo hecho, o por error judicial. La víctima y, a falta de ella, su cónyuge, su pareja por unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, que obtuvieren o hubieren recibido indemnización a través de un acuerdo indemnizatorio suscrito con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no podrán demandar al Estado otra indemnización por el mismo hecho a través de la vía judicial, ni en el Sistema Interamericano o Universal de Protección a los Derechos Humanos.

Es decir, que la Ley de víctimas que fue en cuerpo legal desarrollado por la Asamblea Nacional de Ecuador y ratificado por el Presidente de la República, debe apearse a las obligaciones de garantía y respeto al Derecho de Acceso a la Justicia Internacional planteado en el Art. 44 de la Convención ADH. El Ecuador, al reconocer la constitucionalización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está obligado a reconocer el derecho de reparación de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

Si una ley pretende restringir el derecho de las personas a presentar peticiones individuales sobre indemnizaciones, ésta debe cumplir con la obligación de los Estados Partes de no crear obstáculos o dificultades para el libre y pleno ejercicio del derecho del Acceso a la Justicia Internacional. La razón de esto es debido a la trascendencia del derecho de presentar peticiones individuales, ya que éste constituye, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la piedra angular del acceso de los individuos al mecanismo de protección de la Convención Americana<sup>286</sup>.

---

<sup>285</sup> Ob. Cit. 265.

<sup>286</sup> Corte I.D.H. *Caso Castillo Pietruzzi y otros*. Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de septiembre de 1998. Serie C No 41. Voto concurrente del Juez A. A. CANÇADO TRINDADE, párr. 3.

La Corte IDH ha estimado que una normativa que contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su aplicación o interpretación, no puede ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la justicia de los destinatarios de esa normativa, el cual, a la luz de los Art.s 8 y 25 de la Convención ADH, en relación con los Art.s 1.1 y 2 de la misma, no puede ser arbitrariamente restringido ni reducido o derogado<sup>287</sup>.

En conclusión, el Ecuador ha impuesto una restricción a un derecho fundamental como el Derecho del Acceso a la Justicia Internacional en el Art. 8 inciso segundo de la Ley de Víctimas.

*II) el principio del efecto útil de los convenios, cuya eficacia no puede ser mermada por normas o prácticas de los Estados; III) el principio internacionalista que impide alegar el derecho interno para eximirse de aquellos deberes, a tenor del Art. 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.*

En el Art. 8 numeral 1, la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado Art. 8.1 de la Convención<sup>288</sup>.

La Ley de Víctimas establece en el Art. 1, que los beneficiarios de esta norma serán los identificados por la Comisión de la Verdad entre los años 1983 y 2008:

La presente ley tiene por objeto regular la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el

---

<sup>287</sup> Cfr. Corte IDH. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 119.

<sup>288</sup> Corte IDH. *Caso Cantos Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 50.

Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, que fueron documentadas por la Comisión de la Verdad; y, garantizar su judicialización<sup>289</sup>.

El Art. 30 de la Convención ADH, ha establecido que las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas<sup>290</sup>.

En este sentido, la Opinión Consultiva No. 14 de la Corte IDH, ha determinado que “la interpretación de esta norma ha de hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los términos empleados por el tratado en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin (art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Los términos empleados limitan las restricciones posibles a los derechos y libertades reconocidos por la Convención a los casos en que ellas deriven de leyes que cumplan con las exigencias impuestas por el propio Art.”<sup>291</sup>.

De esta manera, el Ecuador por intermedio de su Ley de Víctimas, está imponiendo una restricción no sustentada para que las víctimas que no estuviesen documentadas por la Comisión de la Verdad y que no estuviesen comprendidas entre los años 1983 y 2008, no sean reconocidas como sujetos de la ley.

A propósito de lo expuesto, cabe recalcar que la Comisión de la Verdad del Ecuador, ha sido reconocida por las víctimas como un proceso histórico; sin embargo, se reconoce que hubo un sub registro de víctimas, pues muchas de ellas no pudieron acceder o no quisieron ser parte del Informe Final de la Comisión. Así lo señaló Susana Cajas, representante de la Mesa de Víctimas:

---

<sup>289</sup> Ob. Cit. 54.

<sup>290</sup> Ob. Cit. 55.

<sup>291</sup> Corte IDH. Opinión Consultiva OC-6/86 del 09 de mayo de 1986. *La expresión “leyes” en el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_06\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf)

Me parece que fue un hecho Histórico en el País [la conformación de la Comisión de la Verdad], el hecho de que haya un Presidente que reconozca que existe violación de los derechos humanos por parte del Estado, es algo que históricamente importante en el País. Es un paso importante que generó una investigación, un poco ya años después de que se cerró el informe donde estamos trabajando en la optimización de la verdad, vemos que sí hay bastante sub-registro, dentro de las víctimas, no sé si casos pero sí víctimas sí, no hay muchas de las víctimas que no dieron testimonios y que se ha establecido en la ley una delimitación de los, eso es algo que hace delimitar tiempo en una investigación y por ende quedan como cosas y víctimas sueltas<sup>292</sup>.

De esta manera, se concluye que la Ley de Víctimas no cumple con los estándares sobre el control de convencionalidad de una ley, ya que ésta, de darse el caso, podría declararse contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto perdería validez internacional.

#### **4.- Conclusiones**

El trabajo de investigación que ha sido desarrollado ha arrojado una serie de conclusiones, todas ellas respecto a si los procesos de Justicia Transicional en el Ecuador fueron apropiados y si están siendo aplicados adecuadamente para el respeto y garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, a las que a continuación se hace referencia.

1. No existe un concepto único e inacabado sobre Justicia Transicional, la doctrina, los organismos internacionales la han caracterizado y han establecido líneas generales como los Principios de Chicago y Joinet, sin embargo cada Estado puede aplicar sus propios procesos transicionales.
2. La genealogía de la Justicia, para unos autores como Ruti Teitel, tiene tres fases; desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad donde se ha expandido los conceptos de la misma, sin embargo otros autores consideran que su origen está en la antigua Grecia.

---

<sup>292</sup> Entrevista Susana Cajas, realizada por Andrea Flores. Octubre 2014.

3. Existen diversas definiciones y conceptualizaciones sobre la definición de víctima de violaciones a Derechos Humanos, por un lado las víctimas del delito y víctimas de abuso del poder o víctima directa e indirecta.
4. En el presente estudio se dejó en claro que los ejes fundamentales de los procesos de Justicia Transicional son la triada: justicia, verdad y reparación; y que, la ausencia de uno de estos elementos impide consolidar una iniciativa transicional.
5. En relación al derecho a la verdad, se analizó que éste es reconocido como un ingrediente fundamental para la reconciliación en sociedades. Una de sus manifestaciones son las Comisiones de la Verdad, han existido 40 en el mundo hasta el año 2010. Sin embargo, el derecho a la verdad no se agota con la creación de éstas, sino que se debe garantizar y reconocer el derecho a conocer la verdad histórica de los hechos de las víctimas y de la sociedad.
6. En el mismo sentido, se evidenció que el derecho a la justicia es reconocido en varios instrumentos internacionales como, por ejemplo, la Convención ADH, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder y por la Constitución del Ecuador.
7. De igual forma, como parte del presente estudio se concluyó que, el Ecuador vivió un periodo violento de violaciones masivas a los Derechos Humanos (1984 y 1988), sin la exclusión de la existencia de otros crímenes en otros periodos. Por lo que, ha existido impunidad por parte del Ecuador en varios casos para sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y establecer la verdad de los hechos. Por tal motivo, era necesario crear un proceso de Justicia Transicional en el Ecuador.
8. El primer intento de búsqueda formal de los derechos a las víctimas a la verdad, justicia y reparación en Ecuador por medio de un mecanismo de Justicia Transicional, fue con la Comisión de la Verdad y Justicia, creada en 1996 por el presidente Abg. Abdalá Bucaram, pero no prosperó. Así, en el año 2007 se crea la Comisión de la Verdad del Ecuador, como resultado de un proceso histórico impulsado por diversas organizaciones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y familiares de éstas durante más de veinte años.
9. Enfocando exclusivamente los procesos de Justicia Transicional, que surgen a raíz de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad ( la garantía del derecho a la justicia por medio de las investigaciones y judicialización de casos

por medio la Fiscalía General del Estado; y, la Ley de Víctimas), se deduce que éstos se encuentran en marcha; sin embargo, no han conseguido resultados próximos. De este modo, la instauración de la Comisión de la Verdad en Ecuador fue apropiada, pero no era el único mecanismo para garantizar el Derecho a la Verdad.

10. Centrándose en el primer proceso, se concluyó que la Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Ecuador en cuatro años, desde la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad, únicamente ha judicializado 7 casos, lo que implica el irrespeto el derecho a la justicia y verdad de las víctimas. Asimismo, se determina que estos derechos deben enfrentarse al hecho de que los presuntos responsables de varios casos estarían muertos. Es así que en relación a este proceso, el Ecuador incumple con su obligación de respeto y garantía del derecho a la justicia de las víctimas.
11. En relación al segundo proceso, la Ley de Víctimas fue publicada el 13 de diciembre de 2013 en el Registro Oficial. A fin de aplicar los programas de reparación, se ha creado un Reglamento para la indemnización, por parte del MJDHC y unas Directrices para el programa de reparación por vía administrativa de la Defensoría del Pueblo. Así, el Ecuador se encuentra en proceso de construcción de vías de reparación material e inmaterial, ante lo cual, surgen varias inquietudes de las víctimas sobre su efectividad y adecuada aplicación.
12. Según los criterios de Rodrigo Uprimny y María Paula Saffón, se puede identificar al menos dos usos del discurso de la Justicia Transicional, que dependen de los diferentes intereses que puede servir, a saber: el uso manipulador y el uso democrático de la Justicia Transicional.
13. Por otro lado, centrándose en el objetivo de la presente investigación, como parte del estudio desarrollado, se planteó demostrar que en el Ecuador, las instituciones estatales, las víctimas y sus familiares, deben prestar especial atención para que el uso de la Justicia Transicional no sea manipulado con el fin de ocultar la impunidad, ya que si bien es digno de destacar la importancia de la institucionalización y legalización de los derechos, éste no debe ser únicamente formal, sino que debe estar acompañado de una transformación radical del Estado y sus instituciones.

14. Asimismo, y como parte del estudio antes referido, se evidenció que la Ley de Víctimas de Ecuador no cumple con los parámetros establecidos por el Control de Convencionalidad, por lo que, el Ecuador está incumpliendo con su deber de garantía.



## 5. BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS

1. BERNAL Jaime Bernal. *El proceso penal. Fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio*. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2004.
2. BERISTAÍN Carlos. *Diálogos sobre la reparación, qué repara en los casos de violaciones de derechos humanos*. Quito, Imprenta: MRG Diseño y producción Gráfica, 2009.
3. BERISTAÍN Carlos, TAPPATÁ Patricia, LIRA Elizabeth, SÁNCHEZ Nelson, UPRIMNY, CUÉLLAR Benjamín, LEONARDO Mónica, VALENCIA Alejandro. AMÉS Rolando y REÁTEGUE. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*. Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH. Costa Rica, 2011. Disponible en: [http://iidh-websserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/12\\_2011/1eda085a-9276-4000-ad56-0d43b2222eb8.pdf](http://iidh-websserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/12_2011/1eda085a-9276-4000-ad56-0d43b2222eb8.pdf).
4. BAHAMONDE GALARZA Cristhian. *Breve descripción y contenido del informe final de la Comisión de la Verdad de Ecuador. En: Develando el desencanto: informe sobre derechos humanos*. Ecuador 2010. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH; Abya Yala.
5. BRITO Diana. *Justicia Restaurativa, Reflexiones sobre la experiencia de Colombia*. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, 2010, Ecuador.
6. BURT Jo-Marie. *Desafiando a la Impunidad en Tribunales Nacionales: Juicios por Derechos Humanos en América Latina*, pág. 309. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29763.pdf>.
7. CEVALLOS Sánchez. *Las medidas de protección de víctimas y testigos, que rige el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal*. Quito: Universidad de las Américas, 2013. Quien cita a: Mendelsohn. *La victimología y las tendencias de la sociedad contemporánea*. Editorial Mesis. México, 1958.

8. COMISIÓN DE LA VERDAD. *Sin Verdad no hay Justicia-Informe de la Comisión de la Verdad*. Ediecuatorial, Quito, 2010.
9. COMISIÓN DE DEFENSA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. *Terrorismo y Subversión. La verdad que no se ha dicho*. Quito, segunda edición, 2010. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/143159555/Terrorismo-y-Subversion-en-Ecuador>.
10. ELSTER Jhon. *Closing the Books, Transitional Justice in Historical Perspective*. Cambridge University Press, 2004.
11. FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL. *Las Víctimas y la Justicia Transicional ¿Están cumpliendo los estados Latinoamericanos con los Estándares Internacionales?* Washington, Editorial DPLF, 2012.
12. GÓMEZ Cristina. *Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación dentro de los parámetros de la justicia transicional*. Bogotá, Universidad Javeriana, 2009. Disponible en: <http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis104.pdf>.
13. GUTIÉRREZ Soraya. *La Reparación Integral un derecho de las víctimas*. Bogotá, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos.
14. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. *Reparación Desafíos para la democracia y la convivencia social*. Art. “Reconciliación luego de Conflictos Violentos: un marco teórico” de Carlos Martín Beristán. Unidad de Información y de Servicio Editorial del IIDH, San José de Costa Rica, 2005,
15. NIKKEN Pedro. *El Concepto de Derechos Humanos*. Internet: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1835/3.pdf>.
16. LUTZ Ellen y SKKINK Kathryn. “*The Justice Cascade: The Evolution and Impact of Foreign Human Rights Trials in Latin America*”. Chicago Journal of International LaW, 2001.
17. LEVINE Daniel, MOLINA José Enrique. *La calidad de la democracia en América Latina: una visión comparada América Latina*. Internet. [www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804502](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804502) .
18. MONTADA, L. *Justice and its Many Faces: Cultural Concerns*. En Internacional Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Volume 12. Great Britain. Elsevier Science Ltda. 2001.
19. OROZCO Iván. *Justicia Transicional en el tiempo del deber de memoria*. Bogotá, Temis.

20. PEREZ A. *Delimitación conceptual de los Derechos Humanos en la obra colectiva. Los Derechos Humanos*. Significación, estatuto jurídico y sistema. Ediciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla.
21. REÁTEGUI Félix. *Justicia Transicional Manual para América Latina*. Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil. Brasil, 2011.
22. ROTBERG Robert y THOMPSON Dennis. *Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions*. Princeton University Press, 2000.
23. RISSE T., ROPPE S.C., y SIKKINK K. *The Power of Human Rights: international norms and domestic change*. Cambridge University Press, 1999.
24. ROHT-ARRIAZA. *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*. University of Pennsylvania Press, 2005.
25. SCHIFF Benjamin. *Building the International Criminal Court*. Cambridge University Press, 2008.
26. SAGUÉS Néstor Pedro. *El "Control de Convencionalidad" en el sistema Interamericano, y sus anticipos en el ámbito de los Derechos económico-sociales*. Concordancias y diferencias con el Sistema Europeo. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Max Planck Institut de Heidelberg, 2011. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3063/16.pdf>.
27. SALVIOLI Fabián. *El derecho internacional de la persona humana frente a la impunidad de hecho o de derecho: criterios a considerar en procesos de justicia transicional*. Fundación social. Bogotá 2004.
28. SHELTON, Dinah. *Remedies In International Human Rights Law*. Oxford University Press. USA, 2010.
29. TORREBLANCA Luis. *El Derecho a la Verdad en el ámbito Iberoamericano*. Ius Humani, v. 3, 2012-2013.
30. TEITEL Rutí. *Transitional Justice Genealogy*. Harvard Human Rights Journal 16, 2003.
31. RINCÓN Tatiana. *Verdad, justicia y reparación: la justicia de la justicia transicional*. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2010.
32. UPRIMNY Rodrigo. *Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia*. Santiago de Chile, Anuario CDH de la Universidad de Chile, pág. 165.
33. UPRIMNY Rodrigo, SAFFON María Paula. *Estándares Internacionales y Procesos de Paz en Colombia. Entre el perdón y el paredón, preguntas y dilemas de justicia transicional*. Bogotá, Corcas Editores, 2005.

## REVISTAS

1. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. *Justicia y Paz, ¿Verdad Judicial o Verdad Histórica?* Editorial D'vinni S.A., 2012. Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/documentos/informes/informes2012/verdad-judicial-verdad-historica.pdf>
2. INTERNATIONAL CRISIS GROUP. *Justicia transicional y los diálogos de paz en Colombia*. Informe sobre América Latina N°49, 29 de agosto de 2013.
3. HARVARD HUMAN RIGHTS JOURNAL. *Transitional Justice Genealogy*. Vol. 16, Spring 2003, Cambridge, MA, pp. 69-94. Disponible en: <http://estadodederechocdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/18/59.pdf>.
4. MJDHC, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. *Revista Justicia & Derechos*. 2011. Internet. [www.justicia.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D445%26force%3D1&ei=eFGU7faBaqT0QHB1oCABw&usg=AFQjCNHZXuLfyCa-KfF6ZMnFtM0Qkq5hma&bvm=bv.64507335,d.dmQ](http://www.justicia.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D445%26force%3D1&ei=eFGU7faBaqT0QHB1oCABw&usg=AFQjCNHZXuLfyCa-KfF6ZMnFtM0Qkq5hma&bvm=bv.64507335,d.dmQ). Acceso: 29 de octubre de 2014.
5. REFLEXIÓN. Justicia Transicional en América Latina. “Chile, una vergüenza”, *Dialogando con Víctor Rodríguez Rescia*. Reflexión N 42, 2012. Disponible en: <http://www.cintras.org/textos/reflexion/r42/entrevista.pdf>.
6. ROUSSET Andrés Javier. *El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Revista Internacional de Derechos Humanos /ISSN 2250-5210/2011 año I –N°1.
7. VERGARA Bolívar. “El Ecuador y la implementación del Estatuto de Roma en el Derecho Interno”. *Revista Jurídica Online Universidad Católica de Guayaquil*. Disponible en: [www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=121&Itemid=65](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=65).
8. VISTAZO. *Fiscalía creará unidad especial para investigar delitos de Estado*. Internet. [www.vistazo.com/webpages/pais/?id=10387](http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=10387). Acceso: 16 de septiembre de 2014.

## **DOCUMENTOS LEGALES**

### **Leyes nacionales**

1. Constitución de la República del Ecuador.
2. Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008.
3. Decreto Ejecutivo 305.
4. Resolución 049-2010 Fiscalía General del Estado.

### **Instrumentos Internacionales**

1. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
3. Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados.
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
6. Convención sobre los Derechos del Niño.
7. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
8. Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 (Convención IV).
9. Declaración Universal de DD.HH.
10. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos.
11. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder.
12. Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977
13. Principios para la Protección de Todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
14. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.

15. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal.

### **COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

1. El Derecho a la Verdad en América. OEA/Ser.L/V/IL.152. Doc 2, 13 de agosto de 2014. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>.
2. *El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales*. Estudio de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington, 2007. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accessodescv.sp.htm>.
3. *El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales*. Estudio de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington, 2007. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accessodescv.sp.htm>.
4. CIDH. Verdad, justicia y reparación: Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 2013.

### **SENTENCIAS CORTE IDH**

1. *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009.
2. *Caso Apitz Barbera (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C. No. 182.
3. *Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.
4. *Caso Bayarri Vs. Argentina*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 107.
5. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100.
6. *Caso Cantos Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97

7. *Caso Castillo Pietruzzi y otros*. Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de septiembre de 1998. Serie C No 41. Voto concurrente del Juez A. A. CANÇADO TRINDADE.
8. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212.
9. *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname*. Sentencia de 15 de junio de 2005, (Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas).
10. *Caso Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221.
11. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219.
12. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120.
13. *Caso J. Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 304. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69.
14. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 195.
15. *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C. No. 250.
16. *Caso Mohamed Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2012. Serie C No. 255.
17. *Caso de Las Masacre del Mozote vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C No.134 y voto concurrente del juez diego García- Sayán.
18. *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú*. 1995.
19. *Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119.
20. *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.

21. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158.
22. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001.
23. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7.

### **OPINIONES CONSULTIVAS, CORTE IDH**

1. Opinión Consultiva OC-14/49. *Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención*.
2. Opinión Consultiva OC-6/86 del 09 de mayo de 1986. *La expresión “leyes” en el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*

### **CORTE INTERNACIONALES**

- CPI. *Caso Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06.
- CDH. *The Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and 6 others) v. Nigeria*. Comunicación 87/93.
- EDH. *Neumeister vs. Austria*. (App. No.1936/63). 7 de mayo de 1974.
- ICJ. *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*. Reparaciones por lesiones sufridas al servicio de la Organización de las Naciones Unidas.
- PCIJ. *Factory at Chorzów*. Competencia. Sentencia No. 8, 26 de julio de 1927, Series A, No. 9.
- TEDH. *Aksoy v. Turkey*, solicitud n.o 21987/93; y sentencia del 28 de marzo de 2000
- TEDH. *Cyprus v. Turkey*, solicitud n.o 25781/94.
- TEDH. *De Wilde, Ooms y Versijp v. Bélgica*. *Guzzardi v. Italia*. *De Becker v. Bélgica*.
- TEDH. *Kaya v. Turkey*, solicitud n.o 22535/93.

### **ONU**



1. Asamblea General de Naciones Unidas. *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder.* Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
2. Asamblea General de Naciones Unidas. *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder.* Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Disponible en: [www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx](http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx).
3. Asamblea General, Resolución A/RES/60/147. *Principios de Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.* Aprobada y proclamada en la 64 sesión plenaria de la Asamblea General de 16 de diciembre de 2005.
4. Consejo de Seguridad, Informe S/2004/616, III. *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, agosto 2004.
5. Comisión de Derechos Humanos, 49vo periodo de sesiones. *Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión.* Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev. 1; Orentlicher, D, 2004.
6. Comisión de Derechos Humanos. *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher*, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. (8 de febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.
7. Consejo Económico y Social. *Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: La independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad.* Las directrices de Bassiouni 1999. E/CN.4/1999/65 8 de febrero de 1993.
8. Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art. 33. Ver

9. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. *Los Derechos Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo*. Folleto Informativo No 32. Pág. 10. Disponible en: <http://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32sp.pdf>.
10. DE GREIFF Pablo. *Reparations Efforts in International Perspectives: What Compensation Contributes to the Achievement of Imperfect Justice*. Oxford New York.
11. La Subcomisión sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos revisó el primer documento (E/CN.4/Sub.2/1997/20 de 16 de junio de 1997).

### PÁGINAS WEB

1. ALAINET. *Víctimas dicen que sin verdad no hay justicia: Comisión de la Verdad entregó informe*. Disponible en: <http://alainet.org/active/38775>.
2. AMNISTÍA INTERNACIONAL. *Comisionar la Justicia. Las Comisiones de la Verdad y la Justicia Penal*. Editorial Amnistía International España (EDAI). Madrid, 2010, pág. 10. Disponible en: <http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL30/004/2010/en/46206892-791e-45c5-a31f-f069b369c0b/pol300042010spa.pdf>.
3. APUNTES JURÍDICOS. *Que son los delitos de Lesa Humanidad*. Internet. <http://apuntesjuridicos.com.ec/?IDNOTICIA=5161&tlo=%EF%BF%BDQu%EF%BF%BD%20son%20delitos%20de%20lesa%20humanidad?> Acceso: 15 de octubre de 2014.
4. AMNISTÍA INTERNACIONAL. *Truth Comissions*. Fecha de búsqueda 30 de agosto de 2014. Disponible en: <http://www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions>.
5. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL. *Cuestiones de Justicia Transicional, regiones y países. Verdad y Memoria*. Internet. <http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/verdad-y-memoria>. Acceso: 28 de octubre de 2014.
6. CURBELO NELSA. *Discurso de Nelsa Curbelo en Seminario Internacional "Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos"*. Santiago de Chile, 14

- de diciembre de 1996. Disponible en:  
<http://www.derechos.org/koaga/xi/2/curbelo.html>.
7. ECOREPUBLICANO. *Comisión de la Verdad*. Fecha de la búsqueda: 19 de agosto de 2014. Disponible en:  
<http://www.ecorepublicano.es/2014/08/comision-de-la-verdad.html>.
  8. Fiscalía General del Estado. *Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos*. Internet. <http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/servicios/fiscalias-especializadas/comision-de-la-verdad.html>. Acceso: 16 de septiembre de 2014.
  9. Fiscalía General del Estado de Ecuador. *El caso “Las Dolores” devela su verdad tras 11 años de impunidad*. Internet:  
[www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2715](http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/2715). Acceso: 05 de noviembre de 2014.
  10. HUMAN RIGHTS. *Derechos Humanos en el mundo*. Internet.  
[www.derechos.org/ddhh/mundo](http://www.derechos.org/ddhh/mundo). Acceso: 17 de agosto de 2014.
  11. MJDHC. *Borrador del Proyecto de Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento*.
  12. TRIAL (Track Impunity Always). *Comisión de la Verdad-Ecuador*. Internet.  
[www.trial-ch.org/es/recursos/comisiones-de-la-verdad/america/equateur.html](http://www.trial-ch.org/es/recursos/comisiones-de-la-verdad/america/equateur.html). Acceso: 25 de agosto de 2014.

## DIARIOS Y PERIÓDICOS

### Diario “El Telégrafo”

1. *Caso “Vaca, Cajas, Jarrín: 3 procesados continúan con arresto domiciliario*. Internet: <http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/caso-vaca-cajas-jarrin-3-continuan-con-arresto-domiciliario.html>. Acceso: 18 de enero de 2015.
2. *Comisión de la Verdad señala a mentalizadores*. Internet.  
[www.telegrafo.com.ec/justicia/item/comision-de-la-verdad-senala-a-mentalizadores.html](http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/comision-de-la-verdad-senala-a-mentalizadores.html). Acceso: 17 de septiembre de 2014.
3. *Edgar Vaca podría esclarecer varios casos de lesa humanidad*. Internet:  
<http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/edgar-vaca-podria-esclarecer-varios-casos-de-lesa-humanidad.html>. Acceso: 15 de septiembre de 2014.

4. *Jueza dicta prisión para 3 ex oficiales por actos de tortura.* Internet. [www.telegrafo.com.ec/politica/item/jueza-dicta-prision-para-3-ex-oficiales-por-actos-de-tortura.html](http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/jueza-dicta-prision-para-3-ex-oficiales-por-actos-de-tortura.html). Acceso: 14 de octubre de 2014.
5. *Se socializa programa para atender a 456 víctimas de violaciones a DDHH.* Internet. <http://telegrafo.com.ec/justicia/item/se-socializa-programa-para-atender-a-456-victimas-de-violaciones-a-ddhh.html>. Acceso: 19 de enero de 2015.

#### **Diario “El Comercio”**

1. *El ex grupo subversivo Alfaro Vive Carajo será movimiento político.* Internet. <http://www.elcomercio.com/actualidad/avc-alfaro-vive-carajo-subersivo.html>. Acceso: 19 de enero de 2015.
2. *Jaime Nebot niega supuestos abusos de DD.HH.* Internet. [www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/jaime-nebot-niega-supuestos-abusos.html](http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/jaime-nebot-niega-supuestos-abusos.html). Acceso: 17 de octubre de 2014.
3. *Reglamento a la ley de víctimas.* Internet: <http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/seguridad/reglamento-a-ley-de-victimas-2.html>. Acceso: 22 de septiembre de 2014.

#### **Diario “Ecuador Inmediato”**

1. *Comité Contra la Impunidad iniciará acciones penales contra Febres Cordero.* Internet: [www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=25716&umt=comite\\_contra\\_impunidad\\_iniciara\\_acciones\\_penales\\_contr\\_a\\_febres\\_cordero](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=25716&umt=comite_contra_impunidad_iniciara_acciones_penales_contr_a_febres_cordero). Acceso: 17 de septiembre de 2014.
2. *Policías dan su versión sobre terrorismo y subversión en un libro.* Internet. [http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=118088&umt=policias\\_dan\\_version\\_sobre\\_terrorismo\\_y\\_subversion\\_en\\_un\\_libro](http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=118088&umt=policias_dan_version_sobre_terrorismo_y_subversion_en_un_libro). Acceso: 15 de octubre de 2014.
3. *Tribunal negó recurso de aclaración y ampliación en caso “Vaca, Cajas, Jarrín”.* Internet: [http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=2818772986&umt=tribunal\\_negf3\\_recurso\\_de\\_aclaracif3n\\_y\\_amplicif3n\\_en\\_caso\\_22vaca2c\\_cajas2c\\_jarredn22](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818772986&umt=tribunal_negf3_recurso_de_aclaracif3n_y_amplicif3n_en_caso_22vaca2c_cajas2c_jarredn22). Acceso: 18 de enero de 2015.

## Diario El Universo

1. *Asamblea del Ecuador aprueba ley de víctimas para reparar las violaciones de derechos humanos.* Internet. <http://ecuadoraldia.ec/index.php/9-noticias/3255-asamblea-del-ecuador-aprueba-ley-de-victimas-para-reparar-las-violaciones-de-derechos-humanos>. Acceso: 22 de septiembre de 2014.
2. *Algunos casos de la Comisión de la Verdad no irán a juicio.* Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1557936/algunos-casos-cv-no-iran-juicio](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/08/nota/1557936/algunos-casos-cv-no-iran-juicio). Acceso: 16 de septiembre de 2014.
3. *Blasco Peñaherrera P.: “Es una denuncia de orden político”.* Internet. [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/blasco-penaherrera-pes-denuncia-orden-politico.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/blasco-penaherrera-pes-denuncia-orden-politico.html). Acceso: 15 de septiembre de 2014.
4. *Comisión de la Verdad se creará el próximo mes.* Internet. <http://www.eluniverso.com/2004/12/27/0001/8/D86F1C494C104749B03B0330BA0779DF.html>. Acceso: 25 de agosto de 2014.
5. *Fiscalía denunciará violaciones a DD.HH.* Internet. <http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/27/nota/1501271/fiscalia-denunciara-violaciones-ddhh>. Acceso: 16 de septiembre de 2014.
6. *Fiscalía investigará casos de Comisión de la Verdad.* Internet. [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/alistan-juicios-civiles-penales-violaciones-dd-hh.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/alistan-juicios-civiles-penales-violaciones-dd-hh.html).
7. *Ley de reparación avala el trabajo de la Comisión de la Verdad.* Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/10/02/nota/1529441/ley-reparacion-victimas-avala-trabajo-comision-verdad](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/02/nota/1529441/ley-reparacion-victimas-avala-trabajo-comision-verdad). Acceso: 05 de noviembre de 2014.
8. *Nueve casos implican al Gobierno de Correa.* Internet: <http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/nueve-casos-implican-gobierno-correa.html>. Acceso: 15 de septiembre de 2014.
9. *Otros casos de la Comisión de la Verdad en indagación.* Internet. <http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/03/nota/1531056/otros-casos-comision-verdad-indagacion>. Acceso: 16 de septiembre de 2014. *Proyecto que plantea indemnizar a víctimas fue entregado a la Asamblea.* Internet. [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/proyecto-plantea-indemnizar-victimas-fue-entregado-asamblea.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/proyecto-plantea-indemnizar-victimas-fue-entregado-asamblea.html). Acceso: 15 de septiembre de 2014.

10. *Proyecto que plantea indemnizar a víctimas fue entregado a la Asamblea.* Internet. [www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/proyecto-plantea-indemnizar-victimas-fue-entregado-asamblea.html](http://www.eluniverso.com/2010/06/09/1/1355/proyecto-plantea-indemnizar-victimas-fue-entregado-asamblea.html). \_Acceso: 15 de septiembre de 2014.
11. *Reglamento repara daños ciertas víctimas.* Internet. [www.eluniverso.com/noticias/2013/12/08/nota/1885151/reglamento-reparar-danos-ciertas-victimas](http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/08/nota/1885151/reglamento-reparar-danos-ciertas-victimas). Acceso: 13 de octubre de 2014.

### **Otros Diarios**

1. DIARIO “CONFIRMADO”. *Fiscalía develó Mural “Grito de la Memoria” en homenaje a víctimas de violaciones de DDHH.* Internet. <http://www.confirmado.net/fiscalia-develo-mural-grito-de-la-memoria-en-homenaje-victimas-de-violaciones-de-ddhh/>. Acceso: 19 de enero de 2015.
2. DIARIO “EL CIUDADANO”. *“No se busca la venganza sino la reparación integral” fiscal.* Internet. <http://www.elciudadano.gob.ec/no-se-busca-la-venganza-sino-la-reparacion-integral-de-las-victimas-fiscal/>. Acceso: 22 de septiembre de 2014.
3. DIARIO “EL CIUDADANO”. *Se dictó sentencia en caso las Dolores.* Internet: <http://www.elciudadano.gob.ec/tribunal-penal-de-la-cnj-dicto-sentencia-en-caso-las-dolores/>. Acceso: 18 de enero de 2015.
4. DIARIO “ECUADOR EN VIVO”. *Comisión de la Verdad dice que proceso judicial por lesa humanidad ratifica compromiso del país en derechos humanos.* Internet: [www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/12710-comision-de-la-verdad-dice-que-proceso-judicial-por-lesa-humanidad-ratifica-compromiso-del-pais-en-derechos-humanos.html](http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/12710-comision-de-la-verdad-dice-que-proceso-judicial-por-lesa-humanidad-ratifica-compromiso-del-pais-en-derechos-humanos.html). Acceso: 13 de octubre de 2014.
5. DIARIO “EXPLORED”. *Victimas de lesa humanidad: cuatro casos se han judicializado de 136.* Internet. <http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/victimas-de-lesa-humanidad-cuatro-casos-se-han-judicializado-de-136-610139.html>. Acceso. 18 de enero de 2015.
6. DIARIO “EL MERCURIO”. *No pasó la objeción a la Ley de Víctimas.* Internet: [www.elmercurio.com.ec/407464-no-paso-la-objecion-a-la-ley-de-victimas/#.VCILRFcZGZR](http://www.elmercurio.com.ec/407464-no-paso-la-objecion-a-la-ley-de-victimas/#.VCILRFcZGZR). Acceso: 23 de septiembre de 2014.
7. DIARIO “EL PAÍS”. *El Grupo Montoneros Patria Libre asegura que tiene en su poder a Berrocal”.* Internet.

- [http://elpais.com/diario/1989/08/31/espana/620517603\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1989/08/31/espana/620517603_850215.html). Acceso: 14 de octubre de 2014.
8. DIARIO “HOY”. *Apoyan a la Comisión Justicia y Verdad*. Internet. <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/apoyan-a-comision-justicia-y-verdad-70151.html>. Acceso: 25 de agosto de 2014.
  9. DIARIO “NACIÓN”. *Trabajar por la justicia. Hay memorias que recobrar y verdades que enfrentar*. Internet. [www.nacion.com/ln\\_ee/ESPECIALES/tiempo2000/edicion4/umbra11.html](http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/tiempo2000/edicion4/umbra11.html) . Acceso: 29 de diciembre de 2014.
  10. DIARIO “PLAN V”. *Caso Dolores el retorno del terror*. Fecha de búsqueda: 13 de sep. de 14. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/caso-dolores-el-retorno-del-horror>.
  11. NOTICIAS “CARACOL”. *Experiencia de otras Comisiones de la Verdad en el mundo*. Internet. [www.caracol.com.co/noticias/actualidad/experiencias-de-otras-comisiones-de-la-verdad-en-el-mundo/20140331/nota/2155288.aspx](http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/experiencias-de-otras-comisiones-de-la-verdad-en-el-mundo/20140331/nota/2155288.aspx). Acceso: 29 de octubre de 2014.

### ENTREVISTAS

1. Flacso. Casa Abierta Memoria, Justicia y Género: La Comisión de la Verdad. Quito, 10 de Julio de 2014. Sala de Conferencias N. 2. Panelistas invitados: Julio César Trujillo, Natalia Sierra, Ramiro Ávila, Clara Merino.
2. PEÑAFIEL Carlos. Asesor Jurídico de la Fiscalía General del Estado. *Seminario Internacional Verdad, Justicia y Reparación*. Organizado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Quito, 09 de diciembre de 2014.
3. Entrevista Susana Cajas, realizada por Andrea Flores octubre 2014.

## **6.-ANEXOS**



**Resumen de “Reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas de cumplimiento”.**

<b>DISPOSICIONES PRELIMINARES</b>	
<b>Art. 1 Objeto del Reglamento</b>	Establece el procedimiento administrativo para acordar el monto de la indemnización en los casos en que haya lugar, y las medidas para su cumplimiento a las víctimas.
<b>Art. 2 Ámbito de aplicación</b>	<p>A todas las todas las víctimas de los casos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• violaciones de Derechos Humanos y;</li> <li>• Delitos de Lesa Humanidad</li> </ul> <p><i>Documentados</i> por la <b>Comisión de la Verdad</b> (entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008).</p>
<b>Art. 3.Excepciones</b>	<p>No son beneficiarios del acuerdo indemnizatorio</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quienes hayan recibido indemnización en forma efectiva por parte del Estado, por el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos por los mismos hechos documentados por la Comisión de la Verdad; y,</li> <li>2. Quienes hayan recibido indemnización, por daños y perjuicios a través de sentencia ejecutoriada emitida por los órganos jurisdiccionales nacionales.</li> </ol>
<b>Art. 4 Principios de los acuerdos indemnizatorios</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principio de buena</li> <li>2. Principio de proporcionalidad</li> <li>3. Principio de celeridad</li> <li>4. Principio de no revictimización.</li> <li>5. Principio de equidad</li> <li>6. Principio de no discriminación.</li> <li>7. Principio de gratuidad y accesibilidad al procedimiento.-</li> <li>8. Principio de acceso a la información.</li> </ol>
<b>Art. 5 De la Confidencialidad</b>	Las y los servidores públicos deberán mantener absoluta reserva de la información.
<b>Art. 6 Definiciones</b>	<b>Víctima directa.</b> Toda persona natural que haya sufrido daños individualmente, físico o moral,

	<p>material o psicológico, documentados por la Comisión de la Verdad, cometidos entre 1983-2008.</p> <p><b>Persona/s beneficiaria/s</b> es la víctima directa y a falta de ella, su cónyuge o pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.</p>
<p><b>Art. 7</b> <b>Procurador común</b></p>	<p>Si hay más de una persona beneficiaria, pueden designar por acuerdo escrito un representante dentro del proceso de negociación.</p>
<p><b>TÍTULO ÚNICO</b> <b>CAPÍTULO I</b> <b>DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN</b></p>	
<p><b>Art. 8</b> <b>Programa de Reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo</b></p>	<p>Las víctimas directas o beneficiarios tienen derecho a acceder a las medidas de reparación por vía administrativa a través del Programa de Reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo, bajo sus directrices..</p>
<p><b>Art. 9</b> <b>Remisión de expediente.</b></p>	<p>En los casos en que haya lugar el Programa de Reparación de la Defensoría del Pueblo enviará el expediente documentado (donde se explicará las medidas de reparación integral adoptadas e implementadas).</p> <p>En los casos en que las víctimas no quieran acogerse a las medidas del Programa de Reparación de la Defensoría del Pueblo, deberán remitir al MJDHC, el expediente documentado.</p>
<p><b>Art. 10</b> <b>Procesos reparatorios en trámite.</b></p>	<p>En el caso de que al mismo tiempo mantenga un proceso de reclamación ante el Sistema Interamericano o Universal de Derechos Humanos, el MJDHC notificará a la Procuraduría General del Estado que se ha emprendido un proceso de negociación indemnizatoria con la víctima o personas beneficiarias, a fin de que a su vez se proceda a notificar al órgano competente del respectivo Sistema.</p>
<p><b>CAPÍTULO II</b> <b>DEL ACUERDO INDEMNIZATORIO</b> <b>SECCIÓN I</b></p>	

<b>FASE PREVIA A LA NEGOCIACIÓN</b>	
<b>Art. 11 Procedimiento.</b>	La Dirección de Derechos Humanos del MJDHC receptorá, examinará y registrará los expedientes de la Defensoría del Pueblo, para el inicio del proceso de negociación.
<b>Art. 12 Contenido del expediente.</b>	<p>El expediente de la Defensoría tendrá:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ficha de Datos Generales</li> <li>2. Copias simples de los documentos que acrediten la identidad o la filiación de la víctima directa o personas beneficiarias a ser indemnizadas;</li> <li>3. Copia con la recepción del acuerdo reparatorio suscrito por la Defensoría del Pueblo, debidamente informado a la Procuraduría General del Estado;</li> <li>4. En caso de ser cónyuge (presentar partida de matrimonio) o pareja en unión de hecho (presentar el instrumento público que declare la unión de hecho referida);</li> <li>5. Partida de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía (De ser beneficiario hasta el segundo grado de consanguinidad);y,</li> <li>6. Informe del Defensor del Pueblo, con el establecimiento de las medidas de reparación integral adoptadas.</li> </ol> <p>El MJDHC notificará a la víctima o personas beneficiarias con la aceptación a trámite y el inicio del proceso de negociación, dentro del plazo máximo de diez (10) días de recibido el expediente.</p> <p>En caso de que el expediente no reúna los requisitos señalados, no será aceptado a trámite de negociación y se procederá a su devolución.</p>
<b>SECCIÓN II PROPUESTA DE INDEMNIZACIÓN</b>	
<b>Art. 13. De la Propuesta de Indemnización</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Se acepta el expediente de la Defensoría del Pueblo</li> <li>b) La Dirección de DDHH en coordinación con la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MJDHC en 30 días presentará la Propuesta de Indemnización a la Comisión Negociadora.</li> </ol>
<b>Art. 14.</b>	La indemnización se considerará, de forma apropiada y proporcional por todos los perjuicios

<b>Indemnización</b>	<p>económicamente evaluables.</p> <p>La indemnización comprenderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daños materiales y/o inmateriales.</li> </ul>
<b>Art. 15 Del Daño Material</b>	<p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el daño emergente</li> <li>• el lucro cesante,</li> <li>• el daño físico y;</li> <li>• el detrimento debidamente comprobado del patrimonio al momento de la violación.</li> </ul>
<b>Art. 16 Del Daño Inmaterial o Moral.</b>	<p>Se entenderá por daño inmaterial o moral a la compensación económica por los sufrimientos tales como aflicciones, angustia, terror, impotencia, inseguridad, tiempo desde la denegación de justicia, cambios en el proyecto de vida, naturaleza y gravedad de la violación a los derechos humanos.</p> <p>En ningún caso la indemnización por daño inmaterial será superior a 280 salarios básicos unificados del trabajador en general.</p>
<b>CAPÍTULO III</b> <b>DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO INDEMNIZATORIO</b>	
<b>Art. 17 de las partes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión Negociadora y;</li> <li>• la víctima directa o persona(s) beneficiaria(s)</li> </ul>
<b>Art. 18 De la Convocatoria</b>	<p>Una vez presentada la Propuesta de Indemnización, en 15 días la Comisión Negociadora convocará a la víctima directa o la (s) persona (s) beneficiaria (s).</p> <p>A las audiencias de negociación, deberá convocarse de forma obligatoria a la Procuraduría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo.</p>
<b>Art. 19 Conformación de la Comisión Negociadora</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presidente: La/el Ministra/o del MJDHC a través del Subsecretaria/o DDHH.</li> <li>2. Vicepresidente: La Viceministra/o ó su delegado.</li> <li>3. Secretaria/o de la Comisión Negociadora: a Coordinador/a General de Asesoría Jurídica del MJDHC.</li> </ol> <p>El Procurador General del Estado o su delegada/o, quien autorizará la suscripción del convenio.</p> <p>La Defensoría del Pueblo podrá ser observadora a petición de la parte.</p>
<b>Art. 20</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocer la Propuesta de Indemnización;</li> </ol>

<b>Atribuciones de la Comisión Negociadora</b>	2. Disponer a la o el Secretario de la Comisión que realice la convocatoria al proceso de negociación; 3. Negociar los acuerdos indemnizatorios; 4. Establecer y convocar a nuevas audiencias de negociación; 5. Disponer la suscripción de los acuerdos indemnizatorios y las actas de imposibilidad de acuerdo; y, 6. Las demás que sean necesarias.
<b>Art. 21 Del Proceso de Negociación</b>	Las audiencias de negociación serán dirigidas por la o el Presidente de la Comisión; se realizarán en el menor número de sesiones posibles.
<b>Art. 22 Conclusión del Proceso de Negociación.</b>	El proceso de negociación termina con la suscripción de cualquiera de los siguientes instrumentos: 1. Acuerdo Indemnizatorio 2. Acta de Imposibilidad de Acuerdo
<b>Art. 23 Del contenido del Acuerdo Indemnizatorio.</b>	a) Número de Acuerdo indemnizatorio; b) Partes intervinientes; c) Antecedentes y fundamentación constitucional y legal; d) Acuerdos y compromisos de las partes; e) Cláusula de satisfacción de la víctima con la indemnización acordada; f) Forma de cumplimiento y plazo de pago; g) Efectos del acuerdo indemnizatorio; h) Lugar y fecha de suscripción; y, i) Firma de las partes intervinientes
<b>Art. 24 Prohibición.</b>	No se podrá recibir doble indemnización por los mismos hechos documentados por la Comisión de la Verdad, por lo que, no podrán demandar al Estado otra indemnización por el mismo hecho a través de la vía judicial, ni en el Sistema Interamericano o Universal de Protección a los Derechos Humanos (conforme al Art. 8 inciso segundo de la Ley de Víctimas).  Si existe acuerdo el MJDHC, notificará con el contenido del acuerdo a la Procuraduría General del

	Estado.
<b>Art. 25. De la suscripción del acuerdo indemnizatorio.</b>	<p>Para la suscripción del acuerdo indemnizatorio, la o el Presidente de la Comisión Negociadora, convocará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a las partes intervinientes,</li> <li>• al Procurador General del Estado y;</li> <li>• al delegado del Defensor del Pueblo</li> </ul> <p>Quienes suscribirán el Acuerdo Indemnizatorio en forma conjunta, en un solo acto y en las calidades que intervienen.</p>
<b>Art. 26 De la distribución del monto a indemnizar.</b>	<p>Se depositará en una cuenta única que de común acuerdo designen las personas beneficiarias, por un poder especial debidamente notariado.</p> <p>La distribución o reparto de la indemnización otorgada, será de única y exclusiva responsabilidad de las personas beneficiarias.</p>
<b>Art. 27 Del Pago.</b>	El Estado ecuatoriano, previa certificación presupuestaria, efectivizará el pago de la indemnización acordada por las partes, para cuyo efecto el MJDHC, coordinará con el Ministerio de Finanzas, a través de la notificación del respectivo acuerdo indemnizatorio.
<b>Art. 28 De los requisitos para el pago.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copia certificada del acuerdo indemnizatorio debidamente suscrito por las partes;</li> <li>2. Certificación presupuestaria; y,</li> <li>3. Certificado bancario de una cuenta única de la víctima directa o del apoderado o apoderada de las personas beneficiarias.</li> </ol>

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE ABOGADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, ANDREA ISABEL FLORES RUILOVA, C.I. 1723282123 autor del trabajo de graduación intitulado: “PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL ECUADOR: DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”, previa a la obtención del grado académico de **ABOGADO** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 19 de junio de 2015



1723282123

FIRMA Y CÉDULA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**FLORES RUILOVA  
ANDREA ISABEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SAN BLAS**  
FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-16**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

No. **172328212-3**



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FLORES TACURI CARLOS OSWALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**RUILOVA MALDONADO ANGELICA FEDELICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2012-12-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-12-27**



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



001079885





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**002**  
**002 - 0177**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**1723282123**  
CÉDULA  
**FLORES RUILOVA ANDREA ISABEL**

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
GUAMANI  
2  
JOSE PERAL  
ZONA

PARTIDO  
  
1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

